

ecología Política

Cuadernos de debate internacional

Cartografía y conflictos

Herramientas para resistir, movilizar y construir

Índice

EDITORIAL

INTRODUCCIÓN

10 EJATLAS, mapeo colaborativo como herramienta para el monitoreo de la (in)justicia ambiental

Leah Temper, Daniela del Bene, Lucía Argüelles y Yakup Çetinkaya

14 La gobernanza ambiental en América Latina. Mapeando miradas, dinámicas y experiencias

Barbara Hogenboom, Michiel Baud, Fabio de Castro y Mariana Walter

MAPTIVISMO: EXPERIENCIAS PRÁCTICAS

20 Mapeando conflictos ¿Hacia una nueva ecología política estadística? Entrevista a Joan Martínez Alier

Santiago Gorostiza

24 Mapeo 2.0. Ampliando los límites de la cartografía crítica

Raül Sánchez y Alfons Pérez

28 Talleres de mapeo. Recursos lúdicos y visuales para la construcción de conocimiento colectivo

Julia Risler y Pablo Ares

33 El uso de OpenStreetMap en el contexto humanitario

Entrevista a Séverin Ménard

36 «El barrio no se vende» Las *barriografías* de la Barceloneta como herramienta de resistencia vecinal frente al extractivismo urbano

Emma Alari Pahissa

42 Mapeando el procesamiento de basura electrónica en Agbogbloshie, Ghana

Rafael Fernández-Font Pérez

GEOGRAFÍAS DE LA CONFLICTIVIDAD

48 Consultas comunitarias y vecinales contra la minería metalífera en América Latina (2002-2012)

Mariana Walter y Leire Urkidi

54 Hacia una interpretación analítica de los logros para la justicia ambiental en casos de resistencia anti-minera

Beatriz Rodríguez-Labajos y Begüm Özkaynak

63 Contra la velocidad: movimientos locales contra mega-infraestructuras «inútiles e impuestas»

Alfred Burballa Noria y Leah Temper

69 Conflictos ambientales en torno a proyectos extractivos y agrarios en Madagascar

Vahinala Raharinirina

76 Conflictos ambientales en Colombia: actores generadores y mecanismos de resistencia comunitaria

Mario Alejandro Pérez -Rincón

83 Los colores de la tierra. Permanencia y discontinuidades del apartheid en Namibia

Pablo Gilolmo Lobo

POSTALES DEL ATLAS DE JUSTICIA AMBIENTAL

- 88 Cartografía de los conflictos socioecológicos en el Estado español**
Amaranta Herrero Cabrejas
- 90 Conflictividad socio-ambiental en el Ecuador: un inventario de conflictos en el periodo 1982-2013**
Sara Latorre, Katharine N. Farrell y Joan Martínez-Alier
- 93 Comercio de biomasa y acaparamiento de tierra: nuevas dimensiones de las relaciones Sur-Sur**
Lucía Argüelles, Leah Temper y Beatriz Rodríguez-Labajos

REDES DE RESISTENCIA

- 98 New York: un paso más del movimiento contra el cambio climático**
Josep Maria Antentas

- 102 El petróleo y el agua en el río bidireccional**
Kevin Buckland

REFERENTES AMBIENTALES

- 106 Las fisuras del espacio abstracto hacia el diferencial: los conflictos ambientales entendidos a través de Henri Lefebvre**
Carolina Herrmann Coelho-de-Souza
- 109 Giro descolonial y nuevas geocartografías**
Milson Betancourt Santiago

CRÍTICA DE LIBROS, INFORMES Y WEBS

- 114 Hollando espacios (urbanos) ignotos. Explore Everything: Place-Hacking the City**
Santiago Gorostiza

Este número de Ecología Política se ha beneficiado particularmente del proyecto «Metabolismo Social y Conflictos Ambientales» del Ministerio de Ciencia e Innovación de España (CSO2010-21979, 2010-2013) dirigido por Joan Martínez Alier y Marta Conde. Asimismo ha sido co-editado y presenta resultados de los proyectos europeos EJOLT («Environmental Justice Liabilities and Trade», www.ejolt.org, 266642, 2011-2015) y ENGOV («Gobernanza Ambiental en América Latina y el Caribe», www.engov.eu, 266710, 2011-2015). La edición también ha contado con el apoyo de una «seed grant» del ISSC en el marco del programa «Transformations to Sustainability» que forma parte de la iniciativa «Future Earth». Las opiniones expresadas en los artículos son de exclusiva responsabilidad de los autores y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de las agencias que colaboraron con el financiamiento de la investigación y publicación.

Editores:

Joan Martínez-Alier, Ignasi Puig Ventosa, Anna Monjo Omedes, Miquel Ortega Cerdà.

Editoras invitadas:

Marta Conde, Leah Temper y Mariana Walter

Coordinación editorial:

María Mestre (secretariado@ecologiapolitica.info)

Gestión de artículos:

Irmak Ertör (articulos@ecologiapolitica.info)

Subscripciones y venta:

Mar Santacana (subscriptores@ecologiapolitica.info)

Diseño, maquetación e impresión:

El Tinter, SAL.

Mapa de la cubierta:

British Library Collection

Secretariado:

Fundació ENT.

C/Sant Joan 39, primer piso.

08800. Vilanova i la Geltrú. España.

Tf/Fax: +34 938935104.

Edita: Fundació ENT / Icaria editorial.

Consejo de Redacción:

Gualter Barbas Baptista, Iñaki Bárcena Hinojal, Gustavo Duch, José Aniol Esteban, Eva Hernández, Mariana Walter, Santiago Gorostiza, Marc Gavaldà, Gloria Gómez, David Llistar, Florent Marcellesi, Patricio Igor Melillanca, Ivan Murray, Marta Pahissa, Jesús Ramos Martín, Albert Recio, Tatiana Roa, Jordi Roca Jusmet, Carlos Santos, Carlos Vicente, Núria Vidal y Joseph H. Vogel.

Consejo Asesor:

Federico Aguilera Klink, Elmar Altaver, Nelson Álvarez, Manuel Baquedano, Elisabeth Bravo, Esperanza Martínez, Jean Paul Deléage, Arturo Escobar, José Carlos Escudero, María Pilar García Guadilla, Enrique Leff, José-Manuel Naredo, José Augusto Pádua, Magaly Rey Rosa, Silvia Ribeiro, Giovanna Ricoveri, Victor Manuel Toledo, Juan Torres Guevara, Ivonne Yanez.

Impreso en Barcelona

El Tinter SAL, La Plana, 8 (Barcelona)

Diciembre de 2014. Revista bianual

ISSN: 1130-6378

Dep. Legal: B. 41.382-1990

Ecología Política en internet



<http://www.ecologiapolitica.info>



<http://www.facebook.com/revistaecopol>



http://twitter.com/Revista_Eco_Pol/



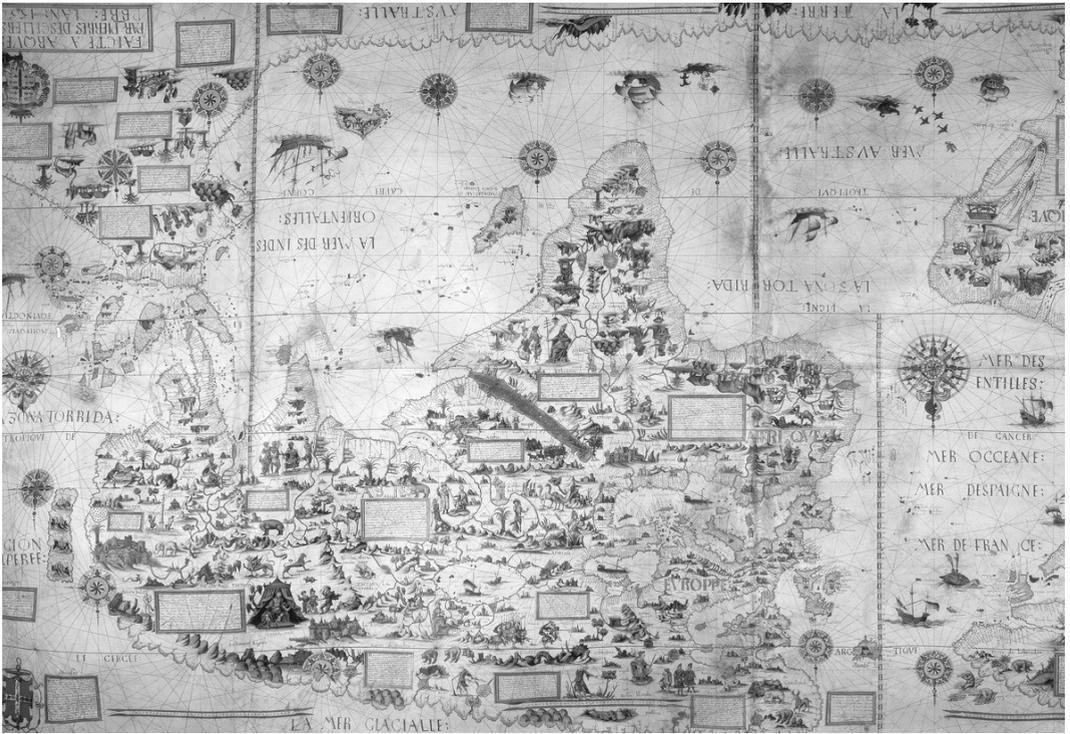
Licencia Creative Commons de Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España

Usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, y hacer obras derivadas bajo las condiciones siguientes:

- **Reconocimiento.** El material puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos.
- **No comercial.** No puede utilizar esta obra para fines comerciales.
- **Compartir igual.** Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a esta.

Esto es un resumen legible del texto legal (la licencia completa) se encuentra disponible en <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.es>

Editorial



Los mapas no solo representan el mundo, lo recrean y transforman nuestro entendimiento del mismo y de los lugares que representan.

En 1854 John Snow presentó el primer mapa de epidemiología popular de la historia, un mapa que cambió la forma en que se entendía el mundo. Antes del mapa de cólera de Snow se pensaba que esta enfermedad se contagiaba por vía aérea. En un esfuerzo para probar que no era así, Snow mapeó el brote de cólera en el distrito de Soho de Londres. A través de una representación visual de las muertes y de las fuentes de agua, se hizo evidente que los casos se agrupaban en torno a una bomba de agua de la calle Broad (actualmente Broadwick). Éste es el primero de muchos ejemplos de mapeo para estudios epidemiológicos y como herramienta de activismo.

Avanzamos 150 años para llegar al norte de la Amazonía peruana. Un territorio afectado desde finales de la década de 1960 por la

industria petrolera. Recientemente, una iniciativa científica ciudadana aprovecha nuevas tecnologías de almacenamiento en la nube y herramientas de geo-referenciación (GPS) para implementar un monitoreo participativo de derrames de petróleo para y por las comunidades indígenas. El proyecto ha logrado que los derrames sean difundidos por medios de difusión nacionales e internacionales forzando a las empresas petroleras a responder y hacerse responsables por sus infraestructuras deficientes y su poca reacción.

Pero, al mismo tiempo, estas nuevas herramientas de geo-activismo plantean algunas cuestiones difíciles. Como señala Martí Orta, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) también pueden volverse una herramienta de «asimilación epistemológica», una nueva forma de asimilar las culturas indígenas a la sociedad occidental. Además, los SIG son altamente técnicos y costosos, especialmente para las comunidades indígenas, que

no siempre tienen internet y ordenadores, ni siquiera electricidad. Esto implica que aun cuando son participativos, estos procesos son generalmente impulsados y controlados por personas externas.

La cuestión de si los mapas, las tecnologías de análisis espacial, los conocimientos cartográficos pueden ser utilizados para empoderar la resistencia recorre este número de *Ecología Política*. Más ampliamente examinamos cómo nuevas tecnologías para recopilar y sistematizar información están permitiendo innovadoras formas y articulaciones entre activismo e investigación. Vemos, por ejemplo, como redes de activistas como OC-MAL (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina) visibilizan conflictos mediante inventarios y mapas. Los artículos presentados abordan cuestiones relacionadas con el acceso a la información, cómo la información es recopilada y representada, por quién, para quién y cómo los mapas son usados para crear el espacio y delimitar lugar y territorio.

Este número de *Ecología Política* se organiza en 7 secciones. La primera sección introduce conceptos clave de los proyectos europeos EJOLT y ENGOV y del proyecto español «Metabolismo Social y Conflictos Ambientales», todos ellos desarrollados entre 2011 y 2015 en el ICTA de la Universidad Autónoma de Barcelona y otras organizaciones activistas o académicas. La segunda sección, aborda ejemplos prácticos del uso de mapas para el activismo, lo que podemos denominar «maptivismo». Estas experiencias de mapeo permiten construir historias vinculadas a lugares, visualizar datos y elaborar argumentos. Vemos que las cartografías son usadas para desafiar el poder, reclamar el territorio y repensar los lugares, construyendo relaciones y dando significado a los lugares. También se ilustra cómo estos procesos se llevan a cabo utilizando desde tecnologías muy sencillas (lápiz y papel) hasta otras más sofisticadas (drones).

En la sección sobre maptivismo, Joan Martínez Alier explica a través de una entrevista el proyecto EJOLT (www.ejolt.org) y su atlas global

de conflictos de justicia ambiental (www.ejatl.org). Raul Sánchez y Alfons Pérez enfatizan la importancia de internet para el despegue de nuevas formas de activismo. Julia Risler y Pablo Ares del grupo iconoclastas nos proponen el mapeo como herramienta de lucha y exponen cómo, a través de talleres de mapeo colectivo, se nutre el desarrollo de idearios colectivos sobre el presente y el futuro. Una entrevista a Séverin Ménard examina plataformas como Open Street Maps. Consciente del poder de los mapas que representan nuestro entorno, argumenta que no podemos dejar esto en manos de los googles y apples del mundo. Otros ejemplos prácticos de maptivismo son incluidos, como la utilización de drones descrita por Rafael Fernández-Font que permite visibilizar las diferentes actividades en torno del reciclaje de e-waste en Ghana o los mapas desarrollados por colectivos en la Barceloneta en su defensa de este barrio de Barcelona. Emma Alari nos presenta mapas fruto de esta lucha.

La tercera sección, geografías de la conflictividad, examina cómo ejercicios de mapeo contribuyen a entender los cambios ambientales y sociales, así como visibilizar los conflictos a escalas más amplias. Se presentan seis casos en los que desde diferentes aproximaciones, investigadores utilizan bases de datos y diversas formas de cartografía para analizar las relaciones que se tejen en el espacio y el tiempo. En unos casos, las investigadoras mapean y examinan de forma sistemática un tipo determinado de conflicto o estrategia de movilización, sus articulaciones y conexiones. Así, Mariana Walter y Leire Urkidi estudian el surgimiento y difusión de consultas comunitarias como estrategia para frenar proyectos mineros en América Latina, desde la pionera experiencia de Tambogrande en el año 2002 hasta el año 2012. A través de estas consultas, las comunidades están redibujando las escalas de toma de decisión en el control de sus territorios. Beatriz Rodríguez-Labajos y Begüm Özkaynak examinan 354 casos de conflictos mineros en América Latina

provenientes del EJaAtlas combinando datos cualitativos y cuantitativos utilizando métodos de estadística descriptiva. Alfred Burballa Noria y Leah Temper reflexionan sobre la experiencia de la red europea GPII contra los Grandes Proyectos Inútiles e Impuestos, examinando las diferentes narrativas que impulsan estas infraestructuras como el aeropuerto de Nantes o el TAV de Turín a Lyon, y cómo está creciendo la movilización social contra ese derroche. Por otra parte, otras investigaciones presentadas analizan las causas, tendencias y principales características de los conflictos en un determinado país. Vahinala Raharinirina recopila y analiza 14 casos de conflictos ambientales locales en Madagascar, examinando los procesos históricos y socio-políticos en los que se enmarcan y los diversos actores que promueven y se oponen a las actividades en disputa. Mario Alejandro Pérez-Rincón presenta un amplio inventario de conflictos ambientales en Colombia, identificando las actividades y actores generadores de conflicto, y los mecanismos de resistencia desplegados por los afectados, en un ejercicio de ecología política estadística. Por último, Pablo Gilolmo Lobo realiza un análisis espacial del reparto actual de la tierra en la región de Otjozondjupa (Namibia), concluyendo que la diferencia racial como criterio de acceso a la tierra ha sido reciclada bajo un criterio de clase y productivista.

En la cuarta sección, postales del atlas de justicia ambiental, se presenta en forma de fichas breves tres ejemplos de procesos de mapeo sistemático de conflictos en el marco del EJaAtlas. Los conflictos en España fueron mapeados por Amaranta Herrero y los de Ecuador por Sara Latorre. La ficha elaborada por Lucía Argüelles, Leah Temper y Beatriz Rodríguez-Labajos presenta un análisis de conflictos de acaparamiento de tierras en África, reflexionando sobre su relación con el HANPP (Apropiación Humana de la Producción Primaria Neta) y las nuevas relaciones Sur-Sur.

En la sección sobre redes de resistencia nos desplazamos a Nueva York dónde nos sumamos a la manifestación contra la inacción del poder político ante el cambio climático. Kevin Buckland nos muestra Nueva York y el Río Hudson a través de una travesía reivindicativa. Josep Maria Antentas reflexiona sobre diferentes experiencias de movilización en el contexto de la marcha sobre el cambio climático.

Por último, en la sección de referentes ambientales, en una revisión de Carolina Herrmann Coelho de Souza, se presentan elementos clave del pensamiento de Henri Lefebvre para entender la geografía crítica. Milson Betancourt revisa algunas claves de la escuela latinoamericana compuesta por intelectuales como Walter Mignolo o Arturo Escobar que abordan el giro descolonial y reflexionan sobre otras cartografías.

Hoy en día parece que todo el mundo está mapeando. Los artículos de este número de Ecología Política nos recuerdan que los imaginarios geográficos son lugares importantes de lucha socio-ambiental y nos muestran cómo pueden crear nuevas posibilidades geopolíticas. Sin embargo, en medio de esta manía por mapear, debemos ser conscientes de qué información se usa, cómo se usa, de quién la crea y quién tiene acceso, a quién le sirve, así como los potenciales logros y peligros de mapear lo no mapeado y visibilizar lo invisible. Finalmente, los mapas contienen solo una selección arbitraria de información y esconden más de lo que muestran. Pueden ser un vehículo para desafiar el poder solo si las prácticas y los conocimientos científicos que enmarcan su creación son también parte de un proceso transformador. ■

Marta Conde, Leah Temper, Mariana Walter



Pueblos

Información y Debate

Monográfico sobre feminismo
Vida • Cuerpos • Economía •
Derechos • Cooperación • Comunicación
• Alternativas • Sueños • Luchas •
Futuro • Alianzas • Solidaridad • Cuidados

Edición en papel (trimestral) y digital
E @revista_pueblos - info@revistapueblos.org
www.revistapueblos.org





UAB
Universitat Autònoma de Barcelona



Revista Iberoamericana de Economía Ecológica ISSN 13902776

Último número publicado: Volumen 22.

Alimentos kilométricos y gases de efecto invernadero: Análisis del transporte de las importaciones de alimentos en el Estado español (1995-2007). *Xavier Simón Fernández, Damián Copena Rodríguez, David Pérez Neira, Manuel Delgado Cabeza, Marta Soler Montiel.*

Análisis financiero y percepción de los servicios ambientales de un sistema silvopastoril: un estudio de caso en los Tuxtlas, México. *Sophie Ávila Foucat y Daniel A. Revollo Fernández.*

Debilidad regulatoria de los transgénicos en Guatemala; alternativas, riesgos, amenazas e intereses. *Gesly Anibal Bonilla Landaverry.*

Obstáculos hacia la implantación de un sistema participativo de garantía en Andalucía. *Nádia Velleda Caldas, Flávio Sacco dos Anjos y Camen Lozano Cabedo.*

“Fronteiras planetárias” e limites ao crescimento: algumas implicações de política econômica. *Daniel Caixeta Andrade y Petterson Mollina Vale.*

Indústria de Reciclados no Brasil: estrutura produtiva e contribuição socioambiental nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande em Mato Grosso. *Hélde Domingos, Alexandre Magno De Melo Faria, Índio Campos, José Ramos Pires Manso, Dilamar Dallemole.*

Neoliberalismo y naturaleza: la “comoditización” de los hidrocarburos en Argentina (1989-2001). *Ignacio Sabbatella.*

Descarga gratuita, números anteriores y más información en <http://www.redibec.org>

**La economía está por todas partes.
Entiéndela con**

**Alternativas
económicas**



¡Suscríbete!
www.alternativaseconomicas.coop

Introducción

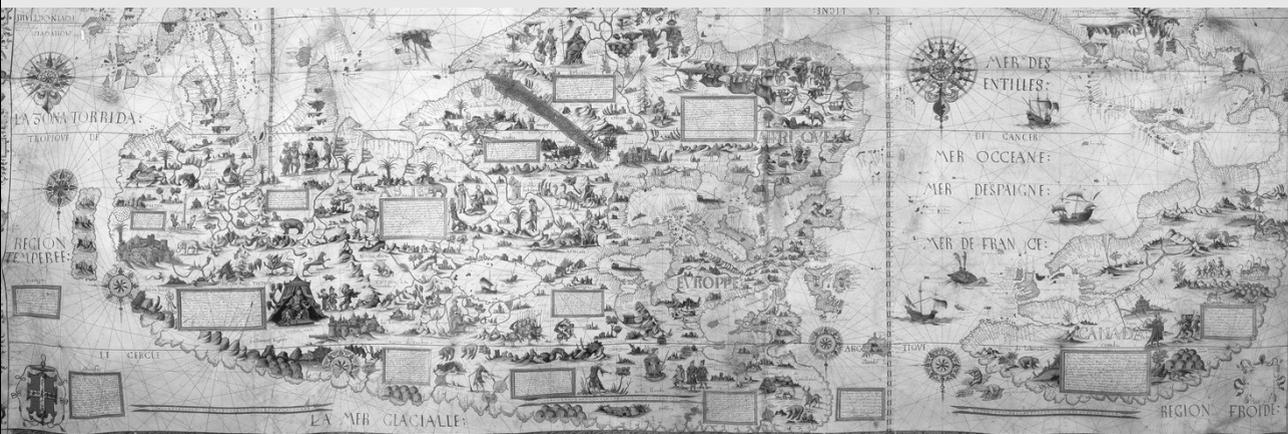
EJAtlas, mapeo colaborativo como herramienta para el monitoreo de la (in)justicia ambiental

Leah Temper, Daniela del Bene, Lucía Argüelles y Yakup Çetinkaya

La gobernanza ambiental en América Latina

Mapeando miradas, dinámicas y experiencias

Barbara Hogenboom, Michiel Baud, Fabio de Castro y Mariana Walter



EJAtlas, mapeo colaborativo como herramienta para el monitoreo de la (in)justicia ambiental

Leah Temper, Daniela del Bene,
Lucía Argüelles y Yakup Çetinkaya

Los mapas del mundo en la Edad Media eran a menudo representados con el Este o el Sur hacia arriba. La posición del Norte en la parte de arriba de los mapas es una práctica arbitraria y relativamente nueva, que sugiere la aceptación de un orden del mundo en particular. Como Bernard Nietschmann Nietschmann (1995, 32) dijo: «más territorio indígena ha sido reclamado por medio de mapas que de armas». El corolario es cierto, y también lo es su opuesto, convirtiendo a los mapas en armas de liberación y de explotación al mismo tiempo (Crampton, 2006). Hoy el mapa invertido puede considerarse un símbolo de la emergente cartografía crítica (Crampton, 2009; Wood, 2010), que reconoce que los mapas han sido históricamente objetos de poder, creando fronteras, reforzando el control y sirviendo como herramienta indispensable para la expansión imperial. La cartografía crítica pretende comprender el vínculo entre el conocimiento geográfico y el poder, y proponer así un proceso para invertir este nexo, ilustrando formas de injusticia y sirviendo de herramienta para el activismo y la lucha.

Usando este pensamiento el proyecto EJOLT ha adoptado el mapa invertido como *logo*. EJOLT significa «Organizaciones de Justicia Ambiental, Responsabilidades y Comercio» (por sus siglas en inglés: Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade). Es un proyecto financiado por la UE cuyos objetivos son la producción de mapas de injusticias ambientales, la creación de redes globales entre las que luchan contra éstas y la influencia de las leyes y políticas que afectan,

o crean, estos conflictos. EJOLT se basa en la investigación cooperativa y pretende aportar información sobre dos asuntos de gran interés para la sociedad: «¿Cuáles son las causas de los crecientes conflictos de distribución ecológica en diferentes escalas?» y «¿Cómo pueden esos conflictos convertirse en fuerzas que apunten hacia la sostenibilidad ambiental?» (Martinez-Alier et al., 2011).

Una de los medios principales para profundizar en estas cuestiones es a través de la creación de un inventario de conflictos socio-ambientales y de resistencias a nivel global, el Atlas de la Justicia Ambiental (EJAtlas por sus siglas en inglés; www.ejatl.org). Dibujando los «mapas de reclamaciones» y las «luchas localizadas», el proyecto busca documentar y apoyar la lucha por la Justicia Ambiental. Este ejercicio requiere la interconexión de múltiples disciplinas, no explorada previamente: justicia ambiental, economía ecológica y metabolismo socio-económico, ecología política y la teoría de los movimientos sociales.

Resultados y potencial de análisis

El EJAtlas fue presentado el 19 de marzo de 2014 en la sede de UNEP en Bruselas. Actualmente contiene más de 1200 casos, y el número va en aumento. Los conflictos están relacionados mayoritariamente con la extracción industrial de recursos naturales (minería, gas y petróleo, deforestación), con la producción industrial de biorecursos (plantaciones de árboles, granjas de camarones) y con la gestión de deshechos (*e-waste*, incineración, vertederos).

Más de 130.000 usuarios han visitado la página del proyecto EJOLT hasta la fecha, con 500.000 visitas a la página de EJAtlas. Desde su lanzamiento el Atlas ha sido mencionado más de 130 veces en prensa en 21 países, incluyendo *Science Magazine*, la BBC o *Le Monde*. En India, el Live Mint del *Wall Street Journal* explicó cómo el Atlas refleja que la globalización de las redes sociales, el activismo y las responsabilidades haciendo que el examen que la sociedad civil hace de las empresas se torne más exigente.

El código utilizado para presentar los resultados está construido sobre una estructura de datos diseñada explícitamente para la usabilidad de los datos en el contexto de la investigación y la academia. Las personas usuarias son invitadas a navegar en el Atlas de diferentes maneras, a través de sus diferentes funcionalidades. Por ejemplo, los mapas destacados muestran una selección de conflictos sobre temas determinados, además de información adicional relevante para cada caso, y capas vectoriales que ayudan a visualizar el contexto en el que estos mapas se enmarcan. Con la función «búsqueda y filtro», las usuarias pueden realizar una selección precisa de los casos con todos los campos presentes en la ficha y ajustar su selección acorde a sus necesidades. Además, el mapa puede ser navegado por países, compañías, tipo de conflicto, mercancía, etc.

A inicios de 2015 verá la luz el segundo lanzamiento del EJAtlas, en la que se integrará la información referente a los datos de los conflictos con otro tipo de indicadores espaciales mediante SIG (Sistema de Información Geográfica). Los indicadores espaciales que se usarán son tanto biofísicos como socio-económicos, y entre otros incluyen: densidad de población, reservas indígenas, áreas protegidas, niveles de pobreza por municipio, concesiones mineras y petrolíferas, etc.

Además del análisis espacial que estos indicadores permiten realizar, estas capas resultan útiles para aportar una perspectiva diferente a la visualización del mapa de conflictos, ya que presentan información que puede cambiar radicalmente el sentido, el significado, y la relevancia del mapa. Tenemos claros ejemplos en este sentido. Por ejemplo: el mapa de reactores nucleares

publicado por The Guardian¹ se percibe y entiende de manera diferente si le superponemos una capa de riesgo sísmico. Éste es el objetivo de los «Featured Maps» que serán integrados en el EJAtlas en su segundo lanzamiento (estimado para noviembre 2014), y que presentará mapas temáticos o regionales, incluyendo diferentes indicadores espaciales. Por ejemplo, en el mapa de minería en Latinoamérica se superpondrá el mapa de depósitos minerales con las zonas de alta biodiversidad. O el mapa de India, que contrastará los conflictos ambientales con el nivel de escasez de agua en las cuencas o con el volumen de agua usado por las centrales térmicas para refrigeración. Esperamos que esta combinación de factores ayude a comprender las causas y consecuencias de los conflictos ambientales contenidos en el EJAtlas.

La principal dificultad de esta tarea reside en la disponibilidad de los datos. Hay muchos indicadores que aportarían enormemente a comprender causas y consecuencias pero que no se encuentran disponibles en forma espacial (a veces inaccesibles por razones económicas) o ni tan siquiera de manera estadística tradicional (en cuyo caso el proceso para incluir el indicador pasa por un paso de digitalización intermedio). En concreto, echamos en falta datos socio-económicos a escala municipal o regional, como datos del PIB o los flujos de extracción, que si bien a nivel de país resultan interesantes para comprender las dinámicas globales, no sirven para explicar diferencias territoriales sociales y económicas que también existen dentro de los países. Esto es útil para analizar, por ejemplo, dónde se produce la energía dentro de un país (y por tanto, dónde se sufre la contaminación o la extracción derivada) y dónde se consume, o para comparar dónde se deforesta (y por tanto donde los conflictos surgen) y donde van a parar los beneficios de esa actividad (en forma de incrementos del PIB).

¹ <http://www.theguardian.com/news/datablog/2011/mar/18/nuclear-reactors-power-stations-world-list-map#data>

Ecología Política Estadística

El EJAtlas también supone una herramienta para practicar lo que llamamos «ecología política estadística». El gran número de conflictos documentados y georreferenciados que contiene su base de datos permite una comparación de casos emblemáticos entre distintas geografías, áreas temáticas y escalas geográficas y temporales. Esto sirve por ejemplo para entender factores comunes entre regiones, o para obtener una mirada del papel que las organizaciones de justicia ambiental juegan en los conflictos, y constituye también una base sólida para la selección de casos de estudio y para la realización de análisis de áreas o de temas.

Con el fin de realizar una primera fotografía de los conflictos contenidos en el Atlas, y de la situación global de la justicia ambiental, por ende, se ha llevado a cabo un análisis de frecuencia de los diferentes campos y variables contenidos en el mapa. Teniendo en cuenta que la base de datos no es completa, y atendiendo a las diferencias de cobertura en diferentes países y de tipo de conflicto (determinados en parte por las localizaciones e intereses de los colaboradores) los datos recogidos en el Atlas indican las tendencias sobre qué mercancías, qué lugares y qué compañías o actores son mayoritariamente partícipes en los conflictos. El artículo de Rodríguez-Labajos y Ozkaynak en este número es otro ejemplo del tipo de análisis de datos que el EJAtlas permite.

El análisis multivariante sirve para entender la contribución de factores que influyen en un evento o resultado. Aplicando este tipo de análisis a los conflictos de EJAtlas se pueden deducir las formas de movilización o los actores determinantes que afectan a un tipo de resultado (por ejemplo victoria judicial, retirada de inversores, etc.), o los factores socioeconómicos o características del proyecto que llevan a adoptar determinado tipo de formas de movilización (disruptivas o no disruptivas).

Finalmente, vale la pena señalar que el uso de herramientas GIS para el análisis estadístico de datos permite sobreponer la localización de los conflictos con indicadores socio-económicos o

biofísicos georreferenciados. Esta superposición ha permitido añadir a la descripción de los conflictos factores como tipo de uso de la tierra, datos geológicos, densidad de población, niveles de degradación del suelo y deforestación, porcentaje de población indígena por municipio, niveles de pobreza, etc. Se ha realizado también un trabajo preliminar en la correlación de indicadores de metabolismo social, como la Apropiación Humana de la Productividad Primaria Neta (HANPP por sus siglas en inglés), con los diferentes tipos de conflicto, un análisis que ayuda a entender qué conflictos ocurren más a menudo en las «fronteras de las mercancías» (áreas con bajo HANPP) y por tanto bajos niveles de perturbación o colonización de ecosistemas. También se ha analizado la correlación entre HANPP e intensidad de conflicto para cada categoría. Los resultados preliminares indican mayores intensidades en zonas donde ya existe una alta apropiación de recursos, lo que propicia la competición por éstos.

Conclusión

Este artículo ha presentado algunas de las principales características del EJAtlas. Una de las mayores fortalezas del proyecto es el esfuerzo de ser lo más participativo posible y asegurar al mismo tiempo buenos estándares en la recogida de datos a través de la colaboración entre activistas, investigadores y activistas-investigadores, acompañando por un proceso de revisión y control de calidad. El proceso de diseño y creación del EJAtlas es colaborativo e iterativo, un proceso de GIS participativo que aún está despegando. El EJAtlas puede ser considerado como lo que ha sido llamado un «híbrido colectivo de investigación» por Gibson-Graham (de Callon et al., 2002; Callon y Caliskan, 2005). El rol central de la «epistemología performativa de investigación» es incrementar el interés hacia los entendimientos escondidos y alternativos del mundo, y haciendo esto, convertirlos en objetos potenciales de políticas y debates (Gibson-Graham 2008:620).

Mediante cooperación con las Organizaciones de Justicia Ambiental y sus redes esperamos contribuir al movimiento por la Justicia Ambiental

global, que está en aumento, para que continúe tomando forma globalmente, formulando posiciones más estratégicas y más inclusivas, a la vez que mantenga los matices locales. Esperamos ser capaces de describir esos procesos y de analizar nuevos conceptos provenientes de los movimientos sociales, y mapear los patrones de la participación en éstos de mujeres, indígenas o sindicatos, así como sus diferentes formas de intervención en los conflictos. Creemos que el número de conflictos va en aumento, especialmente a lo largo de las fronteras de extracción y también como resultado de la creación de nuevas «commodities» (derivadas por ejemplo de la reciente inversión especulativa en tierras o en servicios ecosistémicos). Más allá de investigación en ecología política, el mapa quiere ser social y políticamente relevante, apuntando directamente a los actores detrás de las injusticias, y servir como herramienta para activistas, ilustrando asuntos ambientales críticos e alimentando el debate público sobre la distribución de riesgos, cargas y beneficios.

La globalización del marco de Justicia Ambiental pretende también resaltar que los conflictos no son NIMBYs («Not In My Backyard»: No en mi Patio Trasero), si no generalmente son NIABYs («Not In Anybody's Backyard»: No en el Patio Trasero de Nadie) o incluso NOPEs («Not On Planet Earth»: No en el Planeta Tierra). Parar un proyecto en un lugar no significa que esa actividad pueda moverse a otro sitio. Las protestas y los discursos muestran que la oposición no está relacionada a la localización *per se*, si no a la idea general de desarrollo, explotación y extracción. En consecuencia el movimiento debe luchar por una mayor soberanía sobre el comercio multilateral, las instituciones de crédito y las entidades reguladoras, así como para promover el control de las responsabilidades de corporaciones y gobiernos a través de mecanismos legales a escala nacional e internacional. El reconocimiento de las cadenas globales de responsabilidades es un precursor del reconocimiento de la deuda ecológica que parte del movimiento reclama. En palabras de Schlosberg (2004): «Lo interesante de comunicar diversas batallas, incluso aquellas surgidas en con-

tinentes remotos, o en la profundidad el bosque, es dar a aquellos, lejanos o diferentes a nosotros, voz, y reconocer su situación. La explosión de los diferentes discursos de injusticia, hacer esos discursos disponibles a través de la Web, medios alternativos o tradicionales, y atraer la atención a la diversidad de injusticias ambientales a través de acciones de la sociedad civil internacional, forja empatía, reconocimiento y unidad, incluso cruzando grandes distancias». ▀

Referencias

- CALLON, M. y Caliskan, K. (2005), *New and Old Directions in the Anthropology of Markets*. Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research: New York.
- CRAMPTON, J. W., (2006), *An Introduction to Critical Cartography*, ACME (An International EJournal for Critical Geographies) vol. 4 (1). p. 11-33.
- CRAMPTON, J. W., (2009), *Mapping: a critical introduction to cartography and GIS*, John Wiley & Sons.
- GIBSON-GRAHAM, J.K., (2008), *Diverse economies: performative practices for 'other worlds'*, *Progress in Human Geography* vol. 32 (5), p. 613-632.
- MARTINEZ-ALIER J., HEALY H., TEMPER L, WALTER, M., RODRIGUEZ-LABAJOS, B., GERBER, J. F. y CONDE, M., (2011), *Between science and activism: learning and teaching ecological economics with environmental justice organizations*, *Local Environment* vol. 16 (1), p. 17-36.
- NIETSCHMANN, B., (1995), *Defending the Miskito Reefs with Maps and GIS: Mapping With Sail, Scuba, and Satellite*, *Cultural Survival Quarterly* vol. 18 (4), p. 34-37.
- SCHLOSBERG, D., (2004), *Reconceiving Environmental Justice: Global Movements And Political Theories*, *Environmental Politics* vol. 13 (3), p. 517-540.
- WOOD, D. F., y KRYGIER, J., (2010), *Rethinking the power of maps*. The Guilford Press: Nueva York y Londres

La gobernanza ambiental en América Latina

Mapeando miradas, dinámicas y experiencias¹

Barbara Hogenboom, Michiel Baud,
Fabio de Castro y Mariana Walter

En los últimos años los países latinoamericanos han ocupado un papel clave en los debates globales sobre las causas y soluciones a los problemas ambientales y al cambio climático. Esta región se ha constituido en un espacio de innovación y búsqueda de alternativas donde movimientos sociales, gobiernos y empresas se encuentran y desencuentran, reconfigurando la gobernanza ambiental. En este artículo se presentan algunos de los marcos conceptuales del proyecto de investigación ENGOV sobre «Gobernanza Ambiental en América Latina y el Caribe: Desarrollando Marcos para el Uso Sostenible y Equitativo de los Recursos Naturales» (*www.engov.eu* 2011-2015). El artículo presenta tendencias y procesos clave en la gobernanza ambiental de la región, incluyendo dinámicas espaciales y escalares centrales. ENGOV es un proyecto de investigación financiado por la Unión Europea y constituido por un consorcio de 10 centros de investigación de Europa (Holanda, Francia, España, Noruega) y América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México) que co-patrocina esta edición especial de la revista *Ecología Política*, presentando algunos de sus resultados entre sus contenidos.

La gobernanza ambiental en América Latina

La gobernanza ambiental en América Latina ha atravesado importantes transformaciones en las últimas décadas. Desde la mitad de los años ochenta

en adelante se dio una tendencia generalizada a abandonar los arreglos institucionales centrados en el Estado. El énfasis en la privatización y descentralización impulsó nuevos enfoques del manejo de los recursos naturales que enfatizaron el autogobierno y mayores niveles de participación para la sociedad civil y las empresas privadas. Las políticas neoliberales promovieron en muchas ocasiones la privatización de recursos naturales tales como agua, bosques, tierra y recursos pesqueros, produciendo importantes impactos socioambientales en la región (Liverman y Silvina Vilas, 2002). En paralelo, se desarrollaron alianzas entre organizaciones de la sociedad civil, ONG (internacionales) e instituciones académicas, y emergieron perspectivas alternativas de gobernanza para los usuarios locales y comunidades. Esta corriente abrió camino a procesos de «glocalización» que vincularon actores locales y globales en el desarrollo de enfoques locales para el manejo de recursos naturales. Pese a ello, la desigualdad persistente, la pobreza, la corrupción, la violencia, la limitada capacidad institucional y el poder de las élites con frecuencia profundizaron las desigualdades de poder e inhibieron la implementación efectiva de tales iniciativas (Larson, 2003).

En la década pasada, nuevos cambios políticos y económicos nuevamente influenciaron fuertemente la gobernanza ambiental en la región. A escala nacional, varios partidos y candidatos post-neoliberales (con frecuencia de izquierda) que provenían de fuera de la élite establecida fueron electos. Sus agendas políticas prometieron el cambio del modelo de desarrollo económico, democratizar los procesos de toma de decisiones e intensificar la lucha contra la pobreza y la exclusión social, política y

1. Este artículo se basa en la publicación: HOGENBOOM, B., BAUD, M. y DE CASTRO, F. (2012), *gobernanza ambiental en América Latina: hacia una agenda de investigación integradora*. Revista del Centro Andino de Estudios Internacionales, vol. 12, p.57-72

cultural. En su discurso, muchos de estos gobiernos enfatizaron la necesidad de reformas (radicales) para resolver los problemas sociales y económicos de una manera sustentable, basada en la asociación entre actores estatales y no estatales. En este contexto, los discursos ambientales, las identidades indígenas y las demandas y movilizaciones por justicia social crecientemente se desplazaron «hacia arriba», desde las arenas activistas hacia las instituciones políticas nacionales y estatales.

A nivel global, una configuración más multipolar y de mercado reemplazó gradualmente la larga historia de dependencia económica de América Latina. No sólo las relaciones comerciales y de inversión globales se han diversificado, sino que también se han desarrollado un conjunto de iniciativas para la integración regional. Brasil, por ejemplo, ha demostrado ser uno de los principales mercados mundiales emergentes. Estas transformaciones están creando profundos efectos en la producción y cadenas de valor – regionales y globales – así como en la geopolítica. La creciente demanda de materias primas, especialmente proveniente de Asia, ha subido los precios mundiales de éstas y las ganancias por exportación y los ingresos públicos de América Latina. Además la crisis económica internacional no solo ha confirmado las críticas al modelo de desarrollo basado en el mercado libre y un Estado pequeño (tanto en América Latina como en general) sino que también ha facilitado un papel más importante para los países latinoamericanos en poderosas instituciones internacionales como el G20 o el Fondo Monetario Internacional. Aún más, las preocupaciones por el cambio climático global han ubicado al ambiente como un tema central de la agenda del sistema de gobernanza de la Tierra, dentro del cual varios líderes latinoamericanos han tomado una posición activa (Petkova et al., 2010).

Curiosamente, la gobernanza ambiental en la región desafía la dicotomía de procesos arriba-abajo y abajo-arriba: las nuevas iniciativas dirigidas a afrontar las problemáticas ambientales han emergido tanto de presiones internacionales como de demandas de abajo a arriba provenientes de la sociedad civil. Pero, a pesar del hecho de que estas nuevas condiciones generalmente parecerían posibilitar aproximaciones más sustentables y equitativas del uso de recursos na-

turales en América Latina, los debates recientes y las reformas políticas propuestas continúan reflejando claras tensiones entre las metas de desarrollo económico, inclusión social y protección de los ecosistemas. Por una parte, los gobiernos latinoamericanos con frecuencia hacen referencia a las metas de desarrollo del milenio como una agenda para simultáneamente mejorar las circunstancias sociales (pobreza, seguridad alimentaria, desigualdad de género) y proveer servicios ambientales (biodiversidad, captura de carbono, regulación climática). De otra, los temas ambientales y sociales son usualmente dejados de lado en proyectos económicos de gran escala que apuntan a la minería y extracción de petróleo (Hogenboom, 2014) o el gigantesco programa de integración regional IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana). Estos cambios recientes y contradicciones emergentes deben, por tanto, ser incluidos en un análisis de cómo la gobernanza ambiental se ha formado en América Latina y qué lecciones pueden aprenderse.

Integrando miradas

A pesar del gran número de estudios académicos sobre el uso de recursos naturales y los desafíos ambientales en América Latina, existe una necesidad urgente de desarrollar marcos integrados para promover el diálogo entre diferentes disciplinas y comunidades de investigación, tales como los estudios del desarrollo agrario, pueblos indígenas, urbanización, políticas ambientales formales y prácticas informales locales de uso de recursos naturales. Recientemente ha emergido un buen número de iniciativas para el uso sustentable de recursos naturales, incluyendo reformas en legislación ambiental, procedimientos de manejo descentralizado, asociaciones sociales y económicas, esquemas de compensación financiera, e iniciativas de co-manejo. Sin embargo, las brechas entre el discurso y la construcción de conocimiento, y entre diseño institucional e implementación real y monitoreo son con frecuencia amplias y representan desafíos mayores (Lemos y Agrawal, 2006). La complejidad de los procesos socioambientales, y la necesidad de

sistemas de manejo que sean adaptables y eficientes muestra la importancia de enfoques flexibles y mecanismos participativos. En este aspecto, la perspectiva de gobernanza ambiental apunta a integrar la diversidad de sistemas de manejo incluyendo el amplio conjunto de actores sociales y sistemas ecológicos. La *gobernanza ambiental*, un concepto que emergió como una propuesta neoliberal de enfoque no Estatal, ha sido retrabajada por las ciencias sociales para proponer nuevas perspectivas institucionales sobre el manejo de recursos naturales. El enfoque de la gobernanza ambiental toma en consideración las capacidades para resolver problemas colectivos de diferentes actores a fin de comprender las interacciones sociales y posibles conflictos entre ellos en un proceso dinámico y complejo (Kooiman et al., 2005). Esta perspectiva está relacionada con los conceptos de *justicia ambiental* – que coloca en el centro del debate la distribución de costos y beneficios ambientales, el empoderamiento de grupos marginalizados, la inclusión de género y la reducción de la pobreza (Carruthers, 2008) – y la *política ambiental*, donde la posición del Estado ha sido gradualmente redefinida (Eakin y Lemos, 2006).

Considerando la larga tradición de investigación ambiental y los desarrollos teóricos recientes, el tiempo actual permite un marco de gobernanza ambiental en América Latina más inclusivo, flexible y orientado hacia la interdisciplinariedad que los producidos hasta ahora. A pesar de algunos valiosos ejemplos de actores interesados que se han involucrado en proyectos académicos, y la presencia de importantes redes académicas regionales, los esfuerzos de investigación acerca del uso de recursos naturales en la región están limitados por numerosos obstáculos a la generación y circulación del conocimiento.

Primero. No han existido esfuerzos regionales sistemáticos para analizar los problemas de la gobernanza ambiental y los nuevos desafíos ambientales desde una perspectiva general latinoamericana. En consecuencia, las propuestas exitosas que permiten afrontar los problemas socioambientales de la región han permanecido limitadas hasta ahora a las subregiones (esto es, la Amazonía, los

Andes, Centroamérica, el Caribe) o a contextos más locales.

Segundo. A pesar de que se han desarrollado análisis más integrados en la última década, la investigación sobre el uso de recursos naturales permanece dividida en unidades de recursos (p. ej.: minería, tierra, agua, pesquería o bosques), grupos sociales (p. ej.: colonas, invasoras y poblaciones ancestrales), y sectores de política pública (conservación, desarrollo y alivio de la pobreza).

Tercero. La mayor parte de la investigación socioambiental en América Latina ha sido llevada a cabo desde la perspectiva de disciplinas individuales. La integración entre ciencias sociales y naturales se ha desarrollado con el tiempo, pero irónicamente todavía son limitados los esfuerzos de fertilización entre el amplio rango de las ciencias sociales y las humanidades. Notablemente, los enfoques enraizados en la historia han sido a duras penas incorporados.

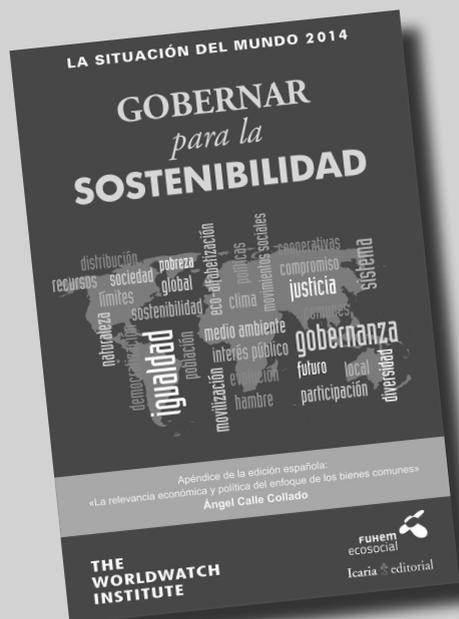
Cuarto. Las recientes iniciativas tomadas por los gobiernos post-neoliberales, sus implicaciones para la gobernanza ambiental, el alivio de la pobreza y la igualdad social y de género, y la influencia del cambiante contexto internacional todavía no han recibido la necesaria atención académica.

A fin de avanzar en la investigación sobre gobernanza ambiental en América Latina, se necesita una perspectiva regional que vaya más allá de los enfoques existentes. Nuevos conocimientos pueden generarse desde el análisis comparativo entre unidades de recursos, al tiempo que se reconocen las evidentes diferencias en los usos físicos, económicos y sociales de diferentes recursos naturales en los distintos escenarios regionales. Aún más, análisis integradores que combinen la configuración topográfica, múltiples actores locales y múltiples instituciones pueden generar una mejor comprensión de cómo el uso de diferentes recursos, los grupos sociales y las políticas públicas podrían estar relacionados. En tercer lugar, juntar los diferentes enfoques disciplinarios de los desafíos ambientales y la gobernanza podría proporcionar una mejor comprensión de procesos dinámicos desde una perspectiva explícitamente multiescalar y

diacrónica. En cuarto lugar, la concentración en políticas recientes que combinan la reducción de la pobreza, la inclusión social y la conservación ambiental podría dar luz sobre cómo los actores interesados interactúan para enfrentar desafíos ambientales a muchos niveles. Por último cabe destacar que la creciente permeabilidad de las fronteras espaciales e institucionales establecidas, así como el reconocimiento que las conexiones requieren de estrategias multiescalares, dan lugar a análisis de las dimensiones transnacionales de interacciones económicas, políticas y sociales. Sobre este aspecto la investigación acerca del uso sostenible y equitativo de los recursos naturales se ha convertido en un campo interdisciplinario, en la medida que coincide con un conjunto de nuevos enfoques multidisciplinares. Alimentarse de los varios campos de las ciencias sociales hace posible una mejor comprensión de los complejos procesos y relaciones sociales vinculados al uso y manejo de recursos naturales en América Latina. Así, los historiadores pueden describir y analizar cómo las fronteras cambian y saltan continuamente en el tiempo (Baud, 2000). La ciencia y la economía política ha analizado políticas transnacionales – incluyendo redes transnacionales de abogacía y redes de creación de políticas públicas – y la transnacionalización económica (Hochstetler y Keck, 2007). Ecologistas políticos y humanas enfatizan la interacción entre procesos socioambientales locales y más amplios en los sistemas de manejo de recursos naturales (de Castro, 2012), mientras que sociólogos y antropólogos se interrogan sobre cómo la cultura, la información y la tecnología influyen cambios en los valores materiales y simbólicos de la naturaleza a través de los diferentes grupos sociales (Latta y Wittman, 2010). En este marco, ejercicio de mapeos de experiencias y procesos son una valiosa herramienta para estudiar e ilustrar la complejidad espacial y escalar de las luchas de poder que están en juego en la gobernanza del ambiente y los conflictos que se forman en torno a ésta, tanto en América Latina como en otras regiones del mundo. ■

Referencias

- BAUD, M. (2000), State-building and Borderlands in Latin America. En VAN DIJCK, P., OUWENEEL, A. y ZOOMERS, A., (eds), *Fronteras: Toward a Borderless Latin America* (pp. 41-82). Amsterdam: CEDLA Latin American Studies No. 87.
- CARRUTHERS, D. V., (2008), *Environmental Justice in Latin America: Problems, Promise, and Practice*. Cambridge: MIT Press.
- DE CASTRO, F., (2012), Multi-scale Environmental Citizenship: Traditional Populations and Protected Areas in Brazil. En LATTA, A., y WITTMAN, H., (eds), *Environment and Citizenship in Latin America: Natures, Subjects and Struggles* (p. 39-58). New York and London: Berghahn Books (CEDLA Latin America Series).
- EAKIN, H., y LEMOS, M.C., (2006), *Adaptation and the State: Latin America and the Challenge of Capacity-Building under Globalization*. Global Environmental Change vol. 16, p. 7-18.
- HOCHSTETLER, K. y KECK, M.E., (2007), *Greening Brazil: Environmental Activism in State and Society*. Durham: Duke University Press.
- HOGENBOOM, B., (2014), South American Minerals at the Crossroads of Global Markets, National Politics and Local Needs. En DE CASTRO, F., VAN DIJCK, P., y Hogenboom, B. (eds), *The Extraction and Conservation of Natural Resources in South America: Recent Trends and Challenges* (p. 1-22), Cuadernos del CEDLA 27 (http://www.cedla.uva.nl/50_publications/pdf/cuadernos/cuad27.pdf). Amsterdam: CEDLA.
- KOOIMAN, J., JENTOFT, S., PULLIN, R., y BAVINCK, M., (2005), *Fish for Life: Interactive Governance for Fisheries*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- LARSON, A.M., (2003), *Decentralization and Forest Management in Latin America: Towards a Working Model*, Public Administration and Development vol. 23 (3), p. 211-226.
- LATTA, A., y WITTMAN, H., (2010), *Environmental Citizenship in Latin America: A New Paradigm for Theory and Practice*, European Review of Latin American and Caribbean Studies vol. 89, p. 107-116.
- LE MOS, M. C. y AGRAWAL, A., (2006), *Environmental Governance*, Annual Review of Environment and Resources vol. 31, p. 297-325.
- LIVERMAN, D. M., y VÍLAS, S. (2006), *Neoliberalism and the Environment in Latin America*, Annual Review of Environment and Resources vol. 31, p. 327-363.
- Petkova, E., Larson, A. y PACHECO, P., (2010), *Forest Governance, Decentralization and REDD+ in Latin America*, Forests vol. 1 (4), p. 250-254.



La situación del mundo 2014

Gobernar para la sostenibilidad

La actual crisis de sostenibilidad es un problema mucho más político que técnico. Disponemos de innumerables alternativas para enfrentarnos incluso a nuestros problemas ambientales más acuciantes, desde la escasez de agua potable hasta el cambio climático. Pero hemos fracasado en nuestra acción. En definitiva, no hemos sabido gobernar. Sin embargo, todavía estamos a tiempo de decidir gobernar con responsabilidad.

En esta edición del 40º aniversario de su publicación emblemática, el Worldwatch Institute analiza los fallos de nuestros sistemas políticos y económicos, así como las posibilidades de mejorar la gobernanza tanto a nivel local como global. Desde las campañas de organizaciones sociales por la desinversión en los combustibles fósiles y la “democracia energética”, hasta el aumento del número de empresas que adquieren compromisos de responsabilidad social en sus actas constitucionales, La situación del mundo 2014 describe cómo gentes de todo el mundo están recuperando el ejercicio de su ciudadanía y generando un cambio político hacia la sostenibilidad.

Maptivismo: experiencias prácticas

Mapeando conflictos.

¿Hacia una nueva ecología política estadística?

Entrevista a Joan Martínez Alier

Santiago Gorostiza

Mapeo 2.0.

Ampliando los límites de la cartografía crítica

Raül Sánchez y Alfons Pérez

Talleres de mapeo.

Recursos lúdicos y visuales para la construcción de conocimiento colectivo

Julia Risler y Pablo Ares

El uso de OpenStreetMap en el contexto humanitario

Entrevista a Séverin Ménéard

«El barrio no se vende»

Las *barriografías* de la Barceloneta como herramienta de resistencia vecinal frente al extractivismo urbano

Emma Alari Pahissa

Mapeando el procesamiento de basura electrónica en Agbogbloshie, Ghana

Rafael Fernández-Font Pérez

Mapeando conflictos

¿Hacia una nueva ecología política estadística?



Entrevista a Joan Martínez Alier

Entrevistador: Santiago Gorostiza

Desde sus inicios, el uso de la cartografía ha ido ligada al poder. Mapear los territorios y sus recursos ha sido el paso previo a su explotación. Sin embargo, con la emergencia de las nuevas tecnologías de la información esta poderosa herramienta también puede ser usada por los grupos de resistencia. ¿Hasta qué punto crees que esto representa un cambio histórico?

No creo que llegue a ser un cambio histórico, es decir, que refuerce tanto las comunidades locales como para que cambie la pauta del metabolismo social mundial. Eso no vendrá por los inventarios y mapas de conflictos sino por la resistencia local y global, y los mapas son una pequeña ayuda. Muchos grupos indígenas hace años que piden mapas para establecer los límites de sus territorios, no se fían de los mapas oficiales.

La idea de hacer inventarios y mapas de conflictos ambientales tiene para mí dos orígenes. Desde 1990 nos habíamos reunido Víctor Toledo, Bina Agarwal, Ramachandra Guha, Enrique Mayer y Stefano Varese para ver si conseguíamos financiación para un gran proyecto de estudio de conflictos ambientales, del «ecologismo de los pobres e indígenas». Algo hicimos pero no conseguimos la financiación que queríamos. Algunos continuamos en la misma línea, otros (como Ramachandra Guha) se han ido en otras direcciones y no hay nada que criticar. Víctor Toledo presenta ahora un inventario de 200 casos en México y está en plena forma. Al

aumentar el metabolismo social aumentan los conflictos ambientales.

En 1992 publiqué *De la economía ecológica al ecologismo popular*, luego con Ram Guha publiqué *Varieties of Environmentalism. Essays North and South* en 1997 (con el paralelismo entre el movimiento de justicia ambiental en EEUU y el ecologismo de los pobres en el Sur del planeta), y en 2002 publiqué *El ecologismo de los pobres: conflictos ambientales y lenguajes de valoración*. En esos libros mencionaba y analizaba someramente unos ciento cincuenta o doscientos casos de conflictos ambientales en el mundo, en un estilo anecdótico que me dejó algo insatisfecho, no en un estilo sistemático como estamos haciendo en las fichas de EJOLT para el Atlas de Justicia Ambiental. En esos libros está la raíz principal de EJOLT. Y a la vez, en el contacto personal, la amistad y los inventarios y cartografías de organizaciones ecologistas como OCMAL (el observatorio de conflictos mineros en América Latina), el WRM con Ricardo Carrere recopilando casos de estudio sobre conflictos en el tema «las plantaciones no son bosques»... Es un enorme trabajo. Lo hacen por militancia y para ayudar a quienes protestan. Al mismo tiempo, es una información excelente. Lo mismo el mapa de las injusticias ambientales de Marcelo Firpo Porto, Tania Pacheco en Brasil con 400 casos, el intento de Oilwatch ayudada por Andrés Barreda de mapear conflictos de petróleo en el mundo. De ahí, y de la India (de Anil Agarwal y Sunita Narain

del CSE desde la década de 1980 y tantos otros), y de Nnimmo Bassey y ERA en Nigeria, vino la idea de EJOLT.

Imagino que se puede seguir la génesis de EJOLT siguiendo la revista *Ecología Política* que empezamos en la editorial Icaria en 1990. Por ejemplo, conflictos sobre las plantaciones de pinos de FACE en Ecuador para absorber dióxido de carbono holandés, conflictos de biopiratería con Shaman Pharmaceuticals, una entrevista hace muchos años con Ashish Kothari – quien es ahora tan conocido con su propuesta de una Radical Ecological Democracy – todo eso está ya hace 20 años en la revista *Ecología Política*. Pero en *Ecología Política* no hemos hecho buenos mapas.

El historiador del anarquismo Max Nettlau (1865 – 1944) viajó por toda Europa recogiendo información sobre los movimientos sociales de su época, y su trabajo dio lugar a la creación del International Institute for Social History (IISH) de Amsterdam. ¿Ves alguna vinculación entre el compromiso personal de Nettlau y las aportaciones que realizan los activistas que contribuyen a proyectos como EJOLT?

Veo muchas vinculaciones, yo tengo una gran admiración por Nettlau y por el IISH en Amsterdam. Además los papeles de la editorial anti-franquista Ruedo Ibérico (con la que colaboré bastante entre 1965 y 1980) están en el IISH. Alguna vez he hablado con gente del IISH de que se debería hacer un esfuerzo para recoger los archivos y guardarlos (se pueden digitalizar) de las organizaciones de justicia ambiental en el mundo, como la confederación de Friends of the Earth International (que además tiene la sede en Amsterdam) o muchas otras como Acción Ecológica de Ecuador, ERA de Nigeria, WALHI de Indonesia... centenares de organizaciones, para poder hacer más adelante la historia del ecologismo popular. Estas organizaciones son en general de la década de 1980. Es una cosa

urgente. Por ejemplo, no sé en qué estado pueda estar el archivo de Ecologistas en Acción en Madrid, o el archivo del CEPA en Catalunya, y el de muchas organizaciones locales, algunas habrán desaparecido y también sus archivos.

Uno de los riesgos del uso de mapas y estadísticas para la descripción y análisis de conflictos es que a escala global la disponibilidad de información es muy diferente, debido, por ejemplo, a los distintos contextos políticos. Esto podría llevar a equívocos en el análisis estadístico. ¿Cómo crees que se puede afrontar este tema? ¿Supone una limitación importante para casos como el proyecto EJOLT?

Ya veremos. Depende del análisis estadístico que hagas. Los datos del Atlas se convertirán en artículos de periódico, o a veces en documentales, pero también en artículos para revistas académicas y veremos qué ocurre, qué críticas recibimos y cómo las solucionamos. Hay cuatro o cinco artículos ya enviados. La idea de hacer un inventario global de conflictos ambientales y de ponerlos en mapas es muy ambiciosa, vino en parte del entusiasmo juvenil de Leah Temper que ha acabado en octubre de 2014 su doctorado en la UAB. Ella estuvo unos meses en Berkeley en 2010 y se la explicó a Michael Watts, quien por lo visto le dijo que era imposible. Pero sin embargo la pusimos en el proyecto EJOLT. Nos tomó un año, todo el 2011 y algo más, ponernos de acuerdo en el contenido de las fichas. Está todo inspirado por la historia social, por Charles Tilly, y también por los inventarios y mapas de algunas organizaciones ecologistas.

El problema que tenemos no son los contextos políticos, es decir si en Honduras o Guatemala hay tanta represión (que sí la hay) que nos impidiera recoger las fichas con los 10 o 15 conflictos ambientales más importantes. No hay problema en recoger datos a distancia, a través de organizaciones

o de académicos. En China, nuestra colaboradora principal es una profesora de universidad pero queremos también encontrar organizaciones ecologistas. El problema es que en el pequeño equipo en la UAB no tenemos por ahora un buen conocimiento de China. Además es un territorio muy grande, también lo es Indonesia, por ejemplo. En Filipinas recién empezamos pero no es porque sea difícil conseguir datos, es porque no abarcamos todo. No podemos cubrir todo el mundo con el mismo esfuerzo, por falta de medios económicos. Pero lo vamos a lograr. Nuestro objetivo es alcanzar unos 3000 casos para final de 2017, con amplia cobertura geográfica y temática, si conseguimos financiación adicional. El Atlas ha contado hasta ahora con unos 50 colaboradores (incluyo los que han llenado más de 5 fichas), la mitad de ellos voluntarios.

Se pueden hacer análisis comparativos y estadísticos, en una nueva ecología política estadística, por países o por temas. Por ejemplo, minería de oro, conflictos en manglares... Por ejemplo, si tienes 80 casos de conflicto en plantaciones de palma de aceite (en América, en Asia), ya puedes hacer alguna estadística, que te dé alguna hipótesis. Por ejemplo, las empresas de palma de aceite ¿son transnacionales o son locales? ¿Fracasan más las transnacionales o las locales? Otro ejemplo, ¿es más fácil frenar proyectos de extracción de biomasa o proyectos mineros? El trabajo de análisis está empezando ahora, ya veremos qué problemas hay de representatividad estadística.

Para que exista un conflicto tiene que haber una base material. Pero los conflictos emergen sólo en determinadas condiciones sociales. Por ejemplo, en función de la existencia previa de asociacionismo, de la posibilidad política de expresarse, etc. ¿se puede establecer una relación directa entre conflicto y base material?

Todo el Atlas se basa en un enfoque material. Los impactos sociales y ambientales y los discursos de los participantes en el conflicto son por supuesto recogidos en las fichas. Pero los conflictos se clasifican en primer lugar por el tipo de extracción o contaminación: ¿es un conflicto de minería, un conflicto por infraestructuras, por extracción de combustibles fósiles, por extracción de biomasa, por acceso al agua...? Y dentro de esto, ¿qué producto está en juego: cobre, hidroelectricidad, uranio, soja...? Una lista de unos 70 productos, y puedes también poner otros nuevos que no estaban en la lista. Por ejemplo, ilmenita para titanio.

Muchos conflictos ambientales nacen (debido al aumento del metabolismo social) en las fronteras de la extracción. Y como tú dices, intervienen factores sociales. Por ejemplo, si las afectadas pertenecen a grupos indígenas, ¿eso ayuda a que haya conflicto abierto? También las fichas permiten decir si el conflicto es latente, de intensidad mediana o de gran intensidad (con muertos, etc). Seguramente se pueda estudiar everyday forms of environmental resistance.

Al mapear conflictos ambientales estamos plasmando sobre un punto o un área una determinada configuración de las relaciones entre el medio ambiente, la sociedad y la economía. ¿Por qué mapear conflictos y no alternativas, por ejemplo?

Si estudias la historia del movimiento obrero, ¿por qué recopilar y mapear huelgas, boycotts, lockouts, y no ocupaciones de fábricas y exitosas cooperativas obreras? Podrías hacer esta pregunta. Una razón es que hay más conflictos que alternativas exitosas que salgan de esas resistencias. Es verdad que las alternativas (la gestión de bosques en los pueblos mancomunados de la Sierra Norte de Oaxaca, por ejemplo) nacen de conflictos (la lucha contra la deforestación por empresas comerciales). Pero muchas veces los conflictos acaban en derrotas del movimiento de

justicia ambiental, al igual que muchas huelgas han acabado en derrotas pero merecen ser recordadas y algún efecto histórico han tenido. En el Atlas, por ahora, los casos de «éxito» son más o menos el 20 por ciento. Pero desde luego las alternativas (tanto si salen de conflictos, como me parece que es habitualmente el caso, como si no lo son) también podrían ser inventariadas y mapeadas.

Una vez creados mapas como los de EJOLT, ¿qué interacciones y reacciones habéis recibido por parte de los movimientos de base?

Esto está por ver todavía. En el Atlas estamos llegando a 1300 casos en noviembre de 2014, hay áreas todavía muy vacías, como China. El Atlas se nutre de trabajo de estas organizaciones ecologistas y de académicas. Con OCMAL yo estoy en excelentes relaciones, pero su reacción final va a depender de qué tipo de estudios salgan del Atlas. En Colombia, las organizaciones del ecologismo popular como CENSAT, están contentas del inventario y mapas de EJOLT que ha realizado Mario A. Pérez Rincón, ya han colaborado con él y lo usan. Les parece bien, pero esas organizaciones ya conocen el tema, mejor que nosotros. En Nigeria, en la India, tenemos muchos conflictos recogidos en el Atlas, pero no ha habido análisis todavía.

En general, que la gran cantidad de conflictos sean más visibles, es algo que a las ecologistas populares les gusta. Muestra que esos casos no son NIMBYs (Not In My Back Yard, que se podría traducir como: «no en mi patio»), hay un gran movimiento mundial de resistencia. Seguramente viste que el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, declaró hace poco tiempo en Londres que la resistencia al fracking del gas en Europa la pagaba Putin. En la India, el primer ministro Modi o los servicios secretos dicen que las ecologistas están pagadas por países europeos o por Estados Unidos. Un inventario y mapa como EJOLT muestra

que eso son tonterías. El reciente libro de Naomi Klein sobre la justicia climática, con la idea de *Blockadia*, va a ayudar también. Su inspiración viene del ecologismo local, a menudo indígena, en Canadá y Estados Unidos y también de los Ogoni e Ijaw en Nigeria con la propuesta de dejar el petróleo en tierra para no contaminar localmente y para impedir que se produzca más CO₂ al quemar el petróleo, la campaña Amazonía por la Vida de Acción Ecológica desde su fundación y la propuesta Yasuní ITT. Una de las protagonistas del libro de Naomi Klein es Esperanza Martínez, de Oilwatch. Esa idea del ecologismo del Sur de *leave oil in the soil, coal in the hole, gas under the grass* («deja el petróleo bajo el suelo, el carbón en la mina y el gas bajo el césped») ahora se usa en las campañas contra el fracking en Europa, contra prospecciones de petróleo en Canarias... El Atlas de EJOLT y los informes y libros que salen de EJOLT son una contribución a todo este movimiento global de justicia ambiental, que también existiría por supuesto aunque no hubiera EJOLT. Nosotros somos amanuenses, como lo fue Nettlau. Somos como recicladoras de basuras, una profesión muy útil: recogemos los conflictos ambientales, los clasificamos, mejoramos y limpiamos la información, los mapeamos, los ponemos ordenadamente en la web, en libros o artículos, para que no se pierdan y para que alimenten el movimiento. ■

Mapeo 2.0.

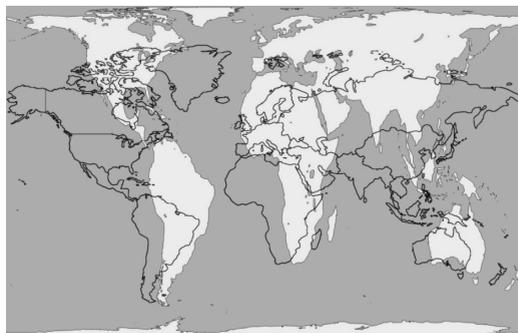
Ampliando los límites de la cartografía crítica

Raül Sánchez y Alfons Pérez *

De la misma manera que se dice que la historia la escriben las vencedoras, se puede hacer una analogía con la cartografía. La elaboración de mapas ha estado sometida a los intereses de quien tenía los recursos necesarios para su producción (sectores técnicos y económicos). El acceso a la misma también ha estado restringido a la población en general, condicionando una forma de ver el mundo determinada e intencionada.

El paso del tiempo nos ha dejado numerosas muestras de esta cartografía hegemónica. Quizás uno de los casos más conocidos es la representación del mapamundi, dónde tradicionalmente se ha usado la proyección de Mercator (1569, inicialmente pensada para la navegación marítima). Esta proyección mantiene las formas de los continentes, aunque altera desigualmente el área, mostrando Eurasia y Norte América mucho más grandes en comparación con África y Sur América, y desplazando a Europa hacia el sur y centrándola en el mapa. Por el contrario, la proyección de Gall-Peters, muy utilizada por los movimientos sociales, proyecta un mapamundi donde los continentes mantienen su área y posición (aunque se distorsiona la forma, sobretodo en los polos), demostrando que los continentes del Sur son más grandes que los del Norte. Otras muestras de esta visión condicionada es que el Norte a menudo se sitúa en la parte superior y el Sur en la inferior, especialmente en Europa.

Entonces, si entendemos la cartografía como una ciencia que ha estado mayoritariamente desarrollada y al servicio de una élite, ¿puede la sociedad ejercer un contrapoder en este campo? Efectivamente, al margen de esta cartografía hegemónica, han ido surgiendo car-



Mapa 1. Proyección de Gall-Peters (línea negra) sobre Proyección de Mercator. (Fuente: imgur.com)

tografías alternativas, «heterogéneas, radicales, tácticas, ciudadanas, participativas, colaborativas, ambiguas, abiertamente subjetivas y cotidianas» (Freire y Villar, 2010). Esto se consigue cuando al construir un mapa incorporamos en él nuestras opiniones políticas e interpretaciones, llamando la atención sobre lo que consideramos de interés. Usamos nuestras habilidades para proponer una nueva comprensión del mundo, transformando así el proceso de mapeo en un nuevo tipo de activismo (Ortega, 2012). ¿Cómo podemos entonces dotarnos de los conocimientos y apropiarnos de las herramientas que nos permitan hacer mapeo crítico?

Mapeo 2.0 de ámbito global

Desde principios del siglo XXI se ha ido produciendo un proceso de democratización de las tecnologías de la información geográfica. Uno de los factores que ha contribuido a este proceso ha sido la aparición de la Web 2.0, concepto que se define como la actitud que permite y espolea diversos sectores de la sociedad, individuos, administraciones públicas o entidades pri-

* Observatori del Deute en la Globalització
(raul.sanchez@odg.cat) (alfons.perez@odg.cat)

vadas, a dar opiniones, organizarse, trabajar y relacionarse entre ellas a través de Internet. (Pérez, 2011).

Esta *web* ha permitido la aparición de sistemas de información geográfica (SIG) y otras aplicaciones online (InstaMaps, Ikimap, CartoDB, MyMaps, etc), que son fáciles de usar y de interfaz sencilla y «amigable» a través de las cuales se pueden elaborar mapas, visualizarlos y compartirlos, sin necesidad de disponer de conocimientos específicos en SIG. El rango de complejidad de estas aplicaciones es amplio, desde las que permiten simbolizar directamente sobre el mapa y rellenar un sencillo formulario para introducir la información, hasta las que incorporan funciones de análisis territorial, opciones avanzadas de simbolización y permiten la interacción con una base de datos mediante lenguaje de programación web. Además, con estas aplicaciones se puede consultar, modificar y publicar mapas en la nube¹ desde cualquier punto del planeta con acceso a internet.

Gracias a esto, el mapeo colaborativo – entendido como un proceso de creación que desafía los relatos dominantes sobre los territorios a partir de los saberes y experiencias cotidianas de varias entidades o personas (Risler y Ares, 2013) – puede hacerse sobre regiones mucho más amplias, con colaboradoras que se encuentren a miles de kilómetros de distancia.

El mapeo colaborativo estaría estrechamente relacionado con la práctica de una metodología basada en el diálogo entre participantes y en la interconectividad de los contenidos, que nos lleva al desarrollo de la comunidad de aprendizaje (Lobera Serrano, 2010). Las comunidades de aprendizaje son un grupo de personas dentro de una organización o un territorio que, durante un período de tiempo y motivados por una visión y voluntad comunes participan conjuntamente en una tarea de adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes (Larsen, 2001).

Encontramos numerosos mapas en la web que abarcan todas las escalas territoriales. OpenStreet-Maps² (OSM), por ejemplo, es un proyecto consolidado a nivel mundial que tiene el objetivo de crear un mapa que integre datos de carreteras, senderos, redes hidrográficas, estaciones de ferrocarril, servicios, etc. La información cartográfica la aporta su red de

voluntariado, repartida por todo el mundo, que crea y actualiza constantemente el mapa.

Otro caso de mapeo colaborativo a través de la red es el Mapa de Conflictos entre Pueblos Indígenas y Transnacionales³, impulsado por la Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI). A través de su web cualquier usuario puede aportar casos de conflictos que se derivan de la presencia de empresas transnacionales (ETN) – principalmente las que tienen su sede matriz en el Estado español – en los territorios de los pueblos indígenas de América Latina.

Más ejemplos de proyectos de mapeo a nivel global los encontramos en el Mapa de Alternativas a las Megainfraestructuras, que recoge alternativas de la sociedad civil a los megaproyectos de infraestructuras propuestos por el gran capital y los Estados; también en el Mapeo Colectivo de la Educación Alternativa, impulsado por Reevo⁴, que muestra diversas iniciativas educativas en todo el mundo; Wikimapia⁵, un proyecto de mapeo de contenido abierto, dónde se muestra todo tipo de objetos espaciales. Más centrado en el entorno urbano encontramos Meipi⁶, un mapa en el que las personas usuarias pueden dejar archivos multimedia asociados a un lugar de su ciudad; o Foursquare⁷, una aplicación para smartphones y red social para mapear lugares de ocio. Así pues, existen numerosas experiencias de mapas colaborativos en la nube.

El proyecto Europeo «Democratising Energy For Development» incluyó dentro de sus actividades la creación, por parte del Observatori del Deute en la Globalització (ODG), de un mapa online para visibilizar los proyectos controvertidos financiados por bancos públicos europeos⁸, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y por el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD). Lo más destacable de la herramienta es que las organizaciones afectadas y/o que trabajan en los impactos pueden reportar directamente información básica de los casos. Para fomentar la creación de la comunidad de mapeo, se realizaron tres talleres presenciales para facilitar la

3 <http://www.codpi.org/territorio-y-recursos-naturales/observatorio/mapeo>

4 <http://map.reevo.org/>

5 <http://wikimapia.org/>

6 <http://meipi.org/>

7 <https://es.foursquare.com/>

8 <http://www.counter-balance.org/videos-tools/map-of-controversial-projects/>

1 Se refiere al paradigma que permite ofrecer servicios a través de internet.

2 <http://www.openstreetmap.org>

apropiación de la herramienta cartográfica e introducir el mapeo colaborativo.

Estos proyectos, así como otros de la misma naturaleza, recogen la potencialidad colaborativa del web 2.0 para convertirse en un punto de encuentro para las organizaciones, una ventana dónde poder denunciar las vulneraciones de derechos sociales y ambientales, y visibilizar los impactos que difícilmente salen a la luz pública en los medios de comunicación masivos.

Mapeo 2.0 de ámbito local

También encontramos ejemplos de uso de estas herramientas 2.0 en el ámbito local, con mapas que abarcan un área geográfica mucho más concreta y comunidades de mapeo que pueden compartir el territorio que representan.

Pam a Pam es un proyecto de mapeo colaborativo localizado en Barcelona⁹, impulsado por SETEM, que muestra puntos de consumo, producción responsable y economía solidaria en la ciudad condal, que son añadidos por las voluntarias, así como por los propios proyectos, iniciativas y comercios, a través de un formulario on-line. El proyecto ofrece también formaciones periódicas sobre economía solidaria.

Otro caso es el mapa colaborativo realizado durante el Volt Oligotòxic 2014 de la *Xarxa per la sobirania energètica*, que consistió en una visita a diferentes puntos negros del modelo energético catalán. En esta actividad se optó por realizar un mapeo colaborativo para recoger las impresiones de las participantes y generar así un «diario de a bordo» plasmado en un mapa¹⁰. Se decidió utilizar Fulcrum¹¹, una aplicación para smartphones y tablets, que de forma sencilla permite geo-referenciar comentarios y material multimedia.

Gracias al uso de esta sencilla herramienta las parti-



Mapa 2. Mapa del Diario de a bordo del Volt Oligotòxic 2014. (Fuente: Observatori del Deute en la Globalització)

cipantes pudieron reportar desde su propio dispositivo móvil de manera autónoma y en tiempo real; y en un formato final inusitado: un mapa.

De esta manera, el mapeo colaborativo en entornos locales se convierte en un catalizador de la relación de las participantes con el entorno, una suerte de relato, de construcción colectiva de lo que acontece en el territorio, que además ofrece la posibilidad de ser complementado por mapeos posteriores.

Apropiación de la cartografía oficial

En la actualidad es constatable que las administraciones e instituciones públicas y del sector privado, van incrementando la oferta de acceso libre y gratuito a información cartográfica, que puede ser utilizada por la ciudadanía para la elaboración de sus propios mapas.

Las instituciones que ofrecen este tipo de datos van desde agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hasta el ayuntamiento de nuestro municipio, y la temática de la información también es muy variada, tanto mapas físicos (fronteras naturales, clima, hidrología, desastres naturales, ecología, etc.) como mapas de geografía humana (fronteras administrativas, usos del suelo, conflictos y guerras, población, transportes, etc.). Aunque esta información puede estar disponible en varios formatos de archivo, la mayoría de herramientas cartográficas son capaces de leer los más comunes: shape, csv, kml, geojson, etc. También existen varias listas de fuentes de datos cartográficos públicos y gratuitos,

9 <http://www.pamapam.org>

10 <http://odg.cat/MCA/VoltOligotoxic2014/index.html>

11 <http://fulcrumapp.com>

donde se puede buscar la información por territorio o temática^{12 13}.

Un ejemplo de este uso de la cartografía oficial es la página web «No more gas!»¹⁴ (Counter Balance, 2014), que trata sobre la estrategia energética de la Unión Europea y su apuesta por un modelo gasista. La página pone en evidencia el despilfarro de dinero público que suponen las inversiones en megaproyectos gasistas que, además, aumentan la dependencia energética y tienen un elevado coste socio-ambiental.

Para «No more gas!» se elaboró un mapa que muestra las infraestructuras gasistas consideradas Proyectos de Interés Común (PCI por sus siglas en inglés) que finalmente recibirán apoyo de financiación pública a través de bancos europeos como el BEI y el BERD.

En este caso la información del mapa se extrajo de una fuente institucional, concretamente del servidor de información espacial de la Unión Europea¹⁵. Lo más destacable es que, a través de la apropiación de la cartografía oficial, es posible complementar la información para construir un nuevo relato. En este caso la representación de la red gasista visibiliza una clara intención geopolítica de extensión hacia el Cáucaso y Norte de África, con las implicaciones que ello conlleva, a saber, la conexión de la UE con regímenes autoritarios como el de Azerbaiján.

Sin duda, la sociedad civil no disponía en el pasado de esta posibilidad de apropiación de la cartografía oficial. Levantar información geográfica es, generalmente, muy costoso, pero la cartografía de acceso libre abre una nueva dimensión en el uso y creación de los mapas.

Conclusiones

La democratización de la cartografía a través de las herramientas 2.0 facilita que personas o grupos sin formación técnica específica puedan realizar, publicar y compartir sus propios mapas. Dada su interfaz intuitiva y su orientación hacia las necesidades de las usuarias, el proceso de apropiación de estos instrumentos es mucho más rápido. Si estos además permiten trabajar en la nube, la comunidad de mapeo no tiene límites geográficos. Al mismo tiempo, estas aplicaciones flexibilizan la acción de mapear, ya que las personas participantes pueden intervenir sin necesidad de hacerlo simultáneamente, dotándolas de

cierta autonomía.

Por otra parte, existen numerosas fuentes de cartografía oficial, cuya apropiación puede servir como base para realizar un mapeo crítico, ahorrando esfuerzos y recursos. Añadiendo nuevas capas de información, se puede dar una nueva visión del territorio, construir un nuevo relato de lo que acontece en el área geográfica del mapeo. Por ello es necesario garantizar el acceso a la información cartográfica en las sociedades democráticas.

Así pues, con las herramientas y la información disponible, la práctica de mapear realizada por los movimientos sociales, ONGs y activistas, puede convertirse en una acción de reivindicación de las diferentes realidades que ocurren en un territorio, exponiendo denuncias, impactos socio-ambientales, alternativas y todo aquello que invisibiliza la cartografía hegemónica. ■

Referencias

- FREIRE, J. y VILLAR, D., (2010), *Prácticas cartográficas cotidianas en la cultura digital*, Razón y Palabra n°73.
- LARSEN, K., (2001), Contribució sobre les comunicats d'aprenentatge i el futur de l'educació: perspectiva de l'OCDE. *Simposi Internacional sobre Comunitats d'Aprenentatge*: Barcelona.
- LOBERA SERRANO, J., (2010), *Sostenibilitat, participació i educació: les concepcions del món i de la tecnociència en la transformació dels conflictes socioambientals*. Càtedra UNESCO de Sostenibilitat: Barcelona.
- ORTEGA, D., (2012), *Mapeo colectivo de conflictos ambientales*, *Ecologista* n°72, p. 60-62.
- PEREZ, A., (2011), *Mapeig Col·laboratiu de Conflictes Socioambientals*, Càtedra UNESCO de Sostenibilitat: Barcelona.
- RISLER, J., y ARES, P., (2013), *Manual de mapeo colectivo: recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación colaborativa*. Tinta Limón: Buenos Aires.

Web

- COUNTER BALANCE (2014), «No more gas!», 19 de junio, <http://www.counter-balance.org/no-more-gas/> (consultado el 20 de octubre de 2014)

12 <http://freegisdata.rtwilson.com>

13 <http://www.gogeo.ac.uk>

14 <http://www.counter-balance.org/no-more-gas/>

15 <https://webgate.ec.europa.eu/getis/arcgis/rest/services/>

Talleres de mapeo.

Recursos lúdicos y visuales para la construcción de conocimiento colectivo

Julia Risler y Pablo Ares*

El mapeo como herramienta para crear nuevos relatos

Los mapas son representaciones ideológicas. La confección de mapas es uno de los principales instrumentos que el poder dominante ha utilizado históricamente para la apropiación utilitaria de los territorios. Este modo de operar supone no sólo una forma de ordenamiento territorial sino también la demarcación de nuevas fronteras para señalar los ocupamientos y planificar las estrategias de invasión, saqueo y apropiación de los bienes comunes. De esta manera, los mapas que habitualmente circulan son el resultado de la mirada que el poder dominante recrea sobre el territorio produciendo representaciones hegemónicas funcionales al desarrollo del modelo capitalista, decodificando el territorio de manera racional, clasificando los recursos naturales y las características poblacionales,

e identificando el tipo de producción más efectiva para convertir la fuerza de trabajo y los recursos en ganancia. Los relatos y cartografías «oficiales» son aceptados como representaciones naturales e incuestionables pese a ser el resultado de las «miradas interesadas» que los poderes hegemónicos despliegan sobre los territorios. Nos referimos no sólo a las provenientes de actores o instituciones políticas y sociales, sino también al discurso de los medios masivos de comunicación, y toda otra intervención que modele la opinión pública y refuerce las creencias naturalizadas y los mandatos sociales. Esta mirada científica sobre el territorio, los bienes comunes y quienes lo habitamos se complementa con otras técnicas escrutadoras del cuerpo social, como la videovigilancia, las técnicas biométricas de identificación y las fórmulas estadísticas que interpretan situaciones y ofrecen información para facilitar la ejecución de mecanismos biopolíticos orientados a organizar, dominar y disciplinar a quienes habitan un territorio.

La utilización crítica de mapas, en cambio, apunta a generar instancias de intercambio colectivo para la elaboración de narraciones y representaciones que disputen e impugnen aquéllas instaladas desde diversas instancias hegemónicas. La elaboración de cartografías colectivas proviene de una larga tradición de trabajo participativo; con experiencias disímiles y resultados diversos la herramienta se solidificó desde el trabajo de organizaciones sociales, ONGs y fundaciones, tanto en zonas urbanas como en rurales. A esto se le sumó la disponibilidad tec-

* *Iconoclasistas* es un dúo formado en el año 2006 por Pablo Ares, artista, comunicador y diseñador gráfico; y Julia Risler, comunicadora, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Trabajan combinando el arte gráfico, los talleres creativos y la investigación colectiva. Todas sus producciones se difunden en la web a través de licencias Creative Commons, para fomentar la socialización y estimular su apropiación y uso derivado. Desde el año 2008 realizan talleres de mapeo colectivo con la intención de buscar potenciar la comunicación e incitar a prácticas colaborativas de resistencia y transformación. Su práctica se extiende por y mediante una red dinámica de afinidad y solidaridad construida a partir de compartir e impulsar proyectos y talleres en Latinoamérica y Europa. De esta trama política y afectiva han surgido muestras ambulantes, nuevos recursos lúdicos y la participación en encuentros junto a organizaciones culturales y movimientos sociales. Han publicado recursos gráficos y visuales que abordan diversas problemáticas sociales, los cuales fueron impresos y difundidos en periódicos y revistas de distintas partes del mundo. En 2013 publicaron su primer libro, *Manual de mapeo colectivo. Recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación colaborativa*, donde sistematizaron metodologías, recursos y dinámicas para la organización de talleres. (iconoclasistas@gmail.com)



Mesa de trabajo en el taller de formación de mapeadores realizado en Caracas, Venezuela, 2013
(Autores: Julia Risler y Pablo Ares)

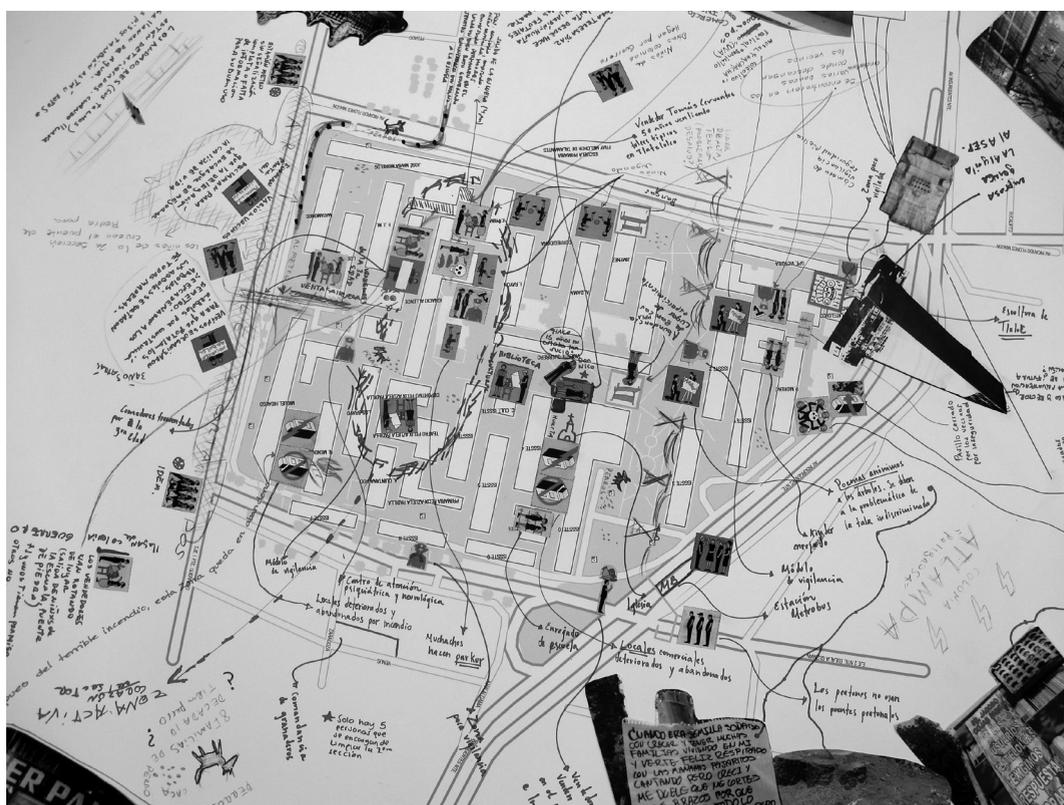
nológica y el acceso a herramientas de georeferenciación (como el GPS o SIG) que potenciaron y ampliaron este proceso en diversas líneas de trabajo. La difusión y uso ampliado de mapas y cartografías marchó paralela a la «muerte de los grandes relatos» como discurso hegemónico que organizó el paradigma interpretativo de los años noventa. Por esa fecha irrumpieron y se visibilizaron en Latinoamérica un amplio conjunto de movimientos sociales organizados de forma autogestiva y horizontal, que activaron reivindicaciones campesinas, de pueblos originarios y de colectivos de género, entre otros. Estos nuevos o renovados protagonismos sociales retomaron un amplio reservorio de prácticas y discursos emancipatorios, e instituyeron un activismo político, cultural y comunicacional, vinculado a la cooperación social y afectiva, la libre circulación de saberes y prácticas, y la articulación en red.

Algunas definiciones y certezas respecto a la práctica del mapeo

Concebimos el «mapeo» como una práctica, una acción de reflexión en la cual el mapa es sólo una de las herramientas que facilita el abordaje y la problematización de territorios sociales, subjetivos, geográficos. A esto le sumamos otra serie de recursos que hemos apodado «dispositivos múltiples» y que consisten en creaciones y soportes gráficos y visuales que, mixturizados con dinámicas lúdicas, se articulan para impulsar espacios de socialización y debate, que son también disparadores y desafíos en constante movimiento, cambio y apropiación. Así buscamos abrir un espacio de discusión y creación que no se cierre sobre sí mismo, sino que se posicione como un punto de partida disponible para ser retomado por otras, un dispositivo apropiado que construya conocimiento, potenciando la organización y elaboración de alternativas

emancipatorias. Por eso decimos que el mapeo es un medio, no un fin. Debe formar parte de un proceso mayor, ser una «estrategia más», un «medio para» la reflexión, la socialización de saberes y prácticas, el impulso a la participación colectiva, el trabajo con personas desconocidas, el intercambio de saberes, la disputa de espacios hegemónicos, el impulso a la creación e imaginación, la problematización de nudos clave, la visualización de las resistencias y el señalamiento de las relaciones de poder, entre muchos otros. De esta manera, el mapeo no produce transformaciones por sí mismo. Se conecta a un proceso de organización mediante un trabajo colaborativo en soportes gráficos y visuales. Y la difusión de este trabajo debe ser estratégica: toda la información que incluya debe estar consensuada con los participantes y amparada en un objetivo comunicacional, teniendo presente que esto no amenace ni vulnerabilice a los participantes.

El mapeo colectivo se activa en talleres junto a estudiantes, organizaciones barriales, movimientos sociales, artistas, comunicadoras, y todas aquellas que se sientan interpeladas a pensar colectivamente su territorio. En los talleres, si bien partimos de representaciones hegemónicas (como un mapa catastral con fronteras prediseñadas), el proceso de construcción e intercambio de saberes le imprime prismas particulares producto de las diversas miradas operantes sobre el espacio. Si se dispone de tiempo los mapas también pueden dibujarse a mano jugando con fronteras y formas; sin embargo es importante aclarar que retomar un mapa oficial es una cuestión clave en, por ejemplo, situaciones de re-territorialización emprendidas con comunidades originarias, donde la necesidad de señalar con exactitud a partir de las fronteras oficiales se torna acuciante a la hora de volcar esa información como parte de una demanda de reconocimiento territorial presentada al Estado nacional.



Detalle de mapa realizado con vecinos/as del complejo habitacional Nonoalco-Tlatelolco situado en el DF, México, 2012 (Autores: Julia Risler y Pablo Ares)

El mapa no es el territorio

Alfred Korzybsky (aristócrata polaco y fundador de la semántica general) acuñó la frase que figura como título de este apartado luego de su experiencia como oficial en la I Guerra Mundial, cuando dirigió un desastroso ataque en donde los soldados que comandaba terminaron cayendo en un foso que no figuraba en el mapa. Gregory Bateson (antropólogo y lingüista norteamericano) complementó esta frase con la consigna «y el nombre no es la cosa nombrada». Esto es, lo que ambos buscaban exponer es la imposibilidad de objetivar las dimensiones significativas y afectivas de los espacios y las representaciones lingüísticas.

El mapa no es el territorio, es una imagen estática a la cual se le escapa la permanente mutabilidad y cambio al que están expuestos los territorios. El mapa no contempla la subjetividad de los procesos territoriales, sus representaciones simbólicas o los imaginarios sobre el mismo. Son las personas que lo habitan quienes realmente crean y transforman los territorios, lo moldean desde el diario habitar, transitar, percibir y crear. El mapeo es una herramienta que muestra una instantánea del momento en el cual se realizó, pero no repone de manera íntegra una realidad territorial siempre problemática y compleja. La elaboración de mapas colectivos transmite una determinada concepción sobre un territorio dinámico y en permanente cambio, en donde las fronteras, tanto las reales como las simbólicas, son continuamente alteradas y desbordadas por el accionar de cuerpos y subjetividades. La construcción de un mapa constituye una manera de elaborar relatos colectivos en torno a lo común, monta una plataforma que visibiliza ciertos encuentros y consensos sin aplanar las diversidades, pues también quedan plasmadas. Gestar lo común, esto es, producirlo desde aquello que nos aúna y que reconocemos; o visibilizarlo desde lo espontáneo y desconocido pero a partir de objetivos claros, es una forma de combatir el individualismo y la segregación en la cual estamos inmersos como habitantes de este mundo. El mapeo es una práctica para derribar barreras y

fronteras, y permite encontrarnos en un territorio de complicidad y confianza. Es también una dinámica a través de la cual vamos construyendo y potenciando la difusión de nuevos paradigmas de interpretación de la realidad. Y es un modo de producir territorio, pues es a partir de la institución y renovación de las formas espaciales y los mecanismos de percepción del tiempo que nutrimos y proyectamos nuestro accionar.

Talleres: recursos visuales y gráficos para potenciar prácticas colaborativas y de transformación

A través de diversos recursos gráficos y cartográficos impulsamos un trabajo colaborativo en mapas y planos a partir del diseño y liberación de una serie de herramientas que mediante la socialización de saberes no especializados y experiencias cotidianas de los participantes permiten compartir conocimientos para la visibilización crítica de las problemáticas más acuciantes del territorio, identificando responsables, conexiones y consecuencias. Esta mirada se amplía en el proceso de recordar y señalar experiencias y espacios de organización y transformación, a fin de tejer la red de solidaridades y afinidades. A partir del trabajo colectivo se construye un panorama complejo sobre el territorio que permite distinguir prioridades y recursos a la hora de proyectar alternativas emancipatorias que adoptarán diversos cursos de acción.

No hay requisitos ni condiciones para participar de los talleres. Partimos de la idea que todos tenemos la capacidad de «elevarnos» para realizar un vuelo de pájaro que nos permita visualizar el territorio. Así, la creación crítica se activa a partir de la conversación y el relato de experiencias, conocimientos y pareceres, potenciando la escucha, aguzando los sentidos y focalizando el trabajo sobre una plataforma común. En los talleres se potencian las distintas formas de comprender y señalar el espacio, poniendo a disposición variados tipos de lenguaje como símbolos, gráficas e iconos, que estimulan la creación de *collages*, frases, dibujos, consignas, todo lo cual favorece el desarrollo de variadas modalidades de producción que no obstruyen la diversidad de miradas culturales, sociales, políticas

de los participantes en el taller, pero que sí permiten la construcción de un horizonte colectivo desde el cual pensar y actuar para el bien común.

Los talleres incorporan una instancia de «puesta en común» que es clave al momento de exponer relatos grupales, relevar diferencias, y constituir horizontes de abordaje y comprensión. Todas toman la palabra en un proceso de socialización e identificación de lo común para un actuar articulado. Así se configuran como espacios de formación de comunidades temporales que permiten la elaboración de estrategias y prácticas para el conocimiento colectivo y la transformación social. Los talleres, tanto en su proceso de construcción como de resultados, funcionan en primera instancia como dinamizadores lúdicos que luego se autonomizan a partir de la autogestión de deseos y necesidades de los grupos, para recrear un protagonismo desafiante que se visibiliza en la heterogeneidad de las voces colectivas participantes.

Los talleres, tanto en su proceso de construcción como de resultados, funcionan en primera instancia

como dinamizadores lúdicos que luego se autonomizan a partir de la autogestión de deseos y necesidades de los grupos, para recrear un protagonismo desafiante que se visibiliza en la heterogeneidad de las voces colectivas participantes. Un mapa colectivo no crea nuevas fronteras sino que enlaza «lo común» a partir de la constitución de comunidades transitorias. No se basa en separar sino en elaborar un horizonte compartido de sentidos, prácticas, problemáticas y formas de resistencia que no opaque las particularidades. Justamente una de las virtudes de esta construcción colectiva es la posibilidad de articular subjetividades diversas para accionar en la construcción de relatos emancipatorios, disruptivos o inclusivos. ▀



Plenario final del encuentro «Saberes y Movimientos: Entre las crisis y otros mundos posibles» mostrando mapas de cosmovisiones andinas y occidentales en Lima, Perú, 2010 (Autores: Julia Risler y Pablo Ares)

El uso de OpenStreetMap en el contexto humanitario

Entrevista a Séverin Ménard*

Traducido por: Ester Jimenez Puig

«El control y la regulación de la información geográfica se han convertido en un desafío económico, político y social de primera línea que los ciudadanos no deben ignorar. Se enfrentan y se asocian multinacionales de internet, proveedores de acceso, operadoras telefónicas, Estados...»

Sr. Thierry Joliveau (*Le Monde*)

El proyecto OpenStreetMap (también conocido como OSM) pretende construir una base de datos geográficos de todo el mundo. Este proyecto se califica comúnmente como libre, abierto y colaborativo:

1. *Libre*, porque la base de datos OSM está bajo licencia ODbL (Open Database License) y porque el entorno de edición de la base de datos está constituida por *softwares* libres.
2. *Abierto*, pues, con sólo disponer de unos mínimos recursos informáticos, todo el mundo puede participar en él de forma muy variada (recopilando datos, editando la base de datos, compartiendo trazas GPS, promoviendo el proyecto, utilizando los datos ...).
3. *Colaborativo*, porque los datos los producen pluralidad de personas, las cuales parten del principio de que es esa diversidad la que da fuerza al proyecto y asegura la calidad de los datos.

En realidad, OpenStreetMap representa un caso particular del movimiento Open Data (Datos Abiertos). Para empezar, se trata de un proyecto en el cual lo esencial de cada dato se crea *ex nihilo* (de la nada), gracias al trabajo de colaboraciones voluntarias. La importación de datos públicos es una fuente posible, pero no es más que una parte minoritaria de las aportaciones. Ya que los datos OSM conciernen a objetos enmarcados en un espacio, todo el mundo puede participar fácilmente, añadiendo nuevos objetos o haciendo correcciones. Al final, el volumen de datos producido es enorme y permite lograr un nivel de detalle sin precedentes.

Para funcionar, OSM no necesita a priori la «apertura masiva» de datos por parte de ninguna empresa o institución pública. No obstante, en estos últimos años, podemos citar varios ejemplos de colaboración entre empresas privadas y la comunidad OSM, algunos de los cuales, muy mediatizados, han contribuido a la promoción de OSM (o simplemente al aumento de la base de datos).

Es el caso del acuerdo establecido en noviembre de 2010 entre Microsoft (propietaria del servicio web de cartografía *Bing Maps*¹) y la comunidad OSM, según el cual estos últimos pueden usar libremente las imágenes satelitales de Bing para enriquecer la base de datos cartográficos libre. Por su parte, Bing ha añadido a su mapa una «capa» OpenStreetMap.

* Este artículo ha sido elaborado a partir de una entrevista a Séverin Ménard, coordinador del proyecto Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT), realizada por Raphaël Traineau y Augustin Doury.

1 <http://www.bing.com/maps/>

El uso de OpenStreetMap en contexto humanitario y de desarrollo: Humanitarian OpenStreetMap (HOT)

En el caso concreto de la ayuda humanitaria cabe destacar que después del seísmo del 12 de Enero de 2010 en Haití hubo una contribución sin precedentes por parte de empresas privadas a la respuesta de crisis en lo relativo a la información geográfica. Empresas y organizaciones internacionales como GeoEye, Digital Globe, Google y UN-SPIDER, que producen imágenes satélite o distribuyen imágenes aéreas, decidieron liberar sus imágenes recientes relativas a las zonas afectadas. Y el Banco Mundial financió de nuevo vuelos para producir imágenes actualizadas y las distribuyó gratuitamente a la comunidad CrisisCommons². En la mayoría de casos las imágenes han pasado a ser de dominio público.

Sin embargo, una de las trabas a la liberación de imágenes en contexto de crisis para el proyecto OpenStreetMap podría ser la licencia ODbL de OSM, incompatible con una restricción NC (no comercial).

En los países empobrecidos los datos geográficos son inexistentes o, si existen, son de difícil acceso y están en un entorno generalmente restringido (esto último también sucede en la ma-

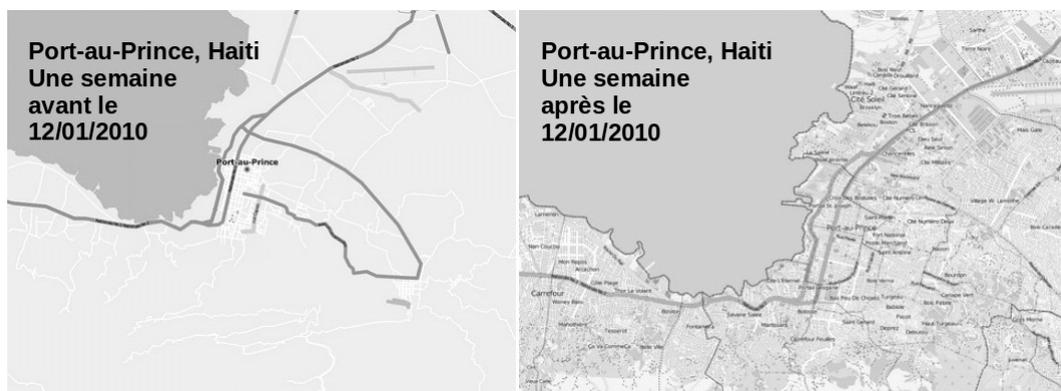
yoría de países desarrollados). Las proveedoras de datos privados se interesan poco por los países en desarrollo, más allá de sus ciudades capitales.

Ni la población, ni autoridades locales como ciertos servicios públicos, pueden acceder a datos que, paradójicamente, han sido financiados con fondos públicos. En las universidades el estudiantado recibe formación con datos geográficos de otros países (de Europa y de Norteamérica). Pero la información sobre carreteras, edificios, actividades económicas, ocupación del suelo, etc. es esencial para el desarrollo de esos países y para su preparación y respuesta posterior a los desastres que les puedan afectar. Así pues, OSM cubre un vacío informativo y constituye una ventaja real para la educación, el desarrollo y la respuesta humanitaria.

Los datos geográficos son pues un recurso esencial en situación de crisis, pero además representan un factor indispensable para el desarrollo. Con esta premisa, es fácil entender el interés por una información geográfica de calidad y accesible a todos: gobiernos, sector privado, y sociedad civil. Multiplicando el número de personas con acceso a los datos, se multiplican las posibilidades de uso de esos datos y se abre paso a la innovación.

En este sentido, las bases de datos geográficos libres serán en el futuro grandes activos para los gobiernos, las instituciones educativas e incluso las empresas que quieran conquistar nuevos mercados.

² <http://crisiscommons.org/about/>



Mapas 1 y 2. Comparación de los datos de OSM disponibles sobre Puerto Príncipe (Haiti) una semana antes y después del seísmo del 12/01/2010. (Fuente: © OpenStreetMap Contributors)

El futuro de Open Data

En diez años, OSM constituirá la base de datos espacial más detallada en gran número de países, desarrollados o en desarrollo. Uno de los retos en los que quiero trabajar en los próximos meses es la mejora de la consolidación de los datos a cualquier escala, para que la creación de zonas muy detalladas (barrios, ciudades, regiones) venga acompañada de un afán de exhaustividad a escalas más amplias; por ejemplo: que cada red de carreteras nacional sea cartografiada de forma integral. En diez años, los smartphones estarán por todas partes, y todo el mundo se podrá desplazar usando datos OSM, tanto en los centros urbanos de países desarrollados, como en las regiones rurales de países en desarrollo. Espero también que, en diez años, habrá comunidades OSM activas en todo el mundo, apoyadas por actores económicos que habrán percibido el interés de basarse en datos libres. Otro reto concierne la integración de instituciones geográficas nacionales en este nuevo ecosistema. Que no vean OSM como una competencia sino que aprovechen la gran cantidad de colaboradores voluntarios, muy superiores en número a sus propios cartógrafos y consagrados a la creación de datos geográficos de base. Que se concentren y fortalezcan en las actividades donde su experiencia y sus competencias no serán sustituidas por las colaboraciones de OSM: la validación oficial de los datos según estándares rigurosos y los análisis de todo tipo realizados a partir de esos datos validados.

Parece pues esencial que los estados y las empresas comprendan, si no lo han hecho ya, el interés que supone Open Data, para no anclarse en una lógica de competitividad y de mayor protección de sus datos, sino más bien en una lógica de distribución y colaboración con la sociedad civil, fortaleciendo así su capacidad de acción para la creación y mantenimiento de datos, aprovechando unos medios financieros indispensables para buena la salud y el desarrollo del proyecto OSM.

Desde el punto de vista de la información geográfica, si se desarrolla el movimiento Open Data, sobretudo a través del proyecto OpenStreetMap, el dato bruto tendrá cada vez menor valor de mercado. El valor añadido comercializable de estos datos recae en su representación,

tratamiento o análisis. Es esto a lo que se dedica la empresa alemana *GeoFabrik*³, que describe su actividad como «la extracción, la selección y el tratamiento de datos geográficos libres».

Así pues, no se puede reducir el proyecto OpenStreetMap a una simple alternativa gratuita a servicios bien conocidos como Google-Maps, o a una herramienta útil por defecto sólo en los llamados países «en vías de desarrollo». Es necesario que las instituciones estatales y la esfera económica vean en OpenStreetMap una oportunidad real para el desarrollo económico y social de los territorios.

Conclusión

El desafío particular de la información geográfica y la potencia del proyecto abierto, libre y colaborativo OpenStreetMap ofrece un marco interesante para comprender, de manera más general, los factores clave de éxito de los proyectos que se unen al movimiento Open Data. Es particularmente necesario que se desarrolle una colaboración de calidad entre los miembros de una comunidad abierta y voluntaria y los actores públicos y privados; y que estos diferentes actores comprendan el interés común que representa esa cooperación.

A este respecto, podemos citar al texto de Nicolas Gignac en el blog *democratieuverte.org*:

«No hay que ver la publicación de datos abiertos geográficos como un fin en sí mismo, sino conseguir que las organizaciones que abren sus datos desarrollen un entorno abierto (combinando, tanto como sea posible, software libre, datos abiertos y estándares abiertos) permitiendo igualmente a los ciudadanos participar en la mejora de la calidad de esos datos, y alcanzar así una colaboración completa entre la sociedad civil y los productores de datos. A largo plazo, eso permitiría mejorar la eficacia de las administraciones públicas al estimular la participación, la innovación, el incremento de datos, la colaboración constructiva y la mejora de la calidad de los datos geográficos»⁴. ■

3 <http://www.geofabrik.de/>

4 Para más información, ver «activation en République Centrafricaine»: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:WikiProject_Central_African_Republic#Crise_en_RCA_-_Activation_HOT_-_Objectifs

«El barrio no se vende»

Las *barriografías* de la Barceloneta como herramienta de resistencia vecinal frente al extractivismo urbano

Emma Alari Pahissa*

En el verano de 2014 en las calles de la Barceloneta, «el barrio de la playa» de la metrópolis barcelonesa, irrumpe una gran movilización vecinal¹ contra la masificación turística, bajo el lema «La Barceloneta no es ven» («La Barceloneta no se vende»), con el objetivo de acabar con la proliferación de apartamentos turísticos en los minúsculos pisos característicos de este barrio popular, de tradición pescadora, portuaria y obrera, hoy ya muy terciarizado. La presión turística en la Barceloneta se ha disparado en los últimos años: los hogares son sustituidos por lucrativos apartamentos, y las tiendas del día a día ceden el paso al comercio orientado al turismo. Además, esta península viene siendo objeto de una intensa especulación inmobiliaria: el precio del metro cuadrado es de los más caros de la ciudad y apenas ha bajado desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008.

A raíz de los Juegos Olímpicos de 1992, que pusieron a Barcelona en el mapa de ciudades globales, se efectúan en el perímetro del barrio

importantes transformaciones urbanísticas «para abrir la ciudad al mar», como la demolición de los históricos tinglados del puerto, de los antiguos establecimientos de baños y de los populares «merenderos» (chiringuitos). Estas destrucciones y «aperturas» fueron sucedidas por otras construcciones y cercamientos, como la mole de cien metros de alto del Hotel Vela – inaugurado en 2009 y erigido en terrenos de dominio público y al borde del mar, a pesar de la Ley de Costas –, y la marina de lujo para megayates – «a World Class Superyacht Marina in a World Class City», reza la propaganda de Marina Port Vell².

Este frenesí urbanístico de destrucción y construcción es característico de la lógica espacial de la neoliberalización (Franquesa, 2007) o, en otras palabras, responde a una estrategia especulativa de acumulación de capital que rompe tejidos de vida urbana. La lógica del capital exige un crecimiento exponencial sin fin, implica un metabolismo voraz que trata los espacios, sean urbanos o naturales, como lotes a explotar para la extracción de rentas privadas, a costa de la riqueza común (acumulación por desposesión). La ofensiva mercantilizadora se intensifica y se extiende a todos los ámbitos de la vida a los que tiene acceso, desde los territorios y los cuerpos, hasta los saberes y la cultura. En palabras de David Harvey (2014: 255), «La infinita y cada vez

* Emma Alari Pahissa (emma.alari@gmail.com), Associació de veïns i veïnes de l'Òstia / Plataforma en Defensa de la Barceloneta, Memòria Obrera de la Barceloneta (MOB), Observatori d'Antropologia del Conflictu Urbà de la Universitat de Barcelona (OACU-UB).

¹ Esta movilización ha fraguado en el nuevo movimiento vecinal («La Barceloneta diu prou»). En este artículo nos ocupamos de un movimiento anterior, protagonizado por la Asociación de vecinos y vecinas de la Ostia y la Plataforma en Defensa de la Barceloneta. Estas dos entidades, que de hecho son un mismo colectivo asambleario, han confluído parcialmente en el nuevo movimiento, pero sin ánimo de protagonizarlo.

² Salamanca Group, fondo británico de inversión de capital de riesgo, obtuvo la concesión de la marina en 2010, operación que la Oficina Antifraude de Cataluña ha denunciado como una maniobra de blanqueo de capitales (*El País*, 2014).

más absurda acumulación exponencial de capital se ve acompañada de una infinita y cada vez más absurda invasión del mundo de vida por la ecología del capital».

Barcelona es un claro exponente de lo que podemos llamar *extractivismo inmobiliario, urbanístico y turístico*³. La ciudad es explotada como si no tuviera límites, con un imperativo de crecimiento insostenible. Para el Ayuntamiento y Turismo de Barcelona S.A. cada año hay que traer más turistas, abrir más terminales de cruceros y construir más hoteles. La ciudad es puesta al servicio de las oligarquías locales y transnacionales mediante un modelo de gobernanza público-privada, donde el interés público queda supeditado al negocio privado. Como se afirma en la propia web del Ayuntamiento en una sección dedicada a la atracción de inversores, los «proyectos para el crecimiento económico de la ciudad se impulsan con un modelo de colaboración público-privada donde todos ganan (*win-win*)»⁴. ¿Hace falta aclarar que unos pocos ganan muchísimo a costa de la precariedad de la mayoría? ¿Hace falta dar cifras de recortes, desahucios, despidos, privatizaciones, o suicidios? Como dice Bauman (2005), nadie planifica las víctimas colaterales del «progreso económico». Buena muestra de ello es que el Ayuntamiento de Barcelona ni siquiera lleva un inventario de los miles de expropiaciones y realojos que viene haciendo como «daño colateral» de sus planes urbanísticos (*Masala*, 2013).

En el centro histórico de Barcelona, la alianza entre el poder político y el poder económico es encarnada desde 1988 por Foment de Ciutat Vella S.A. (Focivesa, antes Procivesa), entidad donde Ayuntamiento, Diputación de Barcelona y Generalitat de Catalunya han compartido consejo de administración con Caixa Bank, Catalunya Caixa, BBVA y Telefónica (*Masala*, 2013 y 2014). Este entramado es el impulsor de los planes urbanísticos en el distrito de Ciutat Vella.

3 El término *extractivismo turístico* lo ha acuñado Marina Garcés (*ELDiario.es*, 2014). Afín a este concepto es uno de los lemas del movimiento vecinal de la Barceloneta: «No queremos ser un monocultivo turístico».

4 <http://w42.bcn.cat/web/es/per-que-barcelona/10-Raons-per-invertir-a-Barcelona/index.jsp>, consultado el 7 de octubre de 2014.

Ante las reivindicaciones que surgen en las zonas afectadas, el Ayuntamiento ha concedido un estrecho margen para la participación ciudadana, pero en la práctica, y salvo alguna excepción, los vecinos no son considerados como sujetos capaces y con derecho a deliberar y decidir colectivamente sobre aquello que afecta el lugar que habitan. Según la Administración, el objetivo del planeamiento es «la mejora del barrio», y si los vecinos no están de acuerdo es porque no lo entienden. Esta fue la opinión expresada por el regidor de Ciutat Vella Carles Martí ante la resistencia levantada a partir de 2006 en el barrio de la Barceloneta frente al anuncio de la «Modificación del Plan General Metropolitano en la regulación de la edificación tradicional de la Barceloneta para la mejora de su accesibilidad vertical», conocido como «plan de los ascensores» y aprobado en mayo de 2007 en medio de una intensa oposición vecinal.

El «plan de los ascensores» implicaba la eliminación de hasta 1500 viviendas para hacer sitio al hueco del ascensor, ya que en el 83% de los edificios de la Barceloneta no cabe. Se harían fusiones de entre dos y seis edificios en una sola finca, compartiendo un mismo ascensor. Los inquilinos, mayoritarios en la Barceloneta, no tenían ni voz ni voto, y la implementación del plan quedaba en manos de los propietarios verticales y las promotoras inmobiliarias. De aplicarse, el plan conllevaría la expulsión de vecinos, derribos por doquier, y alimentaría las dinámicas de especulación y gentrificación del barrio.

Frente a este plan del poder, que bien podríamos calificar de *barriofágico*⁵, se articuló a partir de 2006 la Plataforma en Defensa de la Barceloneta, donde confluyeron la recién creada Asociación de vecinos y vecinas de la Ostia⁶ (alternativa a la asociación histórica, que había dejado de hacer oposición al Ayuntamiento), otras vecinas con más o menos tiempo viviendo en el

5 De *barrio* y *antropofagia*: palabra de cosecha propia, inspirada en el concepto de *barricidio interminable* acuñado por el periódico *Masala* (2014).

6 El barrio de la Barceloneta es conocido popularmente como *La Ostia*. El germen de la Asociación de vecinos y vecinas de la Ostia, creada en 2005 y liderada por Emilia Llorca, fue la Comisión de Fiestas de la calle Pescadors. Para más información: <http://la-ultima-calle.com>

QUEREMOS

- Equipo cultural
- Equipo deportivo
- Formación profesional
- Servicios médicos
- Vivienda social
- Más transporte público

DENUENCIAMOS

- Especulación inmobiliaria apartamentos turísticos
- Costura para turistas
- Continuación
- Desaparición pequeñas comercios

TRANSPORTE PÚBLICO
Las paradas de los autobuses están mal identificadas y se ha reducido el servicio.

PASEO JOAN DE BORBO
Proteger los pequeños comercios y los locales comerciales pensados para los turistas.

MERCADO
No cumple su función social ya que los vecinos no compran allí debido a los altos precios. Su construcción generó un gesto incoherente ya que podía haberse restaurado el antiguo.

PLAN DE ASCENSORES
El Ayuntamiento de Barcelona se compromete a financiar el 50% de los ascensores que se instalen en los edificios de viviendas.

DESARROLLO DE 1500 FAMILIAS
Es decir, un 20% de los habitantes tendrá que abandonar el barrio.

FRONTE MARÍTIMO
Fue remodelado durante las Olimpiadas. En esta zona superrepletada donde el poder de decisión se concentra en pocas manos que se mueven mediante intereses y favores personales.

LA BARCELONETA
Se fundó en 1753 (siempre ha sido un barrio obrero) y popular hoy los habitantes son más de 15 mil de los cuales casi el 50% vive en régimen de alquiler.

¡EXIGIMOS LA ANULACIÓN!
Del "Plan de ascensores" pues esto causará la expulsión directa de la población tradicional, y de aquellos que no tienen contratos definidos; la expulsión indirecta de vecinos por encarecimiento de alquileres y de precios por encarecimiento del turismo, por desaparición y por vivir en un barrio que está en obras constantemente.

SI VIVES DENTRO DE LA LÍNEA ROJA PUNTEADA SERÁS PERJUDICADO
PLAN DE ASCENSORES = PLAN DE EXPULSIONES
SERÁ COSTEADO POR LOS VECINOS, EL INQUILINO NO TENDRÁ NI VOZ NI VOTO, Y EL PEQUEÑO PROPIETARIO SALDRÁ PERDIENDO

DESARROLLO DE 1500 FAMILIAS
Es una iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona. Se aprobó el 6 de mayo de 2007. Propone colocar ascensores en los edificios de la Barceloneta y esto se haría eliminando viviendas para hacer el espacio de ascensores, ya que en un 83% de los edificios no cabe. Con su concreción la planificación del barrio y la vida de sus habitantes quedarían en manos de la especulación del mercado inmobiliario y el capital privado.

¿QUÉN DECIDE ESTO?
El 50%+1 de los propietarios de los terrenos.
Quien tiene más suelo, más propiedad, tiene más capacidad de decisión.

EJEMPLO SOLAR DE 3 EDIFICIOS
Del total de 1500 votos del solar (100%)

1 DUEÑO	3 DUEÑOS	5 DUEÑOS
33.3%	11%	3.6%

Los inquilinos no tienen ni voz ni voto. Se dice que se convierte en un solar porque la plaza es la misma que la de la rehabilitación de viviendas, no se tiene en cuenta quién vive, quién no vive; sino quién tiene más.

La Carteltoneta, "carta de los vecinos y vecinas de la Barceloneta", fruto de un taller de mapeo colectivo

barrio, y miembros del colectivo okupa Miles de Viviendas⁷, aterrizado en la Barceloneta en noviembre de 2004. Los lemas «Es nuestro barrio, no un pastel inmobiliario», «Cap pla sense els veïns, cap veí fora del barri» («Ningún plan sin los vecinos, ningún vecino fuera del barrio») y «Tenemos derecho a la Barceloneta» sintetizan la orientación y el objetivo fundamental del movimiento. Las herramientas de lucha desplegadas en todos estos años han sido muy variadas (asambleas semanales, puntos de información en la plaza del mercado, manifestaciones, charlas,

jornadas, materiales de difusión, múltiples canales de comunicación digital, etcétera.). De entre todo el repertorio, en este artículo nos detendremos en tres *contracartografías* de la Barceloneta creadas al calor del movimiento en defensa del barrio: la Carteltoneta, la Geografía Esborrada de la Barceloneta y la Memòria Cooperativa de la Barceloneta.

Contracartografías: reclamando otras historias y otras geografías frente a los planes del poder

«Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas.»

Rodolfo Walsh

La Carteltoneta es un mapa-carta de la Barcelo-

neta realizado por el dúo argentino Iconoclastas⁸ junto a vecinos y vecinas y otras participantes de un taller de mapeo colectivo, organizado en mayo de 2009 en el marco de las Jornadas Krax-City mine(d) «Out of control. Poder de transformar, poder de crear».

El documento visualizó de modo muy claro y didáctico en qué consistiría la aplicación del «plan de los ascensores», cuyo desciframiento y denuncia no había sido nada fácil (teníamos que aclarar continuamente que no estábamos en contra de los ascensores, sino contra la destrucción de viviendas y la expulsión de vecinos y la decisión en manos de los propietarios verticales). Además, la Carteltoneta incluía un mapa con iconos que localizaban cosas que queríamos (como equipamientos o vivienda social) y otras que rechazábamos (como apartamentos turísticos, desaparición de pequeños comercios...). Una carta de presentación, de vecina a vecina, también se posicionaba en este sentido e invitaba a informarse e implicarse. Se imprimieron y repartieron cientos de copias en distintas ocasiones. Sin duda la Carteltoneta contribuyó, junto a otras herramientas, a la anulación en 2008 del «plan de los ascensores», que quedó políticamente paralizado, aunque legalmente vigente.

La Geografía Esborrada de la Barceloneta⁹ nació en el contexto de la lucha vecinal en defensa de un barrio popular amenazado por la violencia inmobiliaria y urbanística. El proyecto, colaborativo y totalmente autogestionado, consistía en una cartografía visual y sonora para «refrescar la memoria» de lugares emblemáticos del barrio, espacios de sociabilidad popular, la mayoría de los cuales habían sido *borrados del mapa* en el pasado reciente¹⁰. Un mapa melan-



La Carteltoneta, parte externa del tríptico

cólico que invitaba a recordar lo perdido, lo arrasado, justamente para defender y cuidar lo que aún tenemos. Este compromiso de la memoria con las luchas del presente se ponía de manifiesto en el tour de la Geografía Esborrada celebrado en marzo de 2008 en el marco de las Jornadas de Participación Vecinal Autoorganizada «La Barceloneta habla y decide» (dedicadas al análisis, desmontaje y contrapropuesta al «plan de los ascensores»), o en el tour realizado contra el desalojo del centro social okupado Miles de Viviendas (derribado en junio de 2007).

La Geografía Esborrada tenía varios formatos de uso: un mapa y un audio-tour descargables en la web, para itinerarios por libre, y también tours colectivos presentados con un vestuario y atrezzo hechos especialmente para la ocasión, que evocaban, entre lo entrañable y lo irónico, los motivos marineros del barrio. El mapa señalaba y explicaba nueve localizaciones y apuntaba seis más, quedando abierto vía web a la incorporación de otros lugares borrados; también fue publicado como póster desplegable en el periódico *Masala*. Una impresión de gran formato está presente desde hace años, junto a la de la Carteltoneta, en los puestos de información de la plaza del mercado y otros eventos de la asamblea de vecinas de la Ostia. Ambos mapas constituyen herramientas que acompañan la lucha y que se complementan entre sí: el mapa de la memoria (y lo retrospec-

chas otras colaboradoras. Actualmente está en preparación otro proyecto afín, Tornar al Lloc: <http://tornarallloc.wordpress.com>

8 <http://iconoclastas.net>. Ver su artículo en este mismo número de *Ecología Política*.

9 <http://geografiasborrada.wordpress.com>

10 El proyecto fue una iniciativa de Marina Monsonís, nacida en la Barceloneta, junto a las compañeras del colectivo Miles de Viviendas Emily Piper Forman y Aviv Kruglansky, y con mu-



Portada de la *Geografía Esborrada de la Barceloneta*

tivo no deja de ser prospectivo), y el mapa del presente, esbozando juntas el porvenir.

La *Memòria Cooperativa de la Barceloneta*. En el Estado español cuarenta años de dictadura franquista y cuarenta más de «cultura de la Transición» – con su continuismo institucional y su *olvido organizado* (Gelman, 2008)¹¹ – nos separan de las luchas obreras anteriores a 1939. Toda una constelación de asociaciones obreras (sindicatos, ateneos, escuelas libres, cooperativas de consumo y de producción, etc.) articulaban la vida cotidiana en los barrios proletarios. La investigación y divulgación llevada a cabo desde 2009 por La Ciutat Invisible¹² ha mostrado el importante papel que desempeñaron las cooperativas de consumo como espacios de autogestión colectiva de las necesidades comunes: partían de asegurar una alimentación mejor y más asequible, saltándose a los intermediarios, pero

11 Juan Gelman (2008): «Desaparecen los dictadores de la escena y aparecen inmediatamente los organizadores del olvido».

12 Cooperativa autogestionaria del barrio de Sants de Barcelona, divulgadora del cooperativismo histórico e impulsora del proyecto Sants Barri Cooperatiu, entre otras iniciativas. Ver: Miró y Dalmau (2010); <http://sants.coop>

se ocuparon también de la previsión social, la educación, la salud, la cultura, el ocio y la vivienda. El horizonte era la cooperativización de todas las actividades económicas, hasta llegar a superar por completo las relaciones sociales capitalistas.

En estos tiempos de vidas precarizadas la atomización se quiebra y (re)aprendemos a organizarnos en primera persona del plural. Aquí y allá aparecen cooperativas de consumo, de trabajo, de energía, de crédito, espacios de encuentro autogestionados, antiguos edificios de cooperativas recuperados para su uso comunitario, y horizontes de barrios cooperativos y ciudades comunes. El proyecto de *Memòria Cooperativa de la Barceloneta*¹³ va en este rumbo. Es un grupo de investigación surgido a raíz de una campaña de la Asociación de vecinos y vecinas de la Ostia reclamando para el barrio el edificio de la antigua Cooperativa Obrera y Popular El Siglo XX. Esta fue fundada en 1901 y levantada con el esfuerzo mancomunado de familias obreras durante generaciones, pero cayó en manos privadas y es carne de abandono y especulación desde los años noventa. Por el camino, se ha arrancado del olvido la historia de las cooperativas barcelonetas, gracias a los archivos conservados y a los testimonios orales. La investigación se ha materializado en una web¹⁴ (que incluye un mapa de las cooperativas del barrio, una selección de imágenes documentales y varios clips audiovisuales), una exposición, un libro en preparación y múltiples presentaciones y rutas. Todo esto con el doble objetivo de recuperar el edificio del Siglo XX como espacio comunitario autogestionado, y de devolver al barrio la memoria de sus luchas pasadas, como herramienta para las del presente: es lo que Xavier Domènech llamó «*la memoria del futuro*».

13 Actualmente mutando a *Memòria Obrera de la Barceloneta* (MOB), para abarcar no sólo a las cooperativas sino al conjunto de entidades obreras que poblaban el barrio.

14 <http://memoriacooperativa.labarcelonetarebel.org>

A modo de conclusión

Frente a los planes delineados e impuestos desde arriba se contraponen, desde el barrio vivido, mapeos colectivos de las necesidades, deseos, memorias y espacios que compartimos. Estas *barriografías* contribuyen

LA BARCELONETA OBRERA. COOPERATIVA I REBEL

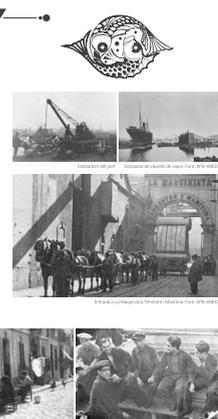
INDUSTRIALIZACIÓN, BARRIOS OBREROS Y COOPERATIVISMO

Del 1.º de mayo del 1773, la Barceloneta vivió un baño de pasadizo, de muelles y estaderos del port. «Amb l'entrada del segle XIX –explica Martí Tàrrer–, començava les transformacions que marquen el pas a una nova era: la industrialització, el creixement urbà en altura i extensió, els conflictes laborals i les pressions per deficiències urbanístiques». El gran estira fora de les muralles, a bocar del port, del ferrerai, de la resta de la ciutat i també molt d'espai sense edifici, tot això el feia arribar fins a la zona basto de fàbriques. Així, el 1836 començava la **Nuevo Vulcano**, pionera en la construcció de navells de vapor, el 1853 la dels Espana, constructora de la primera marina de torres i l'any 1855 quedava domada empresaria fusió amb Tosi i Escobé per fundar la agrupació **Maquinista Terrestre i Marítima**, una de les empreses emporales que guanyà que marcava la vida al barri durant gairebé un segle. També proliferaren altres indústries més petites, especialment en el sector naval i pesquer.

Entre les fàbriques i els tallers, la pesca, el port, la construcció i el comerç, hi havia feina. Per això, entre la primera meitat del segle XIX i el primer terç del segle XX, la Barceloneta registrà un enorme **creixement de població vinguda d'arreu** (Paris, Londres, Terranova, Irlanda, etc.). A causa d'això, el 1872 en té 4.118 habitants, el 1900 ja n'eren 20.038, i el 1937, prop de 30.000. Els grans països de l'edificació i els adobadors per dies, donant lloc als minúsculs «quarts de casa». Així, la Barceloneta es convertí en un dels blocs més densament poblats de la ciutat de tota Europa.

L'arranjament de gent, faga a les deficiències en el cobrament, en l'accés a la feina i a la cultura i en la qualitat d'habitatges, acabaven el terreny per a les esquadres de còlera, de la grip i de la pesta més que mai en els dies de 1821, 1854, 1858 i 1919; i a aquestes esquadres s'hi afegien les víctimes dels temporals.

La Barceloneta on van néixer les cooperatives era un barri fonamentalment obrer, on la gran empresa que hi vivien eren les petites, més d'obres, menys normenades a partir dels anys 1930: **traballadors a la fàbrica o al taller en condicions deïssimes**, entre dotze i quaranta hores diàries, a les 12 o 13 hores al dia. A més, no existien els subsidis d'atur, ni les feines per malalta o accident, ni les pensions de jubilació i jubilació; la sanitat pública que donava que són fruit de lluites i lluites lluites.




Uno de los plafones de la exposición Memòria Cooperativa de la Barceloneta

a tejer un imaginario empoderador y transformador del barrio como *bien común* para ser vivido, amado, defendido y construido por sus vecinos y vecinas, frente al modelo hegemónico de *extractivismo inmobiliario, urbanístico y turístico*. Se trata de una oposición entre el mercado y la vida, tal y como expresan eloquentemente los lemas «La Barceloneta no se vende» y «Queremos vivir en la Barceloneta». ■

Referencias

BAUMAN, Z. (2005) *Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias*. Buenos Aires: Paidós.

EL DIARIO.ES (2014) «Marina Garcés, la enmienda filosófica al modelo Marca Barcelona», 17 de ju-

lio, http://eldiario.es/catalunya/Marina-Garces-filosofica-Marca-Barcelona_0_282072665.html, consultado el 5 de octubre de 2014.

EL PAÍS (2014) «Antifraude vincula la Marina Port Vell al blanqueo de capitales», 11 de noviembre, http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/11/catalunya/1415739975_756896.html, consultado el 11 de noviembre de 2014.

FRANQUESA, J. (2007) «Vaciar y llenar o la lógica espacial de la neoliberalización», *Revista española de investigaciones sociológicas*, núm.118, p.123-152.

GELMAN, J. (2008) «El imperativo moral de la memoria colectiva», conferencia en el Primer Encuentro Internacional de Memoria Histórica, Universidad de Salamanca.

HARVEY, D. (2014) *Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo*. Quito: Editorial IAEN.

MASALA (2013) «Un milió d'euros per als accionistes privats de Focivesa», núm.65, enero-febrero, <http://masala.cat/un-milio-deuros-de-beneficis-per-als-accionistes-privats-de-focivesa/>, consultado el 7 de octubre de 2014.

MASALA (2014) «Política, poder y empresa en Ciutat Vella. Del urbanismo de zafarrancho al urbanismo de compra-venta», núm.70, marzo-abril, <http://masala.cat/del-urbanismo-de-zafarrancho-al-urbanismo-de-compra-venta/>, consultado el 7 de octubre de 2014.

MIRÓ, I. y DALMAU, M. (2010) *Les cooperatives obreres de Sants. Autogestió proletària en un barri de Barcelona (1870-1939)*. Barcelona: La Ciutat Invisible Edicions.

TALLER V.I.U. (2006) *El cielo está enladrillado. Entre el mobbing y la violencia inmobiliaria y urbanística*. Barcelona: Bellaterra.

Más información:

<http://iconoclastas.net>
<http://labarcelonetarebel.org>
<http://memoriacooperativa.labarcelonetarebel.org>
<http://geografiasborrada.net>
<http://masala.cat>
<http://la-ultima-calle.com/>
<http://elbarrishadedefensar.info/>
<http://sants.coop>
[http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2014/MunaMakhloufDe la Garza.pdf](http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2014/MunaMakhloufDe%20la%20Garza.pdf)

Maptivismo: experiencias prácticas

Mapeando el procesamiento de basura electrónica en Agbogbloshie, Ghana

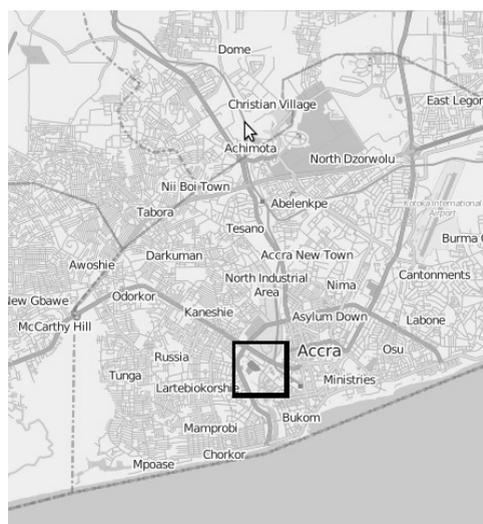
Rafael Fernández-Font Pérez*

Uno de los lugares más contaminados del mundo

El barrio de Agbogbloshie, en Accra, Ghana, en su momento un área natural en la desembocadura del río Odaw, hoy alberga un taller de chatarra a cielo abierto donde se procesan materiales tóxicos. Es conocido especialmente por la basura eléctrica y electrónica: el *e-waste* (Amoyaw-Osei, 2011). Agbogbloshie aloja a 80.000 habitantes en su conjunto, gran parte de ellos de la etnia Dagomba y de religión musulmana. Muchos llegaron emigrados del norte del país a raíz de

conflictos tribales en la década de 1990. Hoy la emigración continúa por causa de la penuria económica en Tamale y alrededores, y el apoyo de la comunidad Dagomba ya establecida en Agbogbloshie a los nuevos emigrantes (COHRE, 2004).

En el mundo cada vez se descartan más aparatos electrónicos pero la capacidad de reciclaje no aumenta de igual forma (Yu et al., 2010). La definición de basura electrónica es problemática.



Mapas 1 y 2. Localización de Accra con respecto a Ghana, y de Agbogbloshie con respecto a Accra (Fuente: Wikipedia y OpenStreetMaps)

* Royal Holloway, University of London
(rafael.font.2013@live.rhul.ac.uk).
Más información: <http://qamp.net/> y <http://recybub.com/>

Hereda las dificultades de definir la propia «basura», cuándo deja de ser un residuo y empieza a ser un recurso potencialmente reciclable. En este caso se introducen términos con significados parecidos pero no iguales como *e-waste* (aparatos electrónicos obsoletos) y RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que a diferencia del anterior incluye, por ejemplo, frigoríficos).

Se ha propuesto como solución restringir la exportación de residuos electrónicos desde los países más industrializados a los menos. Esta aproximación se basa en considerar que el problema es el tráfico de basura electrónica, y que éste a su vez genera una injusticia ambiental global (Puckett, 2006). La Convención de Basilea es la principal norma mundial que implementa esta restricción, pero es incapaz de frenar un mercado mucho más complejo geográficamente (Lepawsky, 2014). Por otra parte, la exportación de ordenadores de segunda mano es un comercio aceptado, beneficioso y accesible económicamente para los países receptores, y que sin embargo generará residuos unos años más tarde. Se puede argumentar que encontrar la solución correcta dependerá de cómo se defina cuál es el problema real, y si los residuos son un desecho, un recurso, o ambos a la vez.

Ghana es uno de los países receptores. Allí no existe aún una industria de reciclaje respetuosa con el medio ambiente. La mayor parte del reciclaje se realiza por el denominado «sector informal», que aplica en ocasiones técnicas perjudiciales para el medio ambiente y la salud de las trabajadoras (Grant & Oteng-Ababio 2012). La narrativa mediática sobre Ghana y sobre el barrio de Agbogbloshie suele enfocarse en los procesos peligrosos como la quema de cables para extraer el cobre, y en la joven edad de algunas de sus trabajadoras (Danoritzer, 2014). Este texto explora en cambio una narrativa diferente, basada en reconocer que el procesamiento de residuos electrónicos genera unos ingresos imprescindibles para la población local (Oteng-Ababio, 2012) y en considerar Agbogbloshie como un enclave industrial. Para contar esta nueva historia, la exploración aérea del lugar es un elemento clave para comprender qué actividades se llevan a cabo y cómo se organizan en el espacio.

Agbogbloshie es también un gran taller a cielo

abierto. Además de la quema de cables se realizan muchas otras actividades de desmantelamiento de ordenadores, frigoríficos y coches que no suelen ser recogidas en los documentales (una excepción es Guardiola, 2012). El mensaje típico es un llamamiento a la responsabilidad occidental para no verter residuos en Agbogbloshie. Sin embargo, los residuos no son vertidos, sino que son comprados por las propias trabajadoras, que los procesan y venden posteriormente. Conocer en mayor detalle por medio de mapas la actividad de Agbogbloshie puede ayudar a redefinir los conceptos de residuo y recurso, reconsiderar el lugar como un taller en vez de un vertedero, y cambiar la imagen que tiene ante el mundo.

Agbogbloshie Makerspace Platform

Este texto recoge parte del trabajo de campo realizado por el autor en Agbogbloshie durante junio y julio de 2014. Una de las preguntas a resolver fue la siguiente:

¿La narrativa actual sobre Agbogbloshie recoge adecuadamente la situación sobre el terreno? ¿Existe una base para una nueva narrativa?

El trabajo de campo se realizó en colaboración con una organización local, AMP (Agbogbloshie Makerspace Platform). AMP tiene como objetivo construir un taller comunitario (un *makerspace*) para que las trabajadoras del lugar puedan desarrollar y construir sus propias herramientas. Estas herramientas les servirán para realizar su trabajo de desensamblaje de una manera más segura, sin dañar el medioambiente, y protegiendo su salud, garantizando a la vez mayores ingresos económicos. AMP busca una solución desde abajo hacia arriba. Bajo este punto de vista la injusticia ambiental que sufre Agbogbloshie puede redefinirse como la falta de herramientas adecuadas para hacer frente a los potenciales recursos que llegan en forma de residuos electrónicos.

AMP está llevando a cabo diferentes tareas. Está entrevistando a las trabajadoras para obtener información detallada sobre sus actividades, realizando experimentos sobre el reciclado de plásticos, creando vestimenta adecuada para las trabajadoras, probando un triturador de cables para evitar que se

quemem, y también lo que nos ocupa en este caso: construyendo un *quadcopter*, un aparato volador propulsado por cuatro motores eléctricos destinado a mapear el lugar a través de una cámara integrada.

Un gran centro de procesamiento al aire libre

Si Agbogbloshie fuese un vertedero electrónico, los ordenadores se apilarían allí, pero no es el caso. Casi todo el material que entra tiene valor, y es comprado y vendido, no vertido. Los camiones no solo entran, sino que salen cargados también. Al lado sí que existe un vertedero de residuos urbanos, destino final de los desechos de la ciudad, pero Agbogbloshie es más bien un centro de procesamiento, un nodo de la economía global del reciclaje. Eso sí, un nodo sucio y contaminado.

Además del procesamiento de residuos electrónicos, el área acoge muchas otras actividades: (a) una estación de autobuses de la compañía Imperial Express que une Accra con Tamale, la capital de la Región del Norte, (b) un área de procesamiento de plásticos especializada en polipropileno (PP) y que no trata plásticos procedentes del *e-waste*, (c) un conocido mercado de cebollas, incorrectamente mapeado en Google Maps, (d) una granja de cabras, (e) un área residencial, (f) un campo de fútbol y (g) el citado vertedero de residuos urbanos pero no de basura electrónica.

Esta simple división de zonas refleja mucha más información que la habitualmente ofrecida tanto



Mapa 2. Mapa de la chatarrería de Agbogbloshie y sus alrededores (Fuente: OpenStreetMap)

en artículos académicos como en documentales, y ayuda a entender mejor la realidad del lugar. Los mapas de la zona no suelen ser buenos. El área mostrada en la imagen se señala erróneamente como una zona verde en los mapas de Accra. Herramientas online como GoogleMaps y OpenStreetMap no tenían información sobre el interior de Agbogbloshie hasta que fue añadida durante este proyecto.

Incluso cabe cuestionarse las actividades que se llevan a cabo en el área de procesamiento de residuos electrónicos. Agbogbloshie es una chatarrería que procesa metales vengan de donde vengan, sean ordenadores, frigoríficos o automóviles. El desguace de vehículos es una actividad importante y habitualmente olvidada. Cabe suponer que mostrar esta realidad puede servir de mecanismo de enganche para entidades como «Mecánicos Sin Fronteras» que, si existiesen, serían de gran ayuda. De la misma manera enfocar el problema en la basura informática sirve para atraer a profesionales del sector, como el autor de este texto.

El *quadcopter*

Un *quadcopter* es un tipo de Vehículo Aéreo No Tripulado (UAV - Unmanned Aerial Vehicle) que vuela propulsado por cuatro motores. Existen varias versiones, desde pequeños juguetes a dispositivos comerciales usados para fotografía, monitorización ambiental, o respuesta humanitaria (Mosterman et al., 2014). El *quadcopter* usado en este proyecto es una alternativa de bajo coste a los modelos profesionales, con una estructura de poliespan y gomas elásticas, y un controlador Arduino (*hardware* y *software* abiertos). Es un diseño original de Ivan Gayton, empleado de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Londres. Su objetivo es desarrollar capacidad local para mapear áreas potencialmente críticas para las actividades de MSF, y ésta fue la primera prueba sobre el terreno. Es un diseño abierto, listo para ser replicado y mejorado. Los componentes electrónicos proceden de Asia, por lo que la dependencia de proveedores externos es similar tanto en Europa como en África.

El uso de un *quadcopter* precisa de una reflexión. La imagen pública de este tipo de aparatos no es buena, al ser asociada con los *drones*

empleados en operaciones militares. Sin embargo es cuestionable que ésta sea la imagen que tienen las trabajadoras de Agbogbloshie. Su vuelo habitual podría, sin embargo, generar rechazo entre la población, y es importante que sea una organización local quien esté al cargo de la iniciativa, informando del propósito de las misiones efectuadas. Los mapas resultantes deberían igualmente permanecer como propiedad de la comunidad local o tener licencias abiertas. Su objetivo es ayudar a generar una narrativa más acertada sobre Agbogbloshie por medio de mapas e imágenes aéreas, y esta narrativa debe estar en manos de la comunidad local.

Samuel Amoako-Frimpong, estudiante de ingeniería aeronáutica en la Universidad Kwame Nkrumah en Kumasi, Ghana, lideró el trabajo de ensamblaje del *quadcopter*, con ayuda de su compañero Timothy Affram. Ambos forman parte del «Creativity Group», una plataforma estudiantil que fomenta la innovación de base. Se realizaron varias sesiones de soldadura eléctrica, compra de materiales locales, y configuración de *software* en el espacio de co-working *Hub Accra*. Se desarrolló un borrador de manual que ilustra el trabajo realizado, y se hicieron varios vuelos de prueba en modo manual para ajustar su estructura. Se colocó un viejo teléfono móvil para experimentar la grabación de vídeo desde el aire. Las pruebas se completaron con un vuelo en Agbogbloshie en modo manual, logrando buena estabilidad, pero el trabajo de campo no fue suficiente para obtener imágenes aéreas. El *quadcopter* está ahora en manos de AMP. Las

posibilidades de vuelo automático que permiten programar despegue, ruta, y regreso a base abren muchas posibilidades.

Este proyecto avanza gracias a la confluencia de varios factores: la creación de un prototipo de bajo



Samuel Amoako-Frimpong realiza ajustes en el anclaje de los motores del *quadcopter* (Autor: AMP)

coste que Ivan Gayton puso a disposición bajo una licencia abierta; el interés del autor por probarlo en condiciones reales en Ghana; la acogida de un grupo interesado en el proyecto como AMP; y la implicación de una organización de estudiantes con conocimientos técnicos como el Creativity Group. La comunidad local por el momento es receptora pasiva. En las pruebas realizadas en Agbogbloshie la acogida fue muy positiva, celebrando sobre todo la presencia de tecnología avanzada y el interés por el lugar por parte de gente joven y preparada. El interés local al que responde este proyecto es mejorar la situación económica de las trabajadoras, y cualesquiera que sean sus aplicaciones deberían contribuir a ello. Esta iniciativa contribuye a mudar la percepción de que el lugar es un vertedero a que es una zona industrial. El mapeo en detalle del área proporciona, a su vez, los datos necesarios para identificar el uso del terreno.



Pruebas de vuelo en modo manual en Agbogbloshie, Ghana (Autor: AMP)

Conclusión

Agbogbloshie es más de lo que muestra la narrativa habitual. Aunque se quemen cables, es más un centro de procesamiento de basura electrónica que un vertedero. Existe una base para construir una nueva narrativa que caracterice este sitio como un área industrial que busca utilizar tecnología apropiada para aprovechar los recursos que le llegan de forma sostenible y sin dañar la salud. El *quadcopter* es una herramienta de bajo coste relativo que puede ayudar a sostener esta nueva narrativa, obteniendo imágenes del lugar, que una vez analizadas darán un informe preciso de las actividades realizadas. Es importante informar a la población sobre las misiones llevadas a cabo y de los resultados obtenidos.

El *quadcopter* está a disposición de AMP, y no de los recicladores individuales, pues requiere conocimientos complejos. Sin embargo, es posible transferir este conocimiento a los jóvenes del lugar a través de las actividades del *makerspace*. El *quadcopter* ha creado una oportunidad para involucrar a estudiantes de ingeniería ghanesas en los problemas de las personas que viven en un lugar empobrecido y contaminado como Agbogbloshie. A éstas debería de ofrecerles nuevas opciones más allá de su ocupación actual: aprender a construir y manejar un aparato volador que obtenga imágenes a partir de las cuales construir mapas, un conjunto de habilidades inusuales tanto en un vertedero como en un área industrial.

En conclusión, el *quadcopter* es una herramienta con capacidad para ayudar a cambiar la narrativa de Agbogbloshie a través de nuevos mapas del área, impulsando nuevas capacidades locales, y con base en la presencia y actividad de un *makerspace* local. ■

Agradecimientos

El autor desea agradecer al Agbogbloshie *Makerspace* Platform su trabajo por construir un mundo mejor y su colaboración en este proyecto, al Creativity Group de la Universidad de Ciencia y Tecnología Kwame Nkrumah (KNUST) su ayuda en la construcción del *quadcopter* y su dedicación por hacer la ciencia y tecnología accesibles a todas las personas, a Ivan Gayton su esfuerzo por crear un *quadcopter* de

bajo coste y ponerlo a disposición de forma abierta, y a David Simon, profesor de la Royal Holloway University of London su valiosa supervisión académica.

Referencias

- AMP (2014), «A series of informal makers' *camps* to build the future of Agbogbloshie», <http://qamp.net/>, consultado el 24 de septiembre de 2014.
- AMOYAW-OSEI, Y. et al. (2011), «Ghana e-waste country assessment», *SBC e-waste Africa Project*, 111.
- COHRE (2004) *A Precarious Future: The Informal Settlement of Agbogbloshie, Accra, Ghana*. Centre on housing rights and evictions (COHRE).
- DANNORITZER, C. (Directora) (2014), *The e-waste tragedy* [Documental]. Alemania.
- GRANT, R., y OTENG-ABABIO, M. (2012), «Mapping the Invisible and Real «African» Economy: Urban E-Waste Circuitry» *Urban Geography*, vol 33 (1), p. 1-21.
- GUARDIOLA, J.A. (Director) (2012), *Ciberbasura sin fronteras*. [Documental]. España.
- LEPAWSKY, J. (2014), «The changing geography of global trade in electronic discards: time to rethink thee-waste problem» *The Geographical Journal*.
- MOSTERMAN, P. J., et al. (2014), «A Heterogeneous Fleet of Vehicles for Automated Humanitarian Missions» *Computing in Science & Engineering*, vol 16 (3), p. 90-95.
- OTENG-ABABIO, M. (2012), «When Necessity Begets Ingenuity: E-Waste Scavenging as a Livelihood Strategy in Accra, Ghana», *African Studies Quarterly*, vol 13, p. 1-21. Center for African Studies, University of Florida.
- PUCKETT, J. (2006), «High-tech's dirty little secret: the economics and ethics of the electronic waste trade.» En SMITH, T., SONNENFELD, D. A., y PELLOW, D. N. (Eds.), *Challenging the chip: Labor rights and environmental justice in the global electronics industry*, pp. 225-233. Temple University Press.
- YU, J. et al (2010), «Forecasting global generation of obsolete personal computers» *Environmental science & technology*, vol 44 (9), pp. 3232-3237.

Geografías de la conflictividad

Consultas comunitarias y vecinales contra la minería metalífera en América Latina (2002-2012)

Mariana Walter y Leire Urkidi

Hacia una interpretación analítica de los logros para la justicia ambiental en casos de resistencia anti-minera

Beatriz Rodríguez-Labajos y Begüm Özkaynak

Contra la velocidad: movimientos locales contra mega-infraestructuras «inútiles e impuestas»

Alfred Burballa Noria y Leah Temper

Conflictos ambientales en torno a proyectos extractivos y agrarios en Madagascar

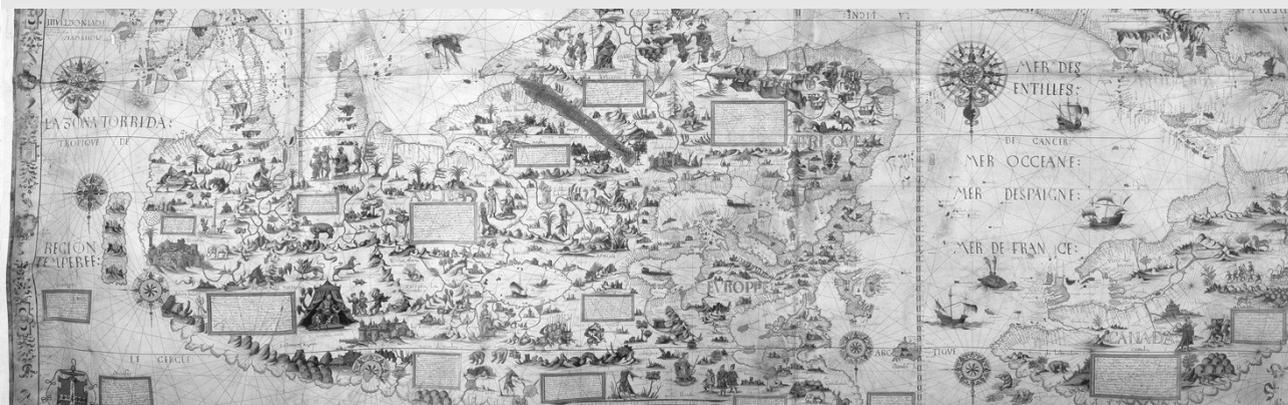
Vahinala Raharinirina

Conflictos ambientales en Colombia: actores generadores y mecanismos de resistencia comunitaria

Mario Alejandro Pérez-Rincón

Los colores de la tierra: permanencia y discontinuidades del apartheid en Namibia

Pablo Gilolmo Lobo



Consultas comunitarias y vecinales contra la minería metalífera en América Latina (2002-2012)

Mariana Walter* y Leire Urkidi**

Traducido por: Verónica Núñez Reyes

Palabras clave: consultas comunitarias, minería, América Latina, instituciones híbridas, multi-esalaridad

Introducción

Este artículo estudia las consultas comunitarias sobre proyectos mineros metálicos a gran escala en Latinoamérica. Estas consultas son diferentes al principio de consentimiento previo, libre e informado o consulta previa, fomentado por los gobiernos nacionales. Desde la consulta de junio de 2002 en Tambogrande (Perú) hasta la de noviembre de 2012 en Mataquescuintla (Guatemala), se llevaron a cabo 68 consultas en 10 años. Éstas se han realizado en Perú, Argentina, Guatemala, Colombia y Perú. En todos los casos el resultado ha sido una gran oposición a los proyectos mineros. La particularidad de estas consultas es que no están fomentadas por los gobiernos nacionales como parte de los procedimientos oficiales para consultar a las comunidades, sino que están promovidas por movimientos de justicia ambiental, generalmente con el soporte de los gobiernos locales.

Este proceso está ocurriendo en un contexto en el que existen grandes presiones para extraer minerales en Latinoamérica y, con ello, un incremento en el número de conflictos socio-medioambientales relacionados (Bebbington et al., 2008). Estudios

recientes sobre los flujos metabólicos muestran que el material extraído y exportado por las economías latinoamericanas se ha multiplicado por un factor de entre tres y cuatro en los últimos cuarenta años (West y Schandl, 2013). Esto implica que, a medida que la frontera de extracción (Moore, 2000) avanza hacia nuevos depósitos – con concentraciones minerales más bajas –, los impactos económicos, medioambientales y sociales de la extracción se multiplican (Mudd, 2007; Prior et al., 2012).

El surgimiento y propagación de las consultas mineras en Latinoamérica

Para el periodo de 2002-2012 identificamos 68 consultas sobre minería metálica en cinco países latinoamericanos: Perú (2002, 2007, 2008, 2009 y 2012), Argentina (2003, 2012), Ecuador (2011), Colombia (2009) y Guatemala (57 consultas municipales desde Sipacapa en 2005 a Mataquescuintla en 2012).

La tabla 1 muestra los casos de consultas llevadas a cabo en un contexto de conflictos mineros activos. Esta tabla no incluye los casos de las consultas organizadas en Guatemala de forma preventiva, que no se presentan en este artículo por falta de espacio. El caso de Guatemala muestra algunos rasgos distintivos característicos. Mientras el primer caso de consulta (Sipacapa) y la consulta sobre la Minera San Rafael ocurrieron en el contexto de un conflicto activo, el resto de casos fueron parte de

*Institut de Ciències i tecnologies Ambientals (ICTA), Universitat Autònoma de Barcelona; International Institute of Social Studies (ISS), Erasmus University Rotterdam (marianawalter2002@gmail.com)

** Universidad del País Vasco UPV/EHU (Parte Hartuz; EKOPOL); Especialización Doctores UPV/EHU 2014. (leire.urkidi@ehu.es)

	Caso	Duración del conflicto	Fecha de la consulta	Proyecto minero y compañía	Consulta							
					Secreto/no secreto	Usa lista oficial de votantes (S/N)	Tipo de consulta (marco legal O.M.; ordenanza municipal)	Participación (% de los posibles votantes)	% en contra de la minería	% a favor de la minería	% de blancos/nulos	
Perú	Tambogrande. Distrito de Tambogrande (Piura)	1990-2003	01-06-2002	Proyecto Tambogrande. Manhattan Minerals (Junior Canada). Oro y plata.	S	S	Consulta vecinal (O.M.)	27015 (69%)	93.85%	1.98	4.17	
	Majaz/Río Blanco. Distrito de Ayabaca y Pacaipampa (Municipalidad Ayabaca) & distrito de Carmen de la Frontera (municipalidad de Huancabamba), Piura.	2002-actualidad	16/09/07	Proyecto Majaz. Monterrico Metals (UK, junior). Vendido en 2007 a Zijin Mining (China). Cobre, molibdeno	S	S	Pacaipampa (Consulta Vecinal, O.M.)	6091 (71.47%)	17033 (94.54)	285 (1.58%)	699	
							Ayabaca (Consulta Vecinal, O.M.)	8873 (50.09%)				
	Candarave. Distritos de Candarave, San Pedro, Cuzcuz, Calacala, Yacamani, Calientes y Pallata (Tacna, Atacama)	1990s-actualidad	17/02/08	Proyecto Toquepala. Souther Copper Corp. (U.S., Mexico) cobre, molibdeno	S	S	consulta vecinal (O.M.)	3478 (67%)	3215 (92%)	n.i.	n.i.	
	Islay/Tía María. Distritos de Coachacra, Punta de Bombón, Dean Valdivia, Mejía, Islay-Mazarani y Molleendo (Arequipa, Provincia de Islay)	2008-2011	27/09/09	Proyecto Tía María. Souther Copper Corp. cobre	S	S	Coachacra* (Consulta Vecinal, O.M.)	3131 (49%)	2916 (93%)	139 (4.4%)	76 (2.4%)	
							Punta Bombón* (Consulta Vecinal, O.M.)	2004 (43%)	1883 (94%)	71 (3.5%)	50 (2.5%)	
							Dean Valdivia (Consulta Vecinal, O.M.)	2304 (53%)	2211 (96%)	52 (2.3%)	41 (1.8%)	
Molleendo (Consulta popular)							3643 (n.i.)	3573 (98%)	9 (0.3%)	61 (1.7%)		
Mejía (consulta vecinal)							272 (n.i.)	245 (90%)	26 (9.8%)	1 (0.4%)		
Kañaris. 3 distritos (San Juan Bautista de Cañaris, Huacampampa, Congona) Lambayeque	2004-actualidad	30/09/12	Proyecto Cañaris. Candente Copper (Canada, junior) cobre, oro, plata	S	S	Consulta Comunitaria (OIT-169)	1896(47.4%)	1719(95%)	106 (6%)	71 (4%)		
Argentina	Esquel (provincia de Chubut)	2001-actualidad	23/03/03	Proyecto Esquel. Meridian Gold (U.S., junior)-Vendido en 2007 a Yamana Gold (Canada, Junior) oro, plata	S	S	Consulta Popular Obligatoria (O.M.)	13845(75%)	11046(81%)	2561 (17%)	277 (2%)	
	Loncopue (Provincia de Neuquén)	2007-actualidad	02/06/12	Proyecto Lonco. Corporación Minera de Neuquén (provincial Argentina) y Metallurgical Construction Corp (China). Cobre, molibdeno.	S	S	Referendum obligatorio y vinculante (para aprobar O.M.)	2588 (72%)	2125 (82.08%)	388	75(2.9%)	
Ecuador	Proyecto Quimsacocha (Victoria del Portete y Tanqui) Azuay	2004-actualidad	02/10/11	Proyecto Quimsacocha. Iam Gold (Canada). Vendido en 2012 a INV Metals (Canada, junior) oro, plata, cobre	S	N	Consulta Comunitaria realizada por las Juntas de Agua a todos sus miembros	1037 (66.6%)	958 (92.38%)	47(4.53)	18 (1.73%)	
Colombia	Proyecto Mandé Norte. 2 Municipalidades (Carmen del Darién, Murindó) Chocó	2007-actualidad	28/02/09	Proyecto Mandé Norte. Marid Mining (U.S., Junior). Cobre, oro, molibdeno.	N	N	Consulta inter-ética. OIT-169.	1251	798	0		
Guatemala	Sipakapa (San Marcos)	2003-actualidad	08/06/2005	Proyecto Marlin, Montana Exploradora (Goldcorp-Canada, senior). Oro, plata, cielo abierto	Ambos (dependiendo de las comunidades)		S	Consulta Comunitaria (O.M.)	2564 (45%)	95.50%	1.40%	1.60%
	Minera San Rafael (Santa Rosa) y Maratucscinda (Jalapa)	2010-actualidad	29/05/2011 11/06/2011 10/07/2011 11/11/2012	Proyecto Escobal. Orais (Minera San Rafael: Tahoe Resources Canada - 40% of Goldcorp Canada). Plata, oro, otros	S	S	Maratucscinda (Consulta Comunitaria O.M.)	10,375(53%)	97%	1.6%	1.8%	

Tabla 1. Consultas en el marco de conflictos mineros activos en Latinoamérica, 2002-2012.

*En las consultas se hicieron dos preguntas. En esta tabla solo presentamos la respuestas sobre la aceptación o rechazo a las actividades mineras.

**Hay información divergente entre las fuente, sobre el papel que tomó el gobierno local en esta consulta.

una campaña regional para prevenir la expansión de las actividades mineras en el país.

Discusión

Las consultas estudiadas emergen en el contexto de luchas por la justicia ambiental y en momentos de criminalización y violencia, y reivindican el derecho a participar de las poblaciones afectadas por proyectos que ponen en riesgo sus tierras y modos de vida. Además, y como se expone a continuación, estas consultas constituyen una institución híbrida, resultado de una dinámica multi-escalar.

Una institución multi-escalar

Las consultas sobre minería están promovidas por movimientos sociales compuestos por una infinidad de grupos, incluyendo movimientos indígenas y campesinos, agricultores, liderazgos comunitarios, profesionales urbanos, parroquias locales, profesorado y ONGs, entre otros. A medida que los conflictos mineros evolucionan, estos movimientos sociales se unen a redes y organizaciones (ambientales, anti-minería, de Derechos Humanos, indígenas, católicas...) que se mueven a través de múltiples escalas geográficas (Urkidi y Walter, 2011). En estas redes se divulga información, experiencias y estrategias, se promueve la movilidad de activistas para aprender y compartir experiencias entre comunidades, se apoya

la participación en foros latinoamericanos e internacionales, y se facilita que los litigios lleguen a tribunales extranjeros (p.ej. las cortes del Reino Unido en el caso Majaz) o internacionales (p.ej. Sipacapa y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

Además, entre las redes que impulsaron la difusión de las consultas, encontramos que algunas de ellas nacieron de las primeras experiencias de consultas sobre minería: Tambogrande, Esquel y Sipacapa. Estos primeros casos fueron conflictos mineros relevantes tanto a escala nacional como transnacional, marcando un antes y un después en los procesos de consulta sobre minería en Latinoamérica y en sus propios países. La Red Muqui, nacida del conflicto en Tambogrande, fue un proveedor clave de información, experiencia y materiales para el caso de Majaz/Río Blanco y para posteriores consultas. La plataforma «Noalamina», coordinada por el movimiento anti-minería de Esquel, ha sido clave en la difusión de información y recursos entre las comunidades latinoamericanas. En Guatemala, el gran incremento de consultas mineras, está relacionado con la repercusión nacional e internacional de la experiencia de Sipacapa. Con el soporte de diferentes ONGs y asociaciones se crearon dos redes regionales entorno a conflictos sobre minería y proyectos hidroeléctricos en Guatemala (Asamblea de Recursos Naturales de Huehuetenango y Consejo de Pueblos de Occidente). Ha habido un proceso de intercambio de experiencias, en el cual las nuevas consultas fueron organizadas a partir de lo aprendido de las anteriores, a través de estas organizaciones y redes nacionales y transnacionales (Red Muqui, 2009; Janhcke Benavente y Meza 2010).

Las redes no sólo han jugado un papel clave en la difusión de la experiencia consultiva, sino que han proporcionado recursos logísticos, técnicos y a veces también financieros. Una amplia variedad de agentes transnacionales también han apoyado las consultas como observadores, contribuyendo a construir la legitimidad internacional de estos procesos. Oxfam, Friends of the Earth, Greenpeace, Mineral Policy Centre, Peace Brigades International, Nisgua, Catapa, Rigths Action y Mining Watch son algunas organizaciones observadoras internacionales que han estado presentes en las consultas mineras latinoamericanas.

Es más, a medida que las consultas se han ido multiplicando en Latinoamérica, las redes nacionales y transnacionales han tratado de sistematizar y reforzar el proceso de consultas y sus lecciones, organizando eventos internacionales (ej. Encuentro Binacional Ecuador-Perú sobre Consultas a la Comunidad, el 28 de Febrero de 2012), y elaborando informes (ej. CISDE-ALAI, 2009; Duthie, 2012; Janhcke Benavente & Meza, 2010; McGee, 2008; Merida & Krenmayr, 2008, 2010). Los movimientos nacionales y transnacionales también han desarrollado y fortalecido las estrategias legales para defender la legalidad de las consultas y condenar los abusos a los derechos humanos en tribunales nacionales e internacionales (en la Corte Constitucional en Colombia, o la presentación del caso Sipacapa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), a través del seguimiento y denuncia de la creciente criminalización (p.ej. OCMAL 2011).

Al analizar cómo han viajado las consultas entre las comunidades de Latinoamérica, nos damos cuenta de que Internet y los documentales han sido vehículos clave en la difusión de testimonios y experiencias entre personas y lugares distantes. Mientras que el papel de Internet ha sido discutido en estudios previos (Bickerstaff y Agyeman, 2009), en este análisis también hemos visto cómo los documentales han contribuido significativamente a los procesos de aprendizaje social. Los documentales sobre el derrame de mercurio de Choropampa (Cajamarca, Perú) y sobre las consultas de Tambogrande y Sipacapa se distribuyeron ampliamente en la región (*Choropampa: El precio del oro*, 2002; *Sipacapa no se vende*, 2005; *Tambogrande: mangos, muerte, minería*, 2007). Estos y otros documentales han demostrado los impactos de las actividades mineras a gran escala y las estrategias de los grupos opositores, contribuyendo al proceso de aprendizaje del movimiento de justicia ambiental regional.

Los documentales juegan un papel central haciendo que las comunidades afectadas se den cuenta de que su conflicto no es local, sino que es simultáneamente local, nacional, regional global y estructural. En ese reconocimiento, se construye una perspectiva común y se refuerzan los vínculos solidarios.

La construcción y divulgación así como las fuentes de legitimidad de esta institución de partici-

pación (es decir, las consultas comunitarias) están inmersas en una compleja y dinámica interacción de actores sociales, discursos, redes y estrategias que se mueven a diferentes escalas. El poder político de las consultas está, en parte, basado en la habilidad de los movimientos supra-locales para moverse y difundir estos eventos a múltiples escalas, creando nuevos apoyos y reacciones. Las consultas, ya sean vecinales, populares, comunitarias o inter-étnicas, apelan a normas y derechos municipales, nacionales e internacionales y son reclamadas por movimientos de justicia ambiental. En este sentido, las consultas latinoamericanas sobre minería son una institución multi-escalar, ya que están constituidas por (y son constituyentes de) actores sociales, estrategias, regulaciones y discursos pertenecientes a múltiples y cambiantes escalas. Mientras que las consultas pueden ser enmarcadas como una institución de participación que ejemplifica el proceso de gobernanza desde abajo (Paterson et al., 2003), la fuerza y legitimidad de esta institución es multi-escalar.

Las consultas como instituciones híbridas

El proceso de consultas comunitarias sobre minería se basa en una combinación de instituciones formales e informales, modernas y tradicionales adaptadas, en cualquier caso, al contexto local. Mientras los movimientos sociales han jugado un papel clave en la aparición y difusión de las consultas, un rasgo particular ha sido el papel jugado por los gobiernos locales. Las consultas comunitarias combinan capacidades (gestión, comunicación, regulación) y diferentes clases de poder (legitimidad, redes, recursos, confianza) de los movimientos sociales (instituciones informales) y de los gobiernos locales (instituciones formales).

Los casos de consultas llevadas a cabo sin alianzas con los gobiernos locales son la excepción. En algunos casos, los gobiernos locales se unen rápidamente a los movimientos sociales o incluso juegan un papel central en la formación de movimientos críticos con las actividades mineras (p.ej. Majaz, Toquepala, la ola de consultas de Guatemala). En otros casos, los gobiernos locales cambian su posición a medida que aparecen los conflictos y finalmente permiten o apoyan las consultas para

preservar la gobernabilidad o el poder local (p.ej. Esquel, Sipacapa), a veces adoptando una posición que difiere de la de su partido a nivel nacional.

La alianza con gobiernos locales fue clave para construir la legitimidad en las consultas (Red Muqui, 2009), enmarcándolas como una institución formal (y democrática) de participación local, no solo como una mera estrategia de los movimientos anti-minería (Muradian et al., 2003). El hecho de que las primeras consultas fueran llevadas a cabo a través de ordenanzas locales contribuyó a construir las bases para legitimar la consiguiente ola de consultas, fueran éstas realizadas con o sin el soporte formal (p.ej. algunos distritos en la consulta de Tía María en Perú o en el caso de Kimsakocha en Ecuador). Por otro lado, la implicación de los movimientos sociales redujo, en algunos lugares, la desconfianza que muchas comunidades rurales tienen en relación a los organismos gubernamentales, incluyendo los municipales. En las consultas guatemaltecas el hecho de que actores sociales, que no estaban directamente relacionados con el gobierno municipal, estuvieran promoviendo las consultas fue interpretado como una fuente de confianza y fomentó la participación (Mérida y Krenmayer, 2008, 2010; entrevistas Guatemala, 2009). Podríamos decir que la legitimidad de las consultas es, en parte, causa y consecuencia de las alianzas híbridas formadas entre los gobiernos locales y los movimientos sociales.

En cada contexto, esta institución híbrida es legitimada haciendo referencia a las tradiciones propias y/o a la percepción colectiva de la forma socialmente aceptable de hacer las cosas (Cleaver, 2013). Una fuente relevante de legitimidad (interna y externa) procede de los procedimientos usados para consultar a la población, apelando a los valores democráticos y a los derechos de consulta indígenas. En muchos casos, las comunidades crearon procedimientos híbridos que combinan los modos oficiales de participación democrática (p. ej.: los procedimientos de elecciones oficiales), con los derechos consuetudinarios indígenas y con las experiencias de previas consultas.

En muchos casos (en la mayoría de Perú, en Argentina, algunas en Guatemala), como por

ejemplo Tambogrande, la consulta siguió los mismos procedimientos de unas elecciones oficiales: llamada formal al voto, registro de votantes, voto secreto, etc. y la calidad del proceso fue certificada por observadores externos. En algunas consultas en zona indígena se votó de manera secreta y en otras a mano alzada, como en muchas reuniones comunitarias. En 32 de las 57 consultas realizadas en Guatemala (todas en zona indígena), y en la de Colombia, las personas de la comunidad no registradas oficialmente también podían votar (Jahncke and Meza, 2010; Mérida y Krenmayr, 2010). Esto condujo a una mayor participación de las mujeres que en cualquier otra votación, dado que las mujeres están proporcionalmente menos registradas (es decir, no tienen carnet de identidad) que los hombres en Guatemala (Mérida y Krenmayr, 2010).

En contraste con las formas de gobernanza que continúan excluyendo a los grupos vulnerables (Ford, 2003; Cleaver et al., 2013; Swyngedouw, 2005), estas consultas son organizadas por – y tienen en cuenta a – grupos marginados como los pueblos indígenas, las mujeres y el campesinado. En este sentido, las consultas expanden el alcance propio de las instituciones formales e informales para fomentar la participación local.

Las consultas son algo más que la suma de regulaciones y derechos existentes y, aunque basadas en ellas, recuperan su alcance y significado, basándose en lo que se considera legítimo y justo para las comunidades locales. Por ejemplo: las comunidades, a través de sus prácticas y discursos, están expandiendo y re-significando la forma en que el Convenio 169 de la OIT – y la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los grupos indígenas – enmarcan la «consulta previa», forzando así nuevos debates sobre el alcance de dichos convenios (McGee, 2008; Fulmer, 2011).

Conclusiones

Una de las cuestiones clave de las consultas comunitarias sobre minería es que constituyen una institución de participación social, más allá de ser una estrategia de lucha y reivindicación. Las consultas han logrado disminuir la frustración local y la violencia, al menos por un tiem-

po (después los episodios de criminalización han cambiado la situación) y han conseguido cancelar algunos proyectos de manera provisional (Tambogrande, Esquel). La ola de consultas preventivas de Guatemala ha contribuido a que la mayoría de permisos de exploración no trascendieran a explotación.

Sin embargo, la legitimidad de las consultas está en disputa por parte de diferentes actores dentro de Estados y gobiernos. Mientras los gobiernos nacionales y los Ministerios de Minería, al igual que las compañías, rechazan, ignoran o criminalizan (definiéndolas como ilegales) estos eventos participativos, algunos gobiernos locales y provinciales, así como otros ministerios nacionales y regionales, autoridades o tribunales (p. ej.: Ombudsman, oficinas electorales nacionales, Tribunal Constitucional, consejos nacionales de derechos humanos, Ministerio de Medioambiente), reconocen esta institución de participación.

Esto refleja la heterogeneidad de intereses y valores que atraviesa las estructuras del Estado y señala la necesidad de problematizar el papel de los gobiernos y el Estado en los marcos de gobernanza ambiental. Las instituciones híbridas lideradas por la sociedad civil, tales como las consultas comunitarias, no pretenden necesariamente obviar o evitar a los gobiernos («*bypass governments*» según Delmas y Young, 2009), si no, por el contrario, anclar parte de su legitimidad en alguno de los organismos gubernamentales (gobiernos locales en este caso).

Actualmente, el conflicto gira en torno a la formalización de los derechos de consulta y a la regulación de los procedimientos por parte de los gobiernos centrales, con el riesgo de cooptación, exclusión y desnaturalización de la consulta que eso comporta. Los movimientos sociales y las comunidades defienden que el marco legal actual es suficiente para aceptar las consultas y sus resultados y que más normas sólo llevarían a unas condiciones más restrictivas para la participación (Nisgua, 2011). Mientras tanto el proceso de consulta comunitaria sigue expandiéndose en Latinoamérica y llega a conflictos por proyectos hidroeléctricos o por la extracción de otros recursos naturales; procesos que sin duda merecen ser seguidos muy de cerca. ■

Referencias

- BEBBINGTON, A., ABRAMOVAY, R. y CHIRIBOGA, M. (2008), Social Movements and the Dynamics of Rural Territorial Development in Latin America. *World Development*, 36(12), p. 2874-2887.
- BICKERSTAFF, K. y AGYEMAN, J. (2009), Assembling Justice Spaces: The Scalar Politics of Environmental Justice in North-east England. *Antipode*, 41(4), p. 781-806.
- CISDE-ALAI (2009), *América Latina: riqueza privada, pobreza pública*, CIDSE-ALAI.
- CLEAVER, F. et al. (2013), *Beyond negotiation? - Real governance, hybrid institutions and pastoralism in the Usangu Plains, Tanzania*, London.
- DELMAS, M.A. y YOUNG, O.R. (2009), *Governance for the Environment*, New York: Cambridge University Press.
- DUTHIE, K. (2012), *Local Votes and Mining in the Americas*. Mining Watch Canada.
- FORD, L.H., (2003), Challenging Global Environmental Governance: Social Movement Agency and Global Civil Society. *Global Environmental Politics*, 3(2), p. 120-134.
- FULMER, A. (2011), La consulta a los pueblos indígenas y su evolución como herramienta de negociación política en América Latina. *Apuntes*, 68, p. 37-62.
- JANHCKE BENAVENTE, J. y MEZA, R. (2010), *Derecho a la participación y a la consulta previa en Latinoamérica*, Lima.
- MCGEE, B. (2008), *An International Observer's Account of a Local Vote in Río Blanco Peru*. Environmental Defender Law Center.
- MERIDA, A.C. y KRENMAYR, W. (2008), *Sistematización de experiencias: asamblea departamental por la defensa de los recursos naturales renovables y no renovables de Huehuetenango, 2006-2007*. Huehuetenango, Progobih.
- MERIDA, A.C. y KRENMAYR, W. (2010), *Sistematización de experiencias 2008-2009: Tejiendo entre los pueblos la defensa del Territorio*. Huehuetenango, Progobih.
- MOORE, J.W. (2000), Sugar and the Expansion of the Early Modern World-Economy: Commodity Frontiers, Ecological Transformation, and Industrialization. *Review (Fernand Braudel Center)*, 23(3), p. 409-433.
- MUDD, G.M. (2007), Global trends in gold mining: Towards quantifying environmental and resource sustainability. *Resources Policy*, 32(1-2), p. 42-56.
- MURADIAN, R., Martinez-Alier, J. & Correa, H. (2003), International Capital Versus Local Population: The Environmental Conflict of the Tambogrande Mining Project, Peru. *Society & Natural Resources*, 16(9), p. 775-792.
- NISGUA (2011), Comunidades rechazan iniciativa por normar las consultas comunitarias. Available at: <http://nisgua.blogspot.com.es/2011/03/comunidades-rechazan-iniciativa-por.html>.
- OCMAL (2011), *Cuando tiemblan los derechos: extractivismo y criminalización en América Latina*, Quito.
- PRIOR, T. et al. (2012), Resource depletion, peak minerals and the implications for sustainable resource management. *Global Environmental Change*, 22(3), p. 577-587.
- RED MUQUI, (2009), La consulta vecinal: un mecanismo de democracia directa para los pueblos. In *América Latina: riqueza privada, pobreza pública*. Lima: CIDSE-ALAI, p. 143-150.
- SWYNGEDOUW, E. (2005), Governance innovation and the citizen: The Janus face of governance-beyond-the-state. *Urban Studies*, 42(11), p. 1991-2006.
- URKIDI, L. y WALTER, M. (2011), Dimensions of environmental justice in anti-gold mining movements in Latin America. *Geoforum*, 42(6), p. 683-695.
- WEST, J. y SCHANDL, H., (2013), Material use and material efficiency in Latin America and the Caribbean. *Ecological Economics*, 94, p. 19-27.

Hacia una interpretación analítica de los logros para la justicia ambiental en casos de resistencia anti-minera

Beatriz Rodríguez-Labajos* y Begüm Özkaynak**

Palabras clave: conflictos mineros, justicia ambiental, bases de datos georreferenciadas, estadística descriptiva

Introducción

Las bases de datos de conflictos mineros son una fuente de aprendizaje sobre cómo emplear de manera efectiva el mapeo en apoyo a resistencias de justicia ambiental. Así, desde 2007, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL)¹ reúne a organizaciones que colaboran en establecer estrategias de resistencia y alternativas a la minería en América Latina. Un grupo de investigación en la Universidad de McGill, en Montreal ha catalogado conflictos socio-ambientales vinculados a compañías mineras canadienses (MICLA)². El sitio web del movimiento 'No a la mina'³, surgido en la resistencia al proyecto minero de Esquel, en Argentina, se ha consolidado como un recurso de referencia sobre la oposición a la minería de gran escala a cielo abierto.

A partir de este tipo de información, es posible observar que lo largo de un conflicto acontecen diversas circunstancias frente a las cuales los activistas se posicionan de diferente manera. Por ejemplo, son conocidos proyectos que se han llegado a para-

lizar: de minería de uranio en Gabón, de oro en el cerro Wirikuta (México) o de carbón en el Páramo del Almorzadero (Colombia). Sin embargo, si preguntamos a los activistas en cada caso si consideran la situación como un éxito de la justicia ambiental, la respuesta puede llegar a ser muy diferente.

Frente a la dificultad de definir el concepto de manera objetiva, y observando la práctica de las organizaciones de justicia ambiental, es posible preguntarse: ¿qué circunstancias se reconocen como éxitos o como fracasos de la justicia ambiental?; ¿es suficiente o necesario que el proyecto se paralice?; ¿hasta qué punto cuentan los impactos sufridos?; ¿cómo se integran las expectativas respecto a la actuación de los poderes del Estado?; ¿cómo interpretar las dinámicas que se desarrollan al interior de las comunidades a raíz del conflicto?

La minería resulta un ámbito de particular interés a nivel global para indagar y entender este tipo de factores definitorios de los logros de la justicia ambiental. Por un lado, como se ha visto, existe una amplia base de información disponible. Por otro, los conflictos mineros revelan injusticias ambientales en una perspectiva metabólica global. Pueden existir conflictos a lo largo de todas las etapas de la vida útil de los minerales como mercancías (o *commodity chain*, en la literatura anglosajona). Los conflictos mineros articulan luchas locales frente a la desposesión, con los elementos que sustentan un metabolismo social creciente a escala global, para el cual el uso de recursos minerales (no renovables) es fundamental (Bridge, 2008; Özkaynak et al., 2012).

En este artículo abordamos el potencial analítico del mapeo de conflictos – con referencia a

* Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona

(labajos_bea@yahoo.com; beatriz.rodriguez@uab.cat)

** Department of Economics, Boğaziçi University

(begum.ozkaynak@boun.edu.tr)

1 www.conflictosmineros.net

2 <http://micla.ca/conflicts>

3 www.noalamina.org

los conflictos mineros – para beneficio de las organizaciones de justicia ambiental. Partimos de la experiencia del proyecto EJOLT y el Atlas de justicia ambiental (<http://ejatlas.org>), para ilustrar cómo el concepto de justicia ambiental puede ser reformulado a partir del análisis estadístico de los argumentos aportados por los activistas a la hora de calificar sus propios logros. Con este objeto, y en base a la perspectiva metabólica ya mencionada, establecemos una delimitación operativa de conflicto minero como aquel que *está relacionado con la extracción de minerales, su procesamiento y transporte, así como la gestión de desechos en proyectos mineros concretos*, lo que circunscribe los conflictos, fundamentalmente, a las escalas local y regional.

En particular, el artículo se centra en el problema analítico de incorporar en la teoría de justicia ambiental el conocimiento activista sobre los determinantes del éxito en casos de conflictos de la justicia ambiental. Esto es, se trata de entender por qué un resultado concreto, en el contexto de un conflicto (anti-minero), es visto por los movimientos de resistencia como un logro o como un fracaso de la justicia ambiental. Éste es un punto delicado que combina la percepción de los activistas y las comunidades que éstos apoyan, con hechos concretos que se pueden argüir para explicar el éxito o fracaso de la protesta. El punto de partida va a ser, por lo tanto, esencialmente cualitativo y con un gran componente de subjetividad.

En este artículo explicamos cómo transformar datos cualitativos en datos que faciliten el análisis cuantitativo, incluyendo el uso de métodos de estadística descriptiva, y utilizamos los resultados para ofrecer una contribución a la definición de justicia ambiental. En las siguientes secciones se detalla la metodología y materiales de trabajo, se presentan resultados y, finalmente, se discuten los mismos a la luz de su contribución a las definiciones existentes de justicia ambiental.

Métodos y materiales

El Atlas EJOLT de Justicia Ambiental, que recopila información sistemática de conflictos ecológico-distributivos, en un esfuerzo conjunto entre academia, grupos de la sociedad civil y personas

interesadas en apoyar esfuerzos de resistencia ante la injusticia ambiental (véase Temper et al., 2014). Entre los numerosos campos de información que conforman cada entrada en esta base de datos que se incluye la pregunta «¿Considera que el caso representa un logro para la justicia ambiental?», para lo que se ofrecen tres posibles respuestas: ‘Sí’, ‘No estoy seguro/a’ y ‘No’. A continuación, se solicita una justificación de la respuesta.

Como se verá, el conjunto de razones aportadas en la explicación es enormemente variado. Al margen de aquellos pocos casos en los que se aduce falta de información o no se contesta, las respuestas se pueden clasificar en razones ‘favorables’ a la justicia ambiental (como la paralización del proyecto, la obtención de compensaciones o el fortalecimiento del tejido social) y razones ‘desfavorables’ a la justicia ambiental (como que el proyecto esté operando, la falta de cumplimiento del marco legal o la amenaza latente de la reactivación del proyecto).

Es común que se dé una combinación de razones positivas y negativas a la hora de calificar tanto los logros como los fracasos. En los casos en los que la respuesta es ‘no estoy segura’, la miscelánea de razones es aún más acentuada y compleja. En consecuencia, un análisis estadístico que realice un conteo simple de ‘Sí’, ‘No’ o ‘No estoy segura’ puede pecar de simplista. Por otro lado, una posible recodificación de casos puede llegar a vulnerar los datos aportados por los activistas y no es replicable.

Propuesta metodológica

Ante esta disyuntiva proponemos una metodología simple pero de gran efectividad analítica, que permite convertir cualquier posible respuesta a una escala de 0 a 5 en un gradiente ordinal de «logros de la justicia ambiental». Dicha metodología consiste en las siguientes etapas:

1. Codificar cada una de las razones aportadas en la explicación de cada uno de los casos.
2. Clasificar dichas razones en ‘favorables’ o ‘desfavorables’ para la justicia ambiental. De acuerdo a nuestra experiencia, este paso no implica arbitrariedad, puesto que las justificaciones aportadas dejan claro cuándo hay una consideración positiva o negativa de una determinada situación.

Razones aportadas		¿El caso es un éxito de la justicia ambiental?		
		Sí	No estoy seguro/a	No
Razones favorables	Razón favorable más frecuente (p. ej. paralización del proyecto)	5	3	1
	Otras razones favorables			
Razones desfavorables	Otras razones desfavorables		2	
	Razón desfavorable más frecuente (p. ej. continúa del proyecto)	4		0

Figura 1. Niveles de éxito para la justicia ambiental en la resistencia anti-minera (Fuente: Elaboración propia) □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

3. Estimar la frecuencia de cada razón aportada e identificar la razón (o razones) más frecuente(s) en la respuestas 'sí' y 'no' a la pregunta: «¿Este caso es un éxito de la justicia ambiental?». A partir de esta etapa, es posible tabular el conjunto de los casos de acuerdo a la clave mostrada en la Figura 1.

4. Utilizando la clave mostrada en la Figura 1, clasificar cada caso en diferentes niveles de éxito para la justicia ambiental de la resistencia anti-minera. Éstos se deben entender como grupos analíticos expresados en una escala ordinal en la que las distancias entre los valores no tienen por qué tener una correspondencia en la distancia entre las categorías. Específicamente, los criterios de clasificación son los siguientes:

(0) El caso es considerado como un fracaso para la justicia ambiental (respuesta 'no') y para explicarlo se aducen razones exclusivamente desfavorables.

(1) Al tiempo que el caso es considerado como un fracaso para la justicia ambiental (respuesta 'no'), la explicación incluye algún factor favorable que puede matizar dicho fracaso.

(2) La razón más frecuente en los casos de *fracaso* aparece en este caso, pero al mismo tiempo se aducen razones positivas, por lo que no se está seguro del nivel de éxito.

(3) La razón más frecuente en los casos de *éxito* aparece en este caso, pero al mismo tiempo se aducen razones negativas, por lo que no se está seguro del

nivel de éxito.

(4) Al tiempo que el caso es considerado como un logro para la justicia ambiental (respuesta 'sí'), se dan factores desfavorables que matizan este resultado.

(5) El caso es considerado como un logro para la justicia ambiental (respuesta 'sí') y para explicarlo se aducen razones exclusivamente favorables.

Datos

Se clasificaron 354 casos de conflictos registrados en el Atlas EJOLT de Justicia Ambiental, desde su lanzamiento hasta octubre de 2014, que se ajustaban a la delimitación mencionada de conflicto minero (Figura 2). Si bien no se trata de un registro exhaustivo de casos, su representatividad es aceptable, especialmente para las regiones de América Latina y el Caribe, África y Europa. La concentración de conflictos en América Latina es consistente con la ola de movilizaciones como respuesta al aumento de las inversiones del sector minero en la última década (Walter, 2014).

Resultados

¿Cuál es el nivel de éxito percibido en las luchas por la justicia ambiental en materia de minería?

La situación más generalizada en los casos de

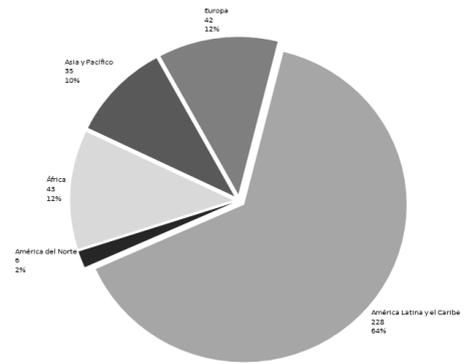


Figura 2. Casos de conflicto minero, por región (Fuente: Elaboración propia con base en datos de EJOLT)

conflicto minero es la de una respuesta negativa a la pregunta de si el caso constituye un éxito de la justicia ambiental, lo que supone casi la mitad de los casos registrados. En un 35% de los casos no existe elemento favorable en el caso que matice esta percepción. Cuando no se está seguro acerca del nivel de éxito, lo más común es que el proyecto minero esté operativo. Así es en el 28% de todos los casos, frente al 5% en los que el proyecto se ha paralizado pero no hay una convicción de logro alcanzado. Finalmente, en torno al 21% de los casos de conflicto minero se consideran éxitos para la justicia ambiental, aunque únicamente en un 13% del total de los conflictos esto obedece a consideraciones exclusivamente favorables (Fig. 3).

La percepción más frecuente en todas las regiones del mundo (excepto en América del Norte y en la región Asia-Pacífico) es la de que los conflictos

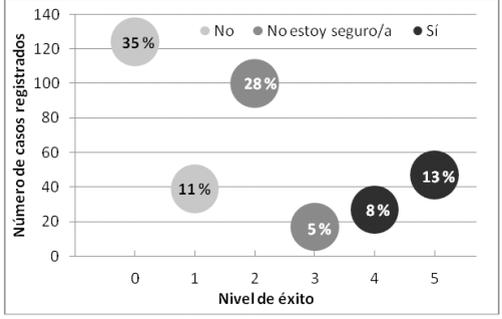


Figura 3. Nivel de éxito en conflictos anti-mineros (Fuente: Cálculos propios)

mineros se resuelven en fracasos, sin paliativos, de la justicia ambiental, siendo África la región en que, con diferencia, esta situación es más acentuada. En el caso de América del Norte, los fracasos suelen venir acompañados de ciertas condiciones favorables, y por esa razón se registran ya en la categoría siguiente (nivel 1) o, incluso, de manera muy frecuente, el peso de que estas condiciones favorables hace que se llegue a dudar de si realmente se trata de un fracaso o de un éxito (nivel 2) (Figura 4).

Observando los casos de éxito claro de la justicia ambiental, las regiones más favorecidas en términos relativos son, por este orden, Asia-Pacífico, Norteamérica y América Latina y el Caribe, siempre en porcentajes mucho más modestos que en caso de los fracasos. En Europa, el grueso de los logros vienen acompañados de factores desfavorables que

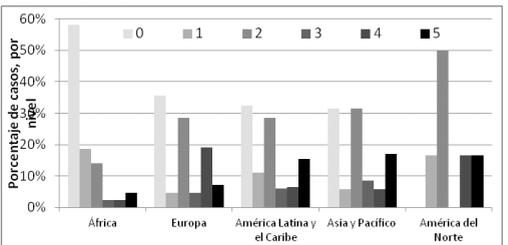
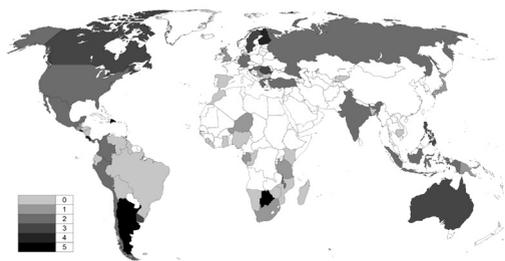


Figura 4. Porcentaje de casos en cada nivel de éxito, por grandes regiones mundiales (Fuente: Cálculos propios)

hacen que los éxitos se registren en un nivel inferior (nivel 4), siendo así la región en la que esta situación de logros matizados es relativamente más común.



La Figura 5 muestra un mapa de intensidad que permite visualizar el nivel de justicia ambiental más frecuente (moda estadística), por país.

Figura 5. Mapa de intensidad en la percepción del nivel de éxito en resistencias anti-mineras (Fuente: Elaboración propia)

Nota: Se representa la moda del nivel de éxito (en promedio para los casos multimodales)

FACTORES	¿ES UN CASO DE ÉXITO PARA LA JUSTICIA AMBIENTAL?					
	NO		NO ESTÁ SEGURO/A		SÍ	
	% total	% No	% total	% no seguro	% total	% Sí
	(n=354)	(n _N = 163)	(n=354)	(n _{NS} =117)	(n=354)	(n _S =74)
Desfavorables						
Proyecto en operación o construcción	29	64	15	44	0,8	4
Presencia de impactos	16	35	8	23	1	7
Respuesta gubernamental inadecuada	13	29	5	15		
Planificación en curso	6	14	4	12		
Compensación insuficiente, impagada o ninguna	6	13	3	9	0,8	4
Falta de cumplimiento de la ley	5	12	4	12	0,6	3
Latencia de nuevas amenazas	5	12	4	12	3	15
Criminalización y represión	5	11	2	7	0,8	4
Falta de acciones para la mitigación de impactos	4	9	0,8	3		
Sin resultados concretos o sin decisión definitiva	4	8	8	25	0,8	4
Debilitamiento del tejido social	4	8	1	4		
Sin representación / participación o demandas no atendidas	4	8	0,8	3	0,3	1
Impactos incompensables	3	7	2	5	0,3	1
Resultado debido a factores diferentes del activismo	2	4	1	4	0,3	1
Esfuerzos de expansión del proyecto	1	3	1	4	0,3	1
No cancelación del proyecto	1	2	1	4		
Cierre sólo parcial	0,6	1	0,8	3	0,3	1
Otros (desfavorables)	0,3	0,6	1	3		
N.C. / Falta de información suficiente	2	4	2	5	1	4
Favorables						
Compensación satisfactoria			0,3	0,9	0,6	3
Mejora de procesos	2	4	3	9	0,8	4
Propuesta de áreas protegidas			0,3	0,9	1	5
Juicios ganados	1	1	0,8	3	1	7
Apoyo gubernamental	0,3	1	0,6	2	2	11
Desarrollo legislativo	0,3	1	0,3		4	19
Consolidación de redes / Activismo	6	12	11	32	11	51
Proyecto suspendido o paralizado	2	5	4	13	19	91
Otros (favorables)	0,3	1	0,3	0,9		

Tabla 1. Razones argüidas para la justificación del fracaso o del éxito de la resistencia anti-minera (porcentaje respecto al total de conflictos (n=354) y respecto al subtotal de casos por cada tipo de respuesta (-n_N, n_{NS}, n_S-) (Fuente: Cálculos propios)

¿Qué factores configuran la percepción de éxito para la justicia ambiental en la resistencia anti-minera?

A menudo, la combinación de elementos favorables y desfavorables en cada conflicto dificulta poder hablar de verdaderos éxitos de la justicia ambiental. En este sentido, el uso del término 'logros' de la justicia ambiental, como lo emplea Pérez Rincón (2014), podría ser más apropiado. La Tabla 1 ordena los elementos identificados en las respuestas desde los más desfavorables a los más favorables para la consecución de la justicia ambiental.

El principal factor para el éxito de la justicia ambiental es el hecho de que el proyecto esté operando o no. El 64% de los conflictos mineros que se consideran fracasos para la justicia ambiental están en operación o construcción, y el 91% de los casos que se consideran éxitos son proyectos suspendidos o paralizados.

Con todo, el proyecto en sí mismo no es la única razón que menoscaba la justicia ambiental. Factores como la presencia de impactos se dan en un 35% de los casos de fracaso, y una respuesta gubernamental inadecuada explica el 29% de las injusticias percibidas. Por otra parte, incluso ante situaciones en las que el proyecto está en operación, pueden identificarse logros para la justicia ambiental; esta situación no es frecuente (0,8% de todos los casos registrados), pero representa un perceptible 4% de todos los casos de éxito. En este caso, la consolidación de redes de activismo (51% de los éxitos), desarrollos legislativos favorables (19% de los éxitos) o la percepción de apoyo gubernamental (11% de los éxitos) se encuentran entre los logros para la justicia ambiental.

Los niveles 0 y 1, los más bajos en cuanto a logros de la justicia ambiental, normalmente van de la mano de diferentes formas de continuación, reactivación o expansión de proyectos mineros. No obstante, son diversas las razones que acompañan a esta situación. Las más frecuentes tienen que ver con la constatación de impactos observados, especialmente los relacionados con la contaminación y el impacto en el recurso hídrico, así como con las inadecuadas compensaciones posteriores.

La falta de respuesta gubernamental aparece como el tercer factor más frecuente de fracaso. Está relacionada, por una parte, con la falta de la debida atención a quejas de las comunidades y, por la otra, con la percepción del apoyo dado a las compañías, que en un número no desdeñable de casos (19 casos de fracaso) se traduce en presiones a los activistas a través de estrategias de criminalización y represión. El incumplimiento de acuerdos entre las comunidades y las compañías, o de acato a disposiciones legales, también son frecuentes en la falta de respuesta institucional satisfactoria a las demandas de los activistas.

Un aspecto importante en la percepción de falta de éxito se liga a que la amenaza continúe tras la consecución de un determinado logro. Ello puede obedecer a que los impactos del proyecto se mantienen a pesar de su posible paralización. La latencia de la amenaza se debe también al temor de que el proyecto se reactive al cabo de un tiempo. Esta es una preocupación particularmente marcada en los conflictos mineros.

Los niveles 2 y 3 aparecen a menudo cuando el proyecto se encuentra todavía en la fase de planificación, y es pronto para poder juzgar la situación, o cuando existe la posibilidad de que un proyecto paralizado pueda ser reactivado. Aparecen, igualmente, en aquellos casos en los que el proyecto se paraliza, pero sus impactos perduran. Otra razón es que el proyecto se paralice por motivos no directamente vinculados a las acciones de resistencia, sino a contingencias, como un desastre natural o por el quiebre de la empresa.

Los niveles 4 y 5 van frecuentemente asociados a la paralización del proyecto. Sin embargo, pueden reconocerse logros para la justicia ambiental pese a que el proyecto continúe, cuando se obtienen compensaciones adecuadas o se controlan situaciones previamente desfavorables. Esto sucede, por ejemplo, cuando mejoran los estándares de salud, seguridad o ambientales de los proyectos, o cuando se garantizan derechos fundamentales previamente vulnerados.

Potencialmente, puede darse la circunstancia de que una misma combinación de razones favorables y desfavorables sea calificada de manera

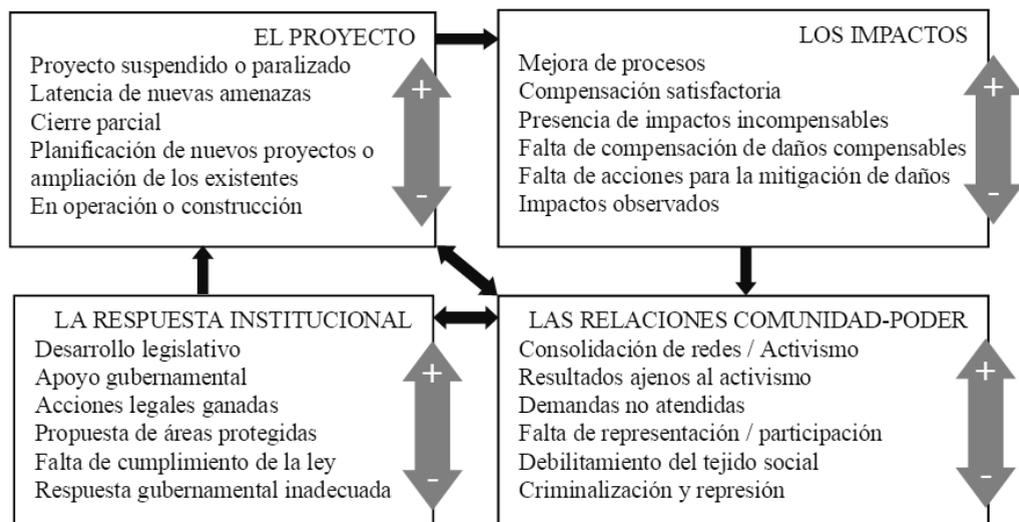


Figura 6. Las claves de la justicia ambiental en conflictos mineros

diferente en términos de justicia ambiental. Hay muchos factores que influyen en la subjetividad de los actores (por ejemplo, la fase en la que se encuentre el conflicto). El presente análisis respeta estas subjetividades, al tiempo que ofrece una explicación de la justicia ambiental basada en la frecuencia de determinados factores en unos casos o en los otros.

¿Qué aportan estos resultados a las definiciones más utilizadas de justicia ambiental?

A partir de los trabajos de Schlosberg (2013, 2007), queda de manifiesto la importancia de los aspectos de participación y reconocimiento en las situaciones de injusticia ambiental. En este sentido, la definición de justicia ambiental va más allá de los importantes contribuciones de Bullard (2001, 1994), Agyeman et al. (2003) o Mohai y Saha (2007), que enfatizan las cargas ambientales desproporcionadas sobre comunidades desfavorecidas, generalmente por razones de raza o nivel de ingresos.

Con base en los resultados expuestos, se confirma que, en los conflictos de minería, los aspectos distributivos (asociados con la operación del proyecto, la percepción de sus impactos o la obtención de compensaciones apropiadas) son indudablemente determinantes en la percep-

ción de logros o fracasos de la justicia ambiental. Con todo, los componentes de participación o reconocimiento juegan un papel crucial. Por una parte, estos factores, asociados a demandas no atendidas de la comunidad, aparecen en un visible 8% de los casos de fracaso. Por otro lado, se identifican (marginalmente) como una razón por la cual la paralización de determinados proyectos no llega a considerarse un éxito. Igualmente, en un notable 51% de los casos los logros de la justicia ambiental se asimilan a la mayor visibilidad y posicionamiento frente al poder ligado a la consolidación de redes o auge del activismo.

Con objeto de proporcionar elementos para el desarrollo conceptual de la justicia ambiental, los factores presentados se han analizado en virtud de su frecuencia en los diferentes niveles de éxito (Figura 6).

La clave central para un logro de justicia ambiental es, sin lugar a dudas, la desaparición del *proyecto* percibido como el origen de la injusticia. Originado desde el proyecto, existe el interés de que no genere *impactos*. En relación a la reacción de la comunidad, tanto al proyecto como a sus eventuales impactos, la aspiración es mantener un nivel de cohesión social de los actores movilizados que garantice un *diálogo equilibrado con el poder*, ya sea éste económico (por ejemplo, la

corporación minera) o político (vinculado a los poderes del Estado). De estas relaciones entre la comunidad movilizadora y el poder surgen expectativas de *respuesta institucional* (entendida como la de los poderes del Estado).

En cada una de estas claves, la situación va a caracterizarse en un gradiente que va desde las circunstancias más cercanas a un contexto de justicia ambiental, a las más alejadas. Ello explica que ninguno de los factores por sí solo sea capaz de determinar una situación de justicia, sino que la percepción de éxito surge del balance de los diferentes ámbitos.

Conclusiones

Este artículo contribuye de diferentes maneras a los estudios sobre justicia ambiental. Desde la perspectiva de la definición del concepto, se ha señalado la relevancia de cuatro aspectos clave en la identificación de factores de éxito o de fracaso. Tienen que ver con las características del proyecto, sus impactos, las relaciones entre la comunidad y el poder, y la respuesta institucional a las demandas sociales. También se incide en la relevancia de la dinámica de los procesos, particularmente ante el temor a la reactivación de los proyectos, así como en la permanente amenaza de nuevas presiones. Esta característica puede ser más marcada en los conflictos mineros, en los que la disponibilidad de recursos está muy determinada por aspectos geográficos.

Desde una perspectiva metodológica, se ha avanzado en el uso de herramientas estadísticas para la determinación de principios generales que ayuden a abordar el estudio del movimiento global de justicia ambiental, en el que, hasta ahora, han prevalecido los estudios de caso. El hecho de contar con una categorización de los éxitos en una escala ordinal facilita el uso de herramientas estadísticas más sofisticadas que las que se pueden utilizar cuando se codifica la justicia ambiental en términos de 'ausencia' o 'presencia'. Los resultados obtenidos confirman la congruencia del enfoque adoptado y su pertinencia en problemas analíticos donde el concepto tenga y/o involucre posiciones normativas.

Este es el caso de la interpretación de justicia ambiental en conflictos asociados a otras temáticas, como el uso de la tierra o el agua o, incluso, la interpretación de otros conceptos difusos como la calidad de vida.

El presente análisis apunta asimismo a conjeturas que pueden ser útiles para futuras investigaciones. Por ejemplo, el análisis de los niveles de éxito alcanzado en casos de resistencia anti-minera parece sugerir diferencias entre grupos de países. Esto lleva a considerar la hipótesis de que el nivel de éxito esté asociado a alguna característica de dichos grupos, como su nivel de ingresos. Al mismo tiempo, las características diferenciales de las mercancías minerales (metales básicos, preciosos, energéticos, etc.) pueden tener importantes repercusiones en términos de los logros de la justicia ambiental, particularmente en lo que se refiere a la persistencia del interés en explotar depósitos que pueden ser claves para el mantenimiento futuro del metabolismo global.

Agradecimientos

Este artículo es parte de los trabajos de preparación del informe «*Towards successful resistance: An systematic assessment of contemporary mining conflicts*», en el marco del proyecto *Environmental Justice Organisations, Liabilities and Trade* (EJOLT), financiado por la Comisión Europea (G.A. 266642). Agradecemos a los coautores del informe, en particular a Patricio Chávez y a Claudio Garibay, por substanciales contribuciones a la base de datos. Agradecemos igualmente a un/a revisor/a anónimo/a sus valiosos comentarios al manuscrito. Igualmente, se agradece a Cem İskender Aydın and Kaner Atakan Türker por su asistencia en el procesamiento de los datos. ▀

Referencias

- AGYEMAN, J., BULLARD, R.D., EVANS, B. (2003), *Just sustainabilities: Development in an unequal world*. MIT Press, Cambridge, MA.
- BRIDGE, G. (2008), *Global production networks and the extractive sector: governing resource-based development*. J. Econ. Geogr. 8, p. 389-419.
- BULLARD, R. (2001), «Environmental Justice», en: Smelser, N.J. (Ed.), *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*. Pergamon, Oxford, pp. 4627-4633.
- BULLARD, R.D. (1994) *Unequal protection: environmental justice and communities of color*. Sierra Club Books, San Francisco, CA.
- MOHAI, P. y SAHA, R. (2007), Racial Inequality in the Distribution of Hazardous Waste: A National-Level Reassessment. Soc. Probl.
- ÖZKAYNAK, B., RODRIGUEZ-LABAJOS, B., ARSEL, M., AVCI, D., CARBONELL, M.H., CHAREYRON, B., CHICAIZA, G., CONDE, M., DEMARIA, F., FINAMORE, R., KOHRS, B., KRISHNA, V.V., MAHONGNAO, M., RAEVA, D., SINGH, A.A., SLAVOV, T., TKALEC, T., YÁNEZ, I., WALTER, M., ŽIVČIČ, L. (2012), Mining conflicts around the world: Common grounds from an environmental justice perspective. EJOLT Report No. 7.
- PÉREZ RINCÓN, M.A. (2014), «Conflictos ambientales en Colombia: inventario, caracterización y análisis», en: Garay, J. (Ed.), *Minería En Colombia: Control Público, Memoria Y Justicia Socio-Ecológica, Movimientos Sociales Y Posconflicto*. Contraloría General de la República, Bogotá, Colombia, pp. 253-325.
- SCHLOSBERG, D. (2007), *Defining environmental justice: theories, movements, and nature*, Oxford University Press. Oxford University Press, Oxford.
- SCHLOSBERG, D. (2013), Theorising environmental justice: the expanding sphere of a discourse. *Env. Polit.* 22, p. 37-55.
- TEMPER, L., DELBENE, D., MARTINEZ-ALIER, J., RODRIGUEZ-LABAJOS, B. (2014) *Mapping the frontiers and front-lines of Environmental Justice: the EJOLT Atlas*. Trans. Inst. Br. Geogr. Forthcomin.
- WALTER, M. (2014) *Political ecology of mining conflicts in Latin America an analysis of environmental justice movements and struggles over scales*. Universitat Autònoma de Barcelona.

Contra la velocidad: Movimientos locales contra mega-infraestructuras «inútiles e impuestas»

Alfred Burballa Noria y Leah Temper

Palabras clave: transporte, decrecimiento, alta velocidad, localismo, red TEN-T

En un sistema capitalista el tiempo es dinero

La distancia es habitualmente representada como una barrera espacial y temporal a superar. La separación espacial adquiere un coste monetizado que se expresa como una fricción de la distancia (Hanson, 2000). Por ejemplo, el valor de los ahorros en tiempo de viaje es a menudo el principal beneficio de un proyecto de transporte en un análisis de coste-beneficio. Es el coste de renunciar a un cierto número de minutos adicionales de trabajo por tiempo de viaje. El Departamento de Transporte de Estados Unidos recomienda valorar el ahorro de tiempo en viajes como el equivalente al 50% del valor del tiempo de acuerdo al salario para un desplazamiento personal local y al 100% para los viajes de negocios.

Esta mercantilización del espacio significa que una unidad de tiempo de viaje tiene un valor monetario. Esto ha llevado a la construcción de sistemas de transporte con el objetivo principal de proporcionar una movilidad rápida. Como Hanson (ibid.) escribe: «El capitalismo se nutre de la velocidad».

Sin embargo, nuevos movimientos en toda Europa – así como en otros lugares del mundo – están comenzando a cuestionar esta lógica. Movilizaciones tanto a nivel local como a través de redes transnacionales responden a lo que ven como proyectos de infraestructura de transporte impuestos desde arriba, basados en la visión de la creación de una red de transporte europeo unificado.

Este artículo examina los discursos y las motivaciones que sostienen la expansión de las redes

de transporte europeas, tales como la Red TEN-T (Trans-European Transport Networks), así como los relatos espaciales construidos desde arriba que fomentan una visión eco-moderna del transporte basada en conceptos discursivos como cohesión, policentrismo y «Missing links». Luego examinamos los «Grands Projets Inutiles Imposees» (Grandes Proyectos Inútiles Impuestos, en castellano, GPII en adelante), una red de oposición a mega-proyectos. Se presenta una aproximación crítica a las políticas en infraestructuras de transporte en Europa y se analiza la variedad de discursos existentes. El artículo también explora cómo se ejerce el poder en el ámbito de la planificación y, a la vez, como éste es cuestionado por los movimientos emergentes contra proyectos de mega-infraestructuras.

La Red TEN-T como punta de lanza de la política de la UE en transporte

La Red TEN-T ha sido anunciada por la Comisión Europea como «la reforma más radical de la política de infraestructuras de la UE desde su creación en la década de 1980». Implica nueve grandes corredores «que actuarán como una columna vertebral para el transporte en el mercado único europeo y revolucionarán las conexiones este-oeste (...). Tomados en su conjunto, la nueva política de infraestructuras de la UE va a transformar el mosaico actual de carreteras europeas, ferrocarriles, aereo-

puertos y canales en una red unificada transeuropea de transporte (TEN-T)».

Para lograr esto, la financiación de la UE en infraestructuras de transporte se triplicará en el periodo 2014-2020 alcanzando los €26000 millones. Aunque la Comisión lo anunció como un plan «radical», la TEN-T ha estado en el aire durante mucho tiempo. Como Jensen y Richardson (2003) escriben, las ideas de la TEN-T fueron en realidad un plan establecido por grupos de presión industriales que empleaban metáforas espaciales como «Missing links» (*i.e.*, tramos faltantes para la integración de la red) y «Policentrismo» (*i.e.*, reducir las diferencias de accesibilidad entre centro y periferia), y fueron capaces de unir sus fuerzas con los lobbies de la construcción y arrastrar, a su vez, a la UE. Estos conceptos fueron posteriormente incorporados en el discurso de la política de movilidad transeuropea en línea con su voluntad de superar la fricción de la distancia. Se adoptó así un relato de apariencia más positiva y constructiva cuya solución es, en último término, la infraestructura de alta velocidad. En el mapa que acompaña el artículo se puede observar el resultado de las políticas de transporte europeas traducidas en todo un abanico de infraestructuras junto a los conflictos que éstas han originado.

La Red «Grands Projets Inutiles Imposees» (GPII)

La red contra los GPII nace del impulso conjunto de distintos grupos ciudadanos de defensa del territorio frente a proyectos de ferrocarriles de alta velocidad. Fueron las integrantes del movimiento NO TAV de la Val di Susa quienes en 2011 organizaron el primer encuentro internacional para reunir a grupos y movimientos en lucha contra mega-proyectos en distintos países europeos. La iniciativa tuvo éxito y en los sucesivos años el foro se ha repetido en otras tres localizaciones distintas: en la Bretaña francesa (2012), en la zona llamada ZAD (por las siglas de «zona a defender» en francés) con un campamento improvisado en los terrenos destinados al nuevo aeropuerto de Nantes; en Stuttgart (2013), a cargo del movimiento opuesto a la nueva estación de ferrocarril llamada Stuttgart 214; y finalmente, el cuarto en Rosia Montana (Ruma-

nía; 2014), en el contexto de oposición a una mina de oro de gran escala. Se observa pues que, con la excepción del cuarto caso, los otros tres obedecen a casos de infraestructuras vinculadas al transporte.

En este sentido, considerando que la oposición al *fracking* fue una de las temáticas más tratadas en la última edición, se constata como la red ha ampliado el abanico de mega-proyectos a los que se opone y trata de organizar también respuestas al extractivismo.

La red, además, ha conseguido superar el marco europeo y establecer contactos con activistas en Turquía (revuelta del parque Gezi) y Marruecos (oposición a línea de alta velocidad Rabat-Casablanca).

Así pues, esta red tiene como objetivo el intercambio de ideas, el apoyo mutuo y la solidaridad, así como la coordinación de la protesta y la resistencia contra los mega-proyectos y el extractivismo. El documento que sienta las bases de la alianza contra los mega-proyectos es la llamada «Declaración común de Hendaya» del 23 de enero de 2010, redactado con motivo de un encuentro de movimientos opuestos a proyectos de líneas de alta velocidad y en la que se manifiesta la más rotunda oposición a estos proyectos aduciendo su carácter destructivo. Se cuestiona, además, que su construcción obedezca a una necesidad real y se exige un cambio de rumbo tanto a gobiernos estatales como a la UE.

Posteriormente, en el Foro Social Mundial de Túnez (2013), se redactó la Carta de Túnez, ampliando el campo de acción más allá de las líneas de alta velocidad y adoptando el concepto de «grandes proyectos inútiles impuestos». En esta carta se denuncian los mega-proyectos como mecanismo para facilitar la «acumulación por desposesión». Mecanismos como la inversión pública permiten garantizar beneficios a grandes grupos industriales y financieros que a menudo se traducen en un endeudamiento de las mismas administraciones. En el caso del extractivismo, se otorgan concesiones de explotación. Un ejemplo paradigmático es el proyecto Castor de almacenamiento subterráneo de gas ubicado en el Mediterráneo a poca distancia de la costa catalano-valenciana. Una iniciativa financiada por el Banco Europeo de Inversiones y, de forma pionera, mediante el «proyecto eurobonos Europa 2020». Recientemente este proyecto ha sido

cancelado debido a los terremotos que se produjeron cuando se empezó a inyectar gas. El resultado inmediato es que las consumidoras de gas deberán pagar la deuda de €1350 millones contraída con el inversionariado.

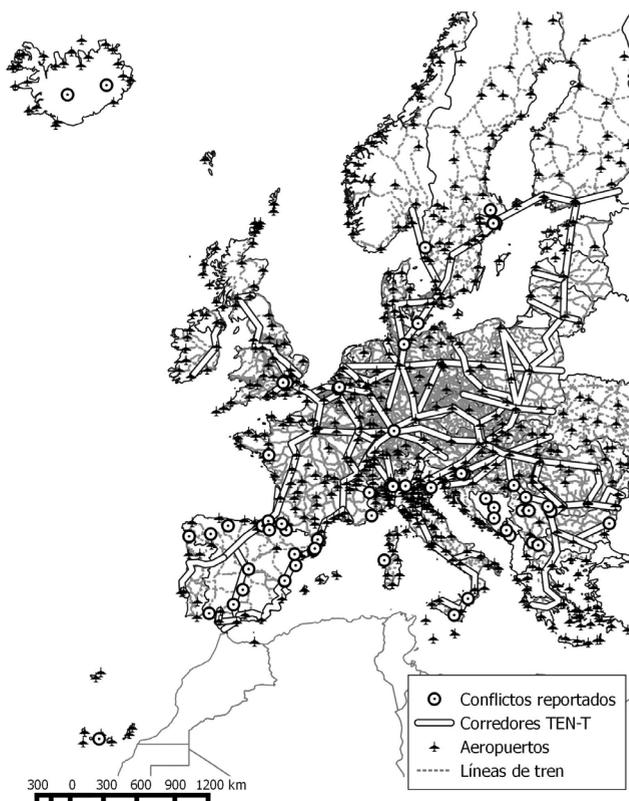
En la misma línea, se denuncia la represión y la criminalización de los movimientos de resistencia. Tanto en Italia como en España la oposición a las líneas de alta velocidad ha supuesto acusaciones de terrorismo y penas de cárcel. Dos años de pena para las tres «tartalaris» y uno para la que les acompañaba en la oposición al TAV en Navarra y, en el caso italiano, está pendiente un macro juicio donde se piden 53 condenas que suponen, en conjunto, 190 años de cárcel para las activistas NO TAV, que se suman a los 5 meses de reclusión que ya sufrieron 4 activistas a las que se les imputaban cargos por terrorismo.

Recapitulando, la declaración final del tercer Foro contra los GPII recoge que los mega-proyectos analizados presentan «el mismo derroche de dinero público en beneficio de una minoría, la misma devastación medioambiental y la misma negación de debate público». Por un lado, el concepto «inútil» hace referencia a que los mega-proyectos no son una consecuencia de una demanda presente en la ciudadanía, sino que son algo ideado por las élites políticas y económicas – la minoría –. Por el otro, el término «impuesto» se deriva de la noción de que semejantes obras no surgen de procesos de toma de decisiones abiertos y transparentes en los que la ciudadanía ha podido participar ampliamente.

¿Y quién conforma este tejido de resistencia? Camille (2013:97) en su análisis de los integrantes de la ZAD lo describe como «una coalición transgeneracional y «transpartisana» dada su composición de estudiantes y pensionistas, personas urbanas y rurales y miembros de colectivos ecologistas, anarquistas, ludistas, libertarios y decrecentistas.

Visiones desde abajo

Los grupos de resistencia a los mega-proyectos han tenido que rebatir la etiqueta de NIMBY (por las siglas en inglés de «no en mi patio trasero») que antaño se les adjudicó. Una interpretación según la cual los movimientos de defensa del territorio están desinformados, son acientíficos y su oposición se rige por una



Mapa 1. Rutas planificadas y construidos del TEN-T y conflictos contra infraestructuras en Europa

mentalidad cerrada y egoísta (McAvoy 1998). Esto los convierte en un obstáculo para el bien colectivo, que es la finalidad de las instituciones y los grupos de expertos. Sin embargo, Dahl (1989) y Lindblom (1990) cuestionan esta visión aduciendo que raramente existen grupos de expertos neutrales en la toma de decisiones y subrayan lo subjetivo del retrato que se hace de las comunidades opositoras.

Y, en efecto, semejante descalificación de los movimientos de resistencia queda rotundamente

rebatida si se tiene en cuenta la capacidad de movimientos como el NO TAV de elaborar alternativas a través de grupos propios de investigación (Gryll et al., 2013). O, en el caso del aeropuerto de Notre-Dame-des-Landes, con la presentación de un estudio que recomienda la reforma del aeropuerto ya existente en Nantes. Además, la respuesta de los activistas a la etiqueta de NIMBY es el sugerente eslogan: «ni aquí, ni en ningún lugar» (NIABY, por «Not In Anyone's Back Yard» en inglés).

Asimismo, en tiempos de crisis financiera y recortes presupuestarios los movimientos han tenido que lidiar con argumentos de «creación de empleo» e «impulso al crecimiento económico» que acompañan cualquier proyecto de mega-infraestructuras y hacer frente a la idea del «más lejos y más rápido» que impregna el relato de las grandes obras de transporte.

¿Cuál es entonces la visión propugnada por estos agentes? En primer lugar, la de la participación ciudadana en la toma de decisiones, superando el marco que presupone que la democracia significa únicamente ir a votar cuando hay elecciones. Como se observa en el caso de Stuttgart 21 (Novy y Peters, 2012) y otros más remotos como el de los molinos de viento en la comarca de la Terra Alta en Catalunya (Zografos y Martinez-Alier, 2009), la movilización popular consiguió convocatorias de referéndums locales en los que se convocó a la ciudadanía a decidir acerca del proyecto en conflicto.

Se propone, también, poner en relieve la idea de que la sostenibilidad no encaja con estas grandes obras, muy a menudo presentadas bajo el paraguas de la eficiencia en una clara operación de «greenwashing». Segura (2012) apunta al gran coste ambiental de estas infraestructuras debido a la fragmentación del territorio, la merma en biodiversidad, la ocupación de gran cantidad de suelo fértil y el incremento de la contaminación debido al tráfico. Todo esto junto al efecto rebote que genera mayor tráfico y consumo energético. Como apunta Zahavi (1979; citado en Segura, *op. cit.*, 74): «la construcción de autopistas metropolitanas se traduce en desplazamientos más largos antes que en ahorros de tiempo».

Lo expresado en estas líneas enlaza con otro de los argumentos en contra de los mega-proyectos que trasciende la protección medioambiental: en el con-

texto europeo ya existen, en mayor o menor medida, las infraestructuras de transporte necesarias. En cualquier caso, sería suficiente con reformar o mejorar las existentes. En este sentido, la implantación de la Alta Velocidad (AV) genera todo lo contrario, dado que por cada nuevo trayecto de AV que se ofrece se suelen cerrar servicios equivalentes ofrecidos por líneas de menor velocidad (Segura, *op. cit.*). El resultado es que ciertamente existen conexiones más veloces pero a un precio mucho mayor, lo que lleva a una elitización del ferrocarril (De Decker, 2013). Además, en la medida que las pasajeras que no pueden permitirse un mayor esfuerzo económico son desplazadas de dicho medio de transporte, pueden verse forzadas a cubrir ese trayecto mediante un vuelo low-cost, aumentando así los impactos medio-ambientales.

Como colofón, cabe añadir que la calificación de inútil está especialmente reforzada en el contexto español donde algunas de estas infraestructuras están infrautilizadas a día de hoy, mientras que otras ya se cerraron como el aeropuerto de Ciudad Real – que está inactivo después de una inversión de 1.100 millones de euros – o el tramo de AV entre Toledo y Cuenca – que transportaba un promedio de sólo 9 personas diarias antes de ser cerrado en 2013 –.

Todo apunta a que estas políticas se van a ver reforzadas en los próximos años. Como destaca Hildyard (2012), los promotores de infraestructuras buscan actualmente nuevas fuentes de financiación y las alianzas público-privadas se están convirtiendo en la nueva frontera de especulación financiera. Este mecanismo de financiación de infraestructuras tiene graves efectos sobre cómo se decide lo que se va a construir y a quién beneficia. Actualmente, el resultado es la reducción de líneas locales que conectan comunidades rurales entre sí (y permiten a las trabajadoras viajar de su casa al trabajo cada día), en favor de líneas más adecuadas para servir las demandas de viajes de negocios, de mercancías y las necesidades del sector privado. En este sentido, se subraya la importancia de movimientos como GPII que, en el marco de la lucha global por la justicia ambiental, reclaman el derecho de poder decidir en una visión del transporte democrática y participativa poniendo en relieve que la reconfiguración del espacio no puede ser entendida como un proceso racional de construcción desde arriba sino que es

un proceso disputado en el que es imprescindible la preponderancia de una visión del territorio desde la base (Gryll et al., 2013).

En resumidas cuentas, los colectivos de resistencia, con su oposición a la idea de «más rápido igual a mejor», chocan frontalmente con el sistema dominante. Siendo todavía una fuerza emergente, no se hallan en posición de disputar la hegemonía de la actual visión imperante, si bien la construcción de nuevas alianzas les puede situar en una mejor posición para lograr tal cometido. Además, ejemplos como el caso español, de total irracionalidad en la planificación de las mega-infraestructuras, indican que su discurso tiene fundamento y que, en estos tiempos de crisis, urge repensar qué es el bien común y hasta dónde se quiere ir; no solamente a qué velocidad. Es sugerente, en este sentido, recordar el lema del movimiento NO TAV: «vamos lento pero vamos lejos». ■

Agradecimientos

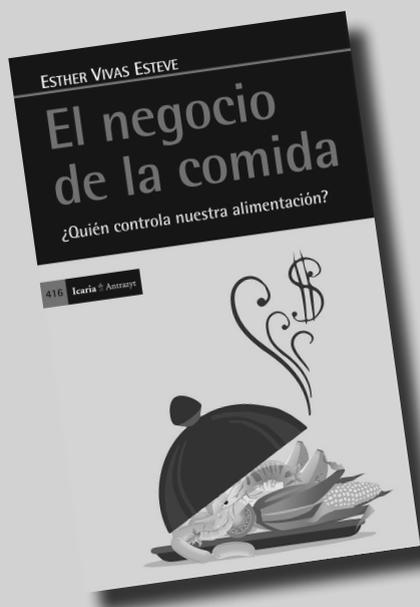
A Mariana Walter por sus aportaciones al texto y a Lucía Argüelles por la elaboración del mapa.

Referencias

- CAMILLE (2013), *Le Petit Livre Noir Des Grands Projets Inutiles*. Editions Le passager clandestin.
- DE DECKER, K. (2013), High Speed Trains are Killing the European Railway Network. *Low-tech Magazine* (16/12/2013). Disponible en: <http://www.lowtechmagazine.com/2013/12/high-speed-trains-are-killing-the-european-railway-network.html>
- DEIKE P. (2003), Cohesion, Polycentricity, Missing Links and Bottlenecks: Conflict- ing Spatial Storylines for Pan-European Transport Investments, *European Planning Studies*, 11:3, p. 317-339, DOI: 10.1080/09654310303638
- GREYL, L., VEGNI, S., NATALICCHIO, M. Y FERRETTI, J. (2013), *High Speed Transport Infrastructure (TAV) in Italy*, in Martínez-Alier, J., Healy, H., Temper L., Walter, M. and Gerber, J.F. (Eds) *Ecological Economics From the Ground Up*. Routledge.
- HILDYARD N. (2012), More than Bricks and Mortar. *Infrastructure-as-asset-class: Financing development or developing finance*. The Corner House. <http://www.thecornerhouse.org.uk/resource/more-bricks-and-mortar>
- HANSON, S. (2000), *Transportation: Hooked on Speed, Eyeing Sustainability* in E.T. Barnes and E. Sheppard (eds) *A Companion to Economic Geography*. Oxford: UK. Blackwell, 468-483
- LINDBLOM, C. E. (1990). *Inquiry and Change The Troubled Attempt to Understand and Shape Society*.
- MCAVOY, G. E. (1998), *Partisan Probing and Democratic Decisionmaking Rethinking the Nimby Syndrome*. *Policy Studies Journal*, 26(2), p. 274-292.
- NOVY, J., y PETERS, D. (2012), *Railway Station Mega-Projects as Public Controversies: The Case of Stuttgart 21*. *Built Environment* 38.1: p. 128-145.
- JENSEN, O.B y RICHARDSON, T. (2003), Being on the Map: The New Iconographies of Power over European Space, *International Planning Studies*, 8:1, p. 9-34, DOI: 10.1080/1356347032000059246
- SEGURA, P. (2012), *Infraestructuras de transporte y crisis. Grandes obras en tiempos de recortes sociales*. Libros en Acción.
- ZOGRAFOS, C., y MARTINEZ-ALIER, J. (2009), *The politics of landscape value: a case study of wind farm conflict in rural Catalonia*. *Environment and Planning A*, 41(7), p. 1726-1744.

Referencias no citadas

- HALLAMA, M., RIBO, M. M., TUDELA, S. R., & VENDRELL, G. C. (2011). El fenómeno del greenwashing y su impacto sobre los consumidores propuesta metodológica para su evaluación. *Aposta*, (50).
- RE:COMMON (2013), *Large infrastructures to overcome the crisis? The hidden risks of the Europe 2020 project bond initiative*. Disponible en <http://www.recommon.org/eng/?p=2923>.



El negocio de la comida

¿Quién controla nuestra alimentación?

Esther Vivas

El objetivo de esta obra es destapar y analizar las entrañas del sistema agroalimentario, adentrarnos en las tripas del agronegocio y los supermercados, armarnos de datos y ejemplos. ¿Por qué los alimentos recorren miles de kilómetros del campo al plato? ¿Por qué en 100 años ha desaparecido el 75% de la diversidad agrícola? ¿Por qué hay hambre en un mundo donde se produce más comida que nunca? ¿Por qué somos “adictos” a la comida basura?

Analizamos las causas de la hambruna, los mecanismos que permiten la especulación alimentaria, la “fiebre” por la tierra, los vínculos entre pobreza y alimentación, la conexión entre agricultura industrial y cambio climático, la invisibilidad de las campesinas, el impacto de los transgénicos, las consecuencias de lo que comemos en nuestra salud, los motivos de una alimentación “enganchada” al consumo de carne, entre otros temas. Destapar lo que no les interesa que veamos. Pero este libro no quiere quedarse en la crítica sino dotarnos de información comprensible y valiosa para sacar conclusiones y pasar a la acción. Una obra que es un grito a no resignarse ni a claudicar. Una llamada a preguntarnos e indagar. Una apelación a la rebeldía y al compromiso.

Título: El negocio de la comida

Subtítulo: ¿Quién controla nuestra alimentación?

Autora: Esther Vivas

Págs. 216 · Pvp. 17€

Colección: Antrazyt, 416

Conflictos ambientales en torno a proyectos extractivos y agrarios en Madagascar

Vahinala Raharinirina*

Traducido por: Yago Mellado Lopez

Palabras clave: glocal, biodiversidad, inversión extranjera directa, land-grabbing

Madagascar es uno de los puntos calientes en biodiversidad del mundo, así como un país extremadamente rico en recursos naturales y es, paradójicamente, uno de los más pobres. En 2013, el Banco Mundial estimaba que un 92% de la población malgache vivía por debajo del umbral de la pobreza. Desde hace varios años, el país es acosado por las industrias mineras y petroleras, los inversores del agronegocio y del sector turístico, y por los intereses de países emergentes que buscan recursos energéticos y nuevos espacios de cultivo. Forma parte así de las nuevas zonas que abastecen de materias primas a las sociedades industriales (*commodity frontiers*), consecuencia directa del cambio del «metabolismo social» a escala global, que empuja a las sociedades industriales a extender los territorios de abastecimiento.

En los últimos diez años se han lanzado multitud de nuevos proyectos mineros, petroleros y agrarios con el aval del Estado nacional provocando un aumento, hasta ahora desconocido, del nivel de Inversión Extranjera Directa (IED). El stock de IEDs de la rama «actividades extractivas» se ha disparado de 95 millones de US\$ en 2005 a 4,5 miles de millones US\$ en 2010 (Banco Central de Madagascar e INSTAT, 2011). Paralelamente, la proporción de población pobre nunca fue tan elevada en los últimos cincuenta años y el país asiste a la aparición de conflictos por todo el territorio. La sociedad civil malgache está

desbordada por casos de acaparamiento de tierras (*land grabbing*) y la multiplicación de injusticias ambientales. Se denuncia la opacidad total de los contratos que a menudo van acompañados de escándalos de corrupción que ponen en cuestión la gobernanza del país y consolidan la ruptura de confianza entre las élites y la población local.

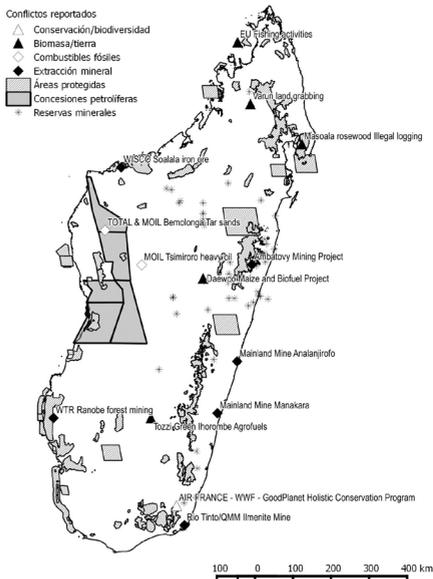
Dentro del marco del proyecto EJOLT se han recopilado e integrado en el EJAtlas 14 conflictos (véase Mapa 1). Esto ha sido posible gracias a la colaboración de la sociedad civil, las organizaciones locales de defensa de la justicia ambiental, periodistas de investigación y universitarios de diferentes disciplinas.

El objetivo de este artículo es doble. Ante todo queremos dar cuenta del estado de avance de los diferentes proyectos extractivos y agrarios en Madagascar y censar los diferentes conflictos que han generado. Y, en segundo lugar, pretendemos demostrar que el punto en común entre todos estos proyectos es su carácter *glocal*. Esto permitiría explicar por qué los actores malgaches, y concretamente la sociedad civil, manifiestan una cierta dificultad a organizar la resistencia, a pesar de las numerosas protestas.

Acoso a los recursos mineros y petroleros en Madagascar

Los modos de vida de los países industrializados han provocado de manera directa la exploración de todas las reservas planetarias disponibles de recursos mineros y energéticos, incluidas aquí

* Investigadora del Centro internacional de Investigación en Economía Ecológica, eco-innovación y herramientas de desarrollo para la sostenibilidad (REEDS) de la Universidad de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), (vahinala.raharinirina-douguet@uvsq.fr)



Mapa 1. Mapa de los conflictos ambientales en Madagascar recopilados en el EJAAtlas (septiembre 2014)

energías altamente controvertidas, como la arenas bituminosas o el gas de esquistos. El aumento de la demanda energética de los países emergentes no ha hecho más que reforzar esta tendencia. Y como las energías fósiles no son reciclables, la presencia de nuevos proveedores en el mercado es vital (Martínez-Alier, 2014).

Madagascar se encuentra así en el corazón de este nuevo fenómeno mundial de «bulimia energética y minera». Las inversiones extranjeras compiten en el país con mayor interés dado que la legislación malgache es una de las más atractivas en toda África en materia de extractivismo, siendo especialmente «atractivo» fiscalmente para los grupos mineros y petroleros. Desde 1996, siguiendo el impulso del Banco Mundial (BM), el Estado puso en marcha una nueva legislación minera y petrolera. Y en 2002, la entrada del «Ley sobre las Grandes Inversiones Mineras» (LGIM) estipula, por ejemplo, que la imposición a los beneficios de las empresas quedará reducida a un 25% (frente al 35% del régimen general), e in-

cluso a un 10%, cuando la transformación de los productos se realiza *in situ*. En este caso significa que el impuesto minero se fija en un 1% del valor de la producción vendida. La tasa de impuestos a la minería es del 2%.

En menos de diez años el gobierno malgache ha firmado varios contratos, a menudo de largo plazo y de manera opaca. Y en la mayor parte de los casos para extracción de recursos nunca extraídos como tierras raras, ilmenita, níquel, cobalto, uranio o arenas bituminosas. Los principales países inversores en estas «actividades extractivas» son Canadá, Reino Unido, China, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. El *stock* de IED recibido por parte de estos países representa más del 90% del conjunto de las IEDs a finales de 2010 (Banco Central de Madagascar e Instituto Nacional de Estadística, 2011).

Teóricamente las consultas públicas son obligatorias y el Estado debe informar a la ciudadanía. A nivel práctico, sin embargo, las autoridades públicas establecen un proceso elitista y secreto en torno a estos contratos. Ante la urgencia financiera, el Estado quiere ir de prisa y no da lugar al debate público, monopolizando así el proceso. Es la expresión misma de la depredación del Estado y del monopolio estatal (Randrianja, 2014); situación denunciada constantemente por la sociedad civil malgache. Para Amigos de la Tierra (*Friends of the Earth*, 2012) son las leyes mineras y petroleras, redactadas para hacer de Madagascar un país «competitivo», las que formalizan esta opacidad generalizada. El artículo 222 del código minero estipula, por ejemplo, que «los informes y estudios aportados por los titulares son confidenciales durante la validez de los permisos mineros. Una vez expirado este plazo, serán accesibles al público».

Proliferación de los proyectos agrarios en Madagascar: ¿inversión o acaparamiento de tierras?

Madagascar no sólo atrae empresas mineras y petroleras; también las tierras agrícolas interesan a los inversores extranjeros. El alza de los precios de los alimentos en 2007 y 2008 contribuyó ampliamente

a la aceleración de las adquisiciones y del arrendamiento de tierras a gran escala (Allaverdian, 2010). Por otra parte, la mediación internacional en 2008 en el proyecto de arrendamiento de tierras agrícolas por parte de la compañía surcoreana Daewoo Logistics permitió a la sociedad civil internacional y malgache familiarizarse con esta problemática del *land grabbing*. A modo de recordatorio, el 18 de noviembre de 2008 un artículo del *Financial Times* informó de una conferencia de prensa realizada por Daewoo en Seúl, en la que anunciaba que el gobierno malgache le cedía 1.300.000ha de tierras por 99 años para producir 500.000 toneladas de aceite de palma y 4 millones de toneladas de maíz, destinados en su totalidad a Corea y a otros mercados exteriores. Según anunciaba, el acceso a estas tierras sería gratuito a cambio de una inversión de 6.000 millones US\$ en 25 años (Teyssier et al., 2010). Esta información fue rápidamente difundida por varios medios de comunicación internacionales y nacionales, a pesar de que ya había sido revelada un mes antes por la ONG internacional GRAIN.

Esta maniobra de apropiación territorial a gran escala tanteada por Daewoo, así como otros casos que explicaremos a continuación, participaron a la desestabilización del gobierno de Ravalomanana (Teyssier et al., 2010). Hay que señalar que, a pesar de la modificación realizada en 2003 por Ravalomanana autorizando la venta de las tierras a los extranjeros que invirtieran más de 500.000 US\$ (Ley 2003-028), la *tanindrazana* o «tierra de los ancestros» sigue siendo inalienable para la sociedad malgache (Franchi et al., 2013). Rajoelina, que detentaría el poder sin haber sido electo, desde el golpe de 2009 hasta 2013, no hizo sino reforzar la misma tendencia. En efecto, al no haber sido reconocido por la comunidad internacional, su gobierno sólo pudo autofinanciarse a través de proyectos.

Las tierras agrícolas entregadas entre 2005 y 2013 por los gobiernos de Ravalomanana y Rajoelina representaban millones de hectáreas. La superficie total de Madagascar es de 58.704.100ha y la superficie de tierras arables se estima que es de 8 millones de hectáreas, según el Ministerio de Agricultura (2008), frente a los 15-20 millones estimados por la FAO (2007). La superficie media cultivada por persona o superficie agrícola por pro-

ductor era de 1,2ha en 1985, de 0,87ha en 2005 y en 2009 tan sólo representaba 0,15ha (Andrianirina et al. 2011). En un país en el que el 70% de la población es rural, esta situación plantea un verdadero problema ético.

Los colectivos TANY, GTZ, GRAIN y CIRAD hacen referencia a numerosos contratos. Un estudio científico realizado en 2012 da cuenta de 50 proyectos de adquisición de tierras destinadas al agronegocio entre 2005 y 2010. Esto representaría en torno a 3 millones de hectáreas de las cuales un 65% irían destinadas a la producción de productos alimenticios, un 32% a la producción de agrocarburos y un 3% a plantaciones de bosques (Burnod, Gingembre y Andrianirina, 2012).

Las cesiones de tierras a gran escala en Madagascar son realizadas por el Estado en favor de inversores de naturalezas y orígenes diversos: podemos encontrar un Estado, una empresa extranjera pública o privada, filiales de multinacionales, así como actores nacionales. Por otra parte, el inversionariado ya no es como el de antes, originario exclusivamente de países occidentales: incluye ahora a países como Corea, India, Australia, China, Francia, Alemania, Irlanda, las islas del océano Índico y probablemente Malasia e Israel. En efecto, los medios de comunicación locales revelaron respectivamente en 2013 y 2014 la intención del Estado nacional de arrendar tierras arables a estos dos países (Colectivo TANY, 2013b).

Extractivismo y agronegocio: ¿origen de conflictos?

Por un lado, el agronegocio y el extractivismo son «sectores estratégicos» para el Estado malgache y sus principales socios capitalistas. Se trata de sectores esenciales para reforzar la lucha contra la pobreza e impulsar el despegue económico de Madagascar, a través de inversiones, fiscalidad, creación de empleo y transferencia tecnológica. Los medios de comunicación malgaches hablan en este sentido, a menudo, de proyectos en los que «todo el mundo gana». Y es cierto que las empresas de inversión extranjera se encuentran entre las principales proveedoras de empleo en Madagascar.

El número de empleos en las industrias de capi-

tal extranjero era de 80.500 en 2008, de 60.200 en 2009 y cerca de 62.700 en 2010 (Banco Central de Madagascar e INSTAT, 2010). Entre 2008 y 2009 se produjo una pérdida notable de empleos, debido al inicio de la crisis política que desembocó en el «golpe de Estado». Se trata de empleos perdidos fundamentalmente en el sector textil. A continuación se observa una ligera alza del 4,2% en 2010 respecto al año 2009, fundamentalmente generada por la creación de empleos en el sector de las «actividades mineras». Dicho de otro modo, la inestabilidad política no frenó a los inversores extranjeros del sector minero. Y más aún, las industrias extractivas son la excepción: respecto a 2008, el nivel de la producción en este sector progresó en un 10,4% (Banco Central de Madagascar e INSTAT, 2012).

Por otra parte, la mayor parte de estos proyectos extractivos tienen una huella ecológica muy elevada. Cada año, millones de metros cúbicos de agua son bombeados directamente desde los ríos para el refinado de los minerales y para la alimentación de los oleoductos. A esto se añaden otras externalidades negativas, como la polución de los cauces de agua y de las capas freáticas, el enarenamiento de ciertos ríos, la degradación de los ecosistemas terrestres y marinos, la destrucción de biodiversidad, etc.

Se le ha dado mucha cobertura a casos de tierras confiscadas a los campesinos en beneficio de los grandes proyectos. Fue el caso de Daewoo, de Varun International, WISCO y el de Tozzi Green. Las cesiones de tierras a gran escala afectan seriamente a los derechos consuetudinarios de uso y usufructo de las tierras de las poblaciones locales, a pesar de que la reforma territorial de 2005 pretende tener en cuenta tales derechos (Franchi et al., 2013). Los medios de comunicación y la sociedad civil también han señalado injusticias de orden étnico en dos zonas donde se han implantado proyectos. Las comunidades nativas de Toamasina y de Taolagnaro reprocharon respectivamente a Sherritt/Ambatovy y QMM/Rio Tinto que privilegiaran la contratación de mandos nativos de Antananarivo en detrimento de jóvenes de sus regiones.

La sociedad civil denuncia también niveles de compensación irrisorios al desplazamiento de la población. En Taolagnaro, por ejemplo, las tierras que pertenecían a las comunidades

locales de Ehoala se compraron a un precio que osciló entre 100 y 6.000 ariary/km², que equivale aproximadamente entre 0,01 y 2€, por las necesidades de QMM/Rio Tinto a principios de los años 2000. Esto provocó manifestaciones locales contra Rio Tinto en la región Anosy entre 2011 y 2013.

Un ejemplo de la flagrante falta de respeto de los cuadros de mando que dirigen las actividades extractivas es el caso de la compañía china MAINLAND, que empezó a explotar el yacimiento de ilmenita de Anjahambe en noviembre de 2007, a pesar de carecer de permiso medioambiental. Según los medios de comunicación locales en diciembre de 2007 esta compañía pudo exportar 1.250 toneladas de ilmenita a través del puerto de Toamasina (Harniaina y Zafimahova, 2012).

El proyecto WISCO Soalala plantea la extracción de hierro y la construcción de un puerto internacional en la Bahía de Baly; un enclave ecológico con numerosas especies inscritas en la lista roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Se han recopilado también casos de confiscación de tierras por parte del Estado y la exclusión de las poblaciones locales de Soalala de los procesos de concertación (Colectivo TANY, 2013c). También los medios revelaron un escándalo financiero: el desvío de los 100 millones US\$ abonados por WISCO al Estado malgache, de los cuales una parte debería haber llegado a las colectividades descentralizadas.

Ambatovy provocó la degradación del bosque primario durante la construcción de los 220km de oleoducto, la desaparición masiva señalada por la Asociación de apicultoras y agricultoras de Toamasina (FMMT), sin ninguna compensación y una fuga de dióxido de azufre en la fábrica. También hubo un escándalo de corrupción: según los medios de comunicación, algunas personalidades del gobierno de Rajoelina reclamaron una importante suma de dinero al inversionariado de Ambatovy a cambio del permiso de explotación.

El punto común entre estos variados proyectos es que los productos alimenticios, los minerales o los recursos energéticos están destinados a la exportación. Una vez más nos encontramos en lo «glocal»: inversores y tecnologías procedentes de los países

industrializados y emergentes, empleo de mano de obra y recursos locales, productos destinados al mercado internacional. Una realidad que recuerda a la de los períodos coloniales y postcoloniales, en los que las materias primas eran casi siempre exportadas sin transformación local y, por lo tanto, con muy poco valor añadido.

La(s) respuesta(s) de la sociedad malgache

La proliferación de proyectos mineros, petroleros y agrarios ha multiplicado los conflictos y las injusticias en el conjunto del territorio malgache. La sociedad civil se ve desbordada por las demandas de las comunidades campesinas, a menudo impotentes. En general, están muy poco informadas y, en algunos casos, ni tan siquiera han sido llamadas a los procesos de concertación. A pesar de su declarada voluntad, la sociedad civil malgache ha manifestado una cierta dificultad para organizarse y articular las protestas que siguen siendo finalmente muy localizadas. Varias razones explican esta situación.

En primer lugar, las crisis políticas cíclicas impiden a la sociedad civil encontrar una verdadera dinámica de protestas. El estado malgache ya no es considerado como un interlocutor fiable. Es juez y parte. Se produce así una «ruptura de confianza» evidente. O peor aún, se constata una fuerte reaparición de la represión y una ausencia de libertad de expresión. En 2012 y 2013, durante los conflictos que enfrentaron a una parte de la población de Taolagnaro y la compañía QMM/Río Tinto, el estado malgache intentó bloquear a la sociedad civil y ahogar las protestas locales (Raharinirina y Meynen, 2013).

En segundo lugar, la naturaleza compleja de los contratos firmados por el gobierno impiden a la sociedad civil definir estrategias claras de protesta. Los proyectos implican a menudo un consorcio de compañías privadas, filiales de multinacionales o empresas conjuntas (*joint venture*) entre el gobierno, compañías privadas, bancos, instituciones financieras internacionales y agencias de desarrollo. Y a veces ocurre incluso que grandes organizaciones internacionales de defensa del medio ambiente llegan a conceder el estatus de «modelo de desarrollo

sostenible» a proyectos localmente controvertidos. En 2010, por ejemplo, la UICN no dudó en firmar un acuerdo de tres años con Río Tinto para la conservación de la biodiversidad en Madagascar. Esta empresa, que degradó 1.650ha de bosque primario litoral (un 3,5% de la superficie del bosque litoral total), se beneficia así del apoyo de una de las principales ONG internacionales de conservación y se presenta como una empresa responsable. Una situación incomprensible para las organizaciones locales que militaron por la justicia ambiental.

A pesar de estos obstáculos, la sociedad civil ha dado ya un primer paso en la organización de la resistencia. Se han creado redes en el país que a su vez se han integrado en otras redes a nivel internacional. Con el fin de dar cobertura mediática internacional a las injusticias, se está trabajando con redes académicas y con la sociedad civil mundial. Por ejemplo, la *Alliance Voahary Gasy* (AVG), plataforma que agrupa 28 organizaciones de la sociedad civil en defensa del medio ambiente, colabora con la Universidad de Michigan, es miembro de la red académica *Madagascar Environmental Justice Network* (MJEN) y está implicada en el proyecto europeo EJOLT sobre justicia ambiental. Ante el fenómeno del *land grabbing*, en 2003, se creó una plataforma denominada *Solidarité des Intervenants du Foncier* (SIF) cuyo objetivo es facilitar el acceso a la propiedad territorial a la población malgache.

La sociedad civil malgache trabaja también con su ala expatriada *Colectivo TANY*, un actor muy dinámico y reactivo de la diáspora malgache en Francia en cuestiones territoriales y extractivas. Hace *lobbying* institucional con el fin de lograr una transparencia en los contratos y la implicación sistemática de las poblaciones locales en los procesos de negociación. Con SIF y AVG es uno de los actores más presentes mediáticamente en Madagascar. Ha sabido también acercarse a otras organizaciones de la sociedad civil como GRAIN (España), Re:Common (Italia), Ritimo (Francia), etc.

Las reivindicaciones de la sociedad civil se articulan principalmente en torno a negociaciones de los contratos, el acceso a la tierra y a los recursos naturales, la seguridad alimentaria, así como las compensaciones de las comunidades. Se observan asimismo posiciones divergentes, e incluso contra-

dictorias, respecto a la pertinencia de las inversiones extranjeras. En los proyectos agrarios, por ejemplo, una parte es favorable a la intensificación agrícola, pero reclama más equidad en el reparto de las ventajas, mientras que otra parte se opone por completo y reivindica una agricultura familiar y sostenible. Respecto a los proyectos mineros y petroleros, una parte reclama la suspensión de los proyectos polémicos y el retorno a una auténtica concertación, mientras que otra parte pide más bien compensaciones justas, más empleos para la población local y una gestión transparente de los contratos y los pagos. La sociedad civil también está dividida en torno a la necesidad o no de revisar la legislación sobre el territorio, los códigos mineros y petroleros así como la *Ley sobre Grandes Inversiones Mineras* (LGIM).

A nuestro parecer la sociedad civil malgache necesita un refuerzo en términos de información y conocimientos sobre estas cuestiones que son cada vez más complejas. Según el sociólogo malgache Jean-Claude Rabeherifara, la sociedad civil de Madagascar es aún muy joven; podríamos decir que está naciendo (Raharinirina, 2013a). Necesita por lo tanto tiempo para reapropiarse los problemas, que son nuevos y complejos y que tienen una dimensión a la vez local y global («glocal»).

Conclusión

El cambio de rumbo realizado en Madagascar en la política agraria y extractiva hacia finales de los años 90 (con el impulso del BM) ha permitido alcanzar un doble objetivo: atraer IED y crear empleo. El sector extractivo se ha convertido en el mayor proveedor de empleo en Madagascar. A la vez, los proyectos mineros, petroleros y agrarios han multiplicado las tensiones y los conflictos en la sociedad malgache y están acompañados a menudo de injusticias sociales y medioambientales cada vez más frecuentes.

El análisis de estos proyectos ilustra el carácter «glocal» de todos estos conflictos. Para responder a las necesidades energéticas y para alimentar a una población planetaria en crecimiento, Madagascar se ha posicionado como un país proveedor de recursos y esta elección ha conllevado diferentes conflictos con la sociedad civil, concretamente a nivel local.

Por otra parte, los actores implicados en los contratos son cada vez más variados e implican a veces entidades muy potentes en el ámbito financiero mundial. El posición del propio Estado malgache ha sido frecuentemente muy criticada por su «debilidad» en las negociaciones. Los contratos que firma tienden a privilegiar los intereses de los inversores extranjeros. Por el contrario, su posición ante la sociedad civil o las comunidades locales es considerada como «discrecional». Algunos analistas no dudan en hablar de depredación y de monopolio estatal.

En este juego de actores, la sociedad civil malgache ha tratado de posicionarse como un contrapoder del Estado y denunciar prácticas irresponsables e injustas. A pesar de la timidez de sus acciones locales y las divergencias internas, la sociedad civil malgache ha asimilado la idea de que se debe adoptar una nueva estrategia, por el carácter complejo de las implicaciones de estos grandes proyectos y las relaciones de fuerza entre los actores. En ese sentido, ha empezado a tejer vínculos con la sociedad civil mundial, la diáspora malgache y las redes académicas. Han aparecido nuevas formas de protesta, concretamente desde 2008 y debido el acaparamiento de tierras realizado por Daewoo. Estas protestas han recurrido a los canales de estas nuevas redes, pero también, cada vez más, a los medios sociales. A falta de una verdadera democracia deliberativa en el territorio, la sociedad civil intenta tomar como testigos a actores del ámbito global, una estrategia que parece finalmente pertinente y hábil, ante el carácter «glocal» de los conflictos y para esquivar la ausencia de libertad en el territorio. ■

Referencias

- ALLAVERDIAN, C. (2010), *Agricultures familiales et sociétés civiles face aux investissements dans les terres dans les pays du Sud*, Coordination Sud: Solidarité Urgence Développement, p. 131.
- ANDRIANIRINA RATSIALONANA, R., RAMAROJOHN, L., BURNOD, P. Y TEYSSIER, A. (2011), «After-Daewoo? Current Status and Perspective of Large-Land Scale Acquisitions in Madagascar». Roma: Observatoire du Foncier à Madagascar, CIRAD, ILC.

- BANCO CENTRAL DE MADAGASCAR e INSTAT, (2012), Etude sur les Investissements Directs Etrangers à Madagascar, Diciembre 2012, 46 p.
- BANCO CENTRAL DE MADAGASCAR e INSTAT, (2011), Etude sur les Investissements Directs Etrangers à Madagascar, Julio 2011, 48 p.
- BANCO CENTRAL DE MADAGASCAR e INSTAT, (2010), Etude sur les Investissements Directs Etrangers à Madagascar, Febrero 2010, 50 p.
- BURNOD, P., GINGEMBRE, M., Y ANDRIANIRINA RATSIALONANA, R. (2012), «*Do Investors Really Manage to Have Secure Land Rights? Land Deals and Competition Over Land control in Madagascar*». Trabajo presentado en el «Annual World Bank Conference on Land and Poverty» Banco Mundial - Washington DC, 23-26 Abril, 2012, 22 p.
- BURNOD, P., GINGEMBRE, M., ANDRIANIRINA RATSIALONANA, R., Y RATOVOARINONY, R. (2011), «*From International Land Deals to Local Informal Agreements: Regulations of and Local Reactions to Agricultural Investments in Madagascar*». Trabajo presentado en la International Conference on Global Land Grabbing, 6-8 Abril 2011, organizada por la *Land Deals Politics Initiative* (LDPI), 17 p.
- Colectivo TANY, (2013a), «Plus que jamais, redoublons de vigilance sur les terres malgaches», Comunicado del 31 de Enero de 2013.
- Colectivo TANY, (2013b), «Madagascar, grenier de l'Océan Indien: Des engagements à risques à mener avec précaution». Comunicado del 22 de Marzo de 2013.
- Colectivo TANY, (2013c), «Quels impacts attendre du projet d'exploitation de fer par la société chinoise WISCO et de la construction du port de Soalala?». Comunicado del 18 de Mayo de 2013.
- FRANCHI, G., RAKOTONDRAIBE, M., RAPARISON, E., Y RANDRIANARIMANANA, P. (2013), Acaparement des terres à Madagascar: Echos et témoignages du terrain. Informe de TANY/Re:Common/SIF, 99 p.
- FRIENDS OF THE EARTH, (2012), Madagascar: nouvel eldorado des compagnies minières et pétrolières. Synthèse, Noviembre 2012, 27 p.
- GTZ, (2009), Foreign Direct Investment (FDI) in Land in Madagascar. GTZ, Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, 35 p.
- HARINIAINA, J-L., y ZAFIMAHOVA, S. (2012), Mise en contexte du projet d'exploitation d'ilménite par la Société Mainland Mining Ltd: Cas de Manakara, Antananarivo, 12 de Febrero de 2012, 13 p.
- MARTINEZ-ALIER, J. (2014), L'écologisme des Pauvres. Une étude des conflits environnementaux dans le monde. Institut Veblen/Les Petits Malins, 670 p.
- MARTINEZ-ALIER, J. (2001), «Mining conflicts, environmental justice, and valuation». *Journal of Hazardous Materials* 86 (2001), p. 153-170.
- MARTINEZ-ALIER, J., KALLIS, G., VEUTHEY, S., WALTER, M., y TEMPER, L. (2010), 'Social Metabolism, Ecological Distribution Conflicts, and Valuation Languages'. *Ecological Economics*, vol. 70, Issue 2, 15 Diciembre 2010, p. 153-158.
- PICHLER, M. (2010). «Agrofuels in Indonesia: Structures, Conflicts, Consequences, and the Role of the EU». *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 3(2).
- RAHARINIRINA, V. (2013a), Madagascar: conflits locaux autour des projets extractifs et agraires. En: *Etats des résistances dans le Sud: Les Mouvements paysans*. Alternatives Sud, Bélgica, vol. 20 (4), p. 57-66.
- RAHARINIRINA, V. (2013b), Madagascar: to eat or to be eaten? The lang grabbing issues in Madagascar. Post del blog de EJOLT. Rambouillet, REEDS-Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ).
- RAHARINIRINA, V., Y MEYNEN, N. (2013), Rio Tinto in Madagascar: 15 activists arrested. Post del blog de EJOLT. Rambouillet, REEDS-Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ).
- TEYSSIER, A., RAMAROJOHN, L., y ANDRIANIRINA RATSIALONANA, R., (2010), Madagascar: des terres pour l'agro-industrie internationale? *Alternatives Sud*, Vol. 17-2010/, p.135-159.

Conflictos ambientales en Colombia: actores generadores y mecanismos de resistencia comunitaria¹

Mario Alejandro Pérez-Rincón*

Palabras clave: Conflictos ambientales, Colombia, mecanismos de resistencia, Justicia Ambiental, Neo-Extractivismo

Introducción

En Colombia, la especialización productiva dirigida hacia el sector primario potenció las ventajas comparativas asociadas a la abundancia de tierra, agua y clima, y con ello se generó un incremento significativo en el área utilizada por la dinámica económica extractiva. La expansión de estas actividades se encontró con formas de producción campesina y sociedades híbridas que dependen en buena medida de los servicios ambientales provistos por la naturaleza, con lo cual se intensificaron de forma significativa los conflictos e injusticias ambientales.

Dado el carácter intensivo y extensivo del modelo extractivo en términos del uso de la tierra, el agua y la naturaleza, se generaron grandes niveles de acumulación de los recursos naturales, y con ello grandes impactos y conflictos ambientales entre los nuevos agentes empresariales, que expanden sus actividades bajo patrones agresivos en términos tecnológicos y las comunidades, que tienen otra forma de relacionarse con la naturaleza y entre sí mismas. La expansión de estas

actividades se encuentra frecuentemente con formas de producción campesina, con agricultura familiar, mezcla de cultivos para el autoconsumo y el mercado local, con culturas híbridas (García-Canclini, 1990) que dependen en buena medida de los servicios ambientales provistos por la naturaleza y con poco respaldo institucional. La vulnerabilidad de estas comunidades potencia los impactos ambientales sobre las mismas, incrementando su exclusión sobre los recursos naturales de los cuales subsisten, afectando sus modos y medios de vida, sus redes sociales, sus estructuras culturales y sus derechos consuetudinarios, generándose un despojo del agua, la tierra, los territorios comunales, la biodiversidad, y otros bienes comunales.

En este contexto, este artículo tiene tres propósitos: i) Presentar los principales conflictos ambientales identificados en el país; ii) Identificar las actividades y agentes generadores de estos conflictos; y, iii) Conocer los mecanismos de resistencia que han desarrollado las afectadas para defender su acceso a los bienes comunes. Este trabajo se hará a partir de un inventario realizado para 95 casos de conflictos ambientales distribuidos por todo el territorio colombiano, siendo el mismo altamente representativo de las disputas ecológico-distributivas de la realidad nacional actual.

Conflictos ambientales y justicia ambiental

Partiendo de una definición amplia sobre *conflicto social*, éste se estructura a partir de una divergencia o incompatibilidad entre dos o más

* Profesor Universidad del Valle - Instituto CINARA, Cali, Colombia (mario.perez@correounivalle.edu.co)

¹ Investigación financiada por el proyecto CSO2010-21979 «Metabolismo social y conflictos ambientales» y por el proyecto EJOLT (Environmental Justice Organization, Liberties and Trade) de la Unión Europea.

objetivos o intereses en pugna dentro de un sistema (Grasa, 1994). Sin incompatibilidad o contraposición de objetivos, no existe conflicto. Los objetivos en pugna pueden ser materiales, tangibles (es decir intereses y necesidades), o intangibles (sentimientos, valores, pautas culturales). De ahí que pueden distinguirse entre conflictos de intereses o conflictos de raíces profundas.

El conflicto no surge de manera automática ante cierto tipo de problemas o necesidades que padecen las colectividades o los grupos subordinados. Es un constructo social que requiere ciertas condiciones sociales, procesos cognitivos diferenciados y las redes sociales necesarias para hacer de la protesta una condición social y no individual y aislada, reactiva o espontánea. Es necesario reconocer el conflicto, latente o manifiesto, como una situación de malestar, presente en el sistema social, que hace posible la impugnación o rechazo de un acontecimiento que afecta a grupos excluidos o subordinados. El conflicto coloca en calidad de problema una relación de desigualdad, subordinación, injusticia u omisión que cause perjuicio, malestar o merme la calidad de vida y oportunidades de las personas (Agüero, 2011).

En esta perspectiva, los conflictos ambientales o conflictos ecológicos distributivos son definidos como: «(...) las luchas generadas por los efectos de la contaminación en ciertos grupos o por los sacrificios causados por la extracción de recursos naturales, de los cuales muchos se convierten en incidentes colectivos, que motivan a personas de un lugar concreto a expresar críticas, protestar o ejercer resistencia, presentando reclamos visibles sobre el estado del ambiente físico y los probables impactos en su salud o en su situación económica, que afectarían sus intereses y también los de otras personas y grupos» (Kousis, 1998).

En términos históricos, el concepto de «*justicia ambiental*» es un antecedente del estudio de los conflictos ambientales. Aunque, este concepto esta aún precedido por otro, el de «*racismo ambiental*», el cual irrumpe en el radar político y académico de EEUU en 1982 cuando activistas de derechos civiles se organizan para detener en el Estado de Carolina del Norte el vertido de 120 millones de libras de tierra contaminada

con *bifenilopoliclorados* (PCB) en el condado de Warren, habitado en alta proporción por personas afroamericanas. El Condado de Warren se convirtió así en símbolo del nacimiento del movimiento social sobre la justicia ambiental, aspecto que la corriente ambientalista principal no había considerado, es decir, que las personas de raza negra y las comunidades empobrecidas se enfrentaban a riesgos ecológicos mucho mayores que las personas blancas (Mohai et al., 2009: p. 408-409).

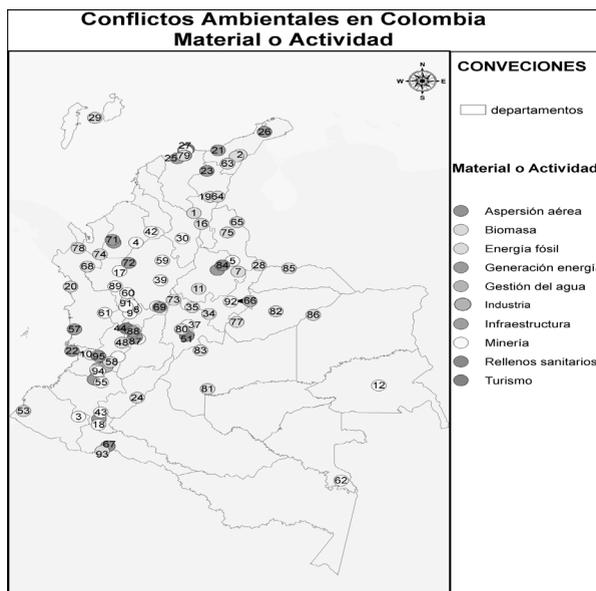
Por otra parte, un tema más reciente asociado es el de *justicia hídrica* que estudia la creciente concentración del agua y de los derechos de agua en unas pocas, analizando los conflictos que surgen en consecuencia por parte de grupos indígenas y comunidades rurales, que reclaman sus derechos sobre el agua basados en reglas consuetudinarias locales (Boelens et al, 2011: 13-18). Los conflictos por el agua se originan por la distribución desigual, así como por la discriminación en los derechos a la autogestión y representación democrática donde se toman las decisiones y se hacen las reglas del agua. «*Los estudios de justicia hídrica buscan influir en el debate y apoyar las estrategias de la sociedad civil para lograr políticas de gestión del agua más democráticas, mecanismos de resolución de conflictos de agua más efectivos y una distribución más justa de los recursos hídricos*» (Idem: 18).

Inventario de los conflictos ambientales en Colombia

En la Figura 1 (mapa), se presentan los 95 conflictos inventariados dentro de esta investigación. Como se observa, el inventario incluye conflictos de todo tipo; se ubican en buena parte de las regiones del país; son generados por diferentes tipos de actividades en distintos sectores de la economía (agropecuario o biomasa, infraestructura, energía fósil, fumigaciones, generación de energía, minería y residuos sólidos); incluyen las diferentes fases de los proyectos o actividades generadores de los impactos (propuesta, planeación, operación e incluso abandono de los proyectos); afectan a distintos tipos de comunidades (población urbana, campesinado, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes);

son generados por diferentes tipos de empresas (nacionales, extranjeras y mixtas); afectan a distintos tipos de ecosistemas y de recursos naturales (tierra, agua, paramos, humedales, bosques, ríos, mares, manglares, etc.); las comunidades afectadas desarrolla diferentes tipos de resistencias sociales (movilizaciones, paros, protestas, denuncias, etc.) y recurren a diferentes tipos de instrumentos legales y jurídicos para defenderse y para buscar la justicia ambiental (actos legislativos, consultas populares, acuerdos municipales, tutelas, acciones de cumplimiento, derechos a consulta previa; etc.); entre otros.

Figura 1. Conflictos ambientales en Colombia



(Fuente: Base de datos Univalle – EJOLT, Colombia)

Actividades y agentes económicos generadores de los conflictos ambientales en Colombia

Una forma de caracterizar y analizar los conflictos ambientales es identificar las actividades y agentes generadores de las disputas; en este caso se hace referencia a los sectores económicos que generan los conflictos, y a las empresas propietarias

de los proyectos o actividades que producen los impactos ambientales o sociales que afectan a las comunidades o a los ecosistemas.

Los sectores económicos generadores de los conflictos

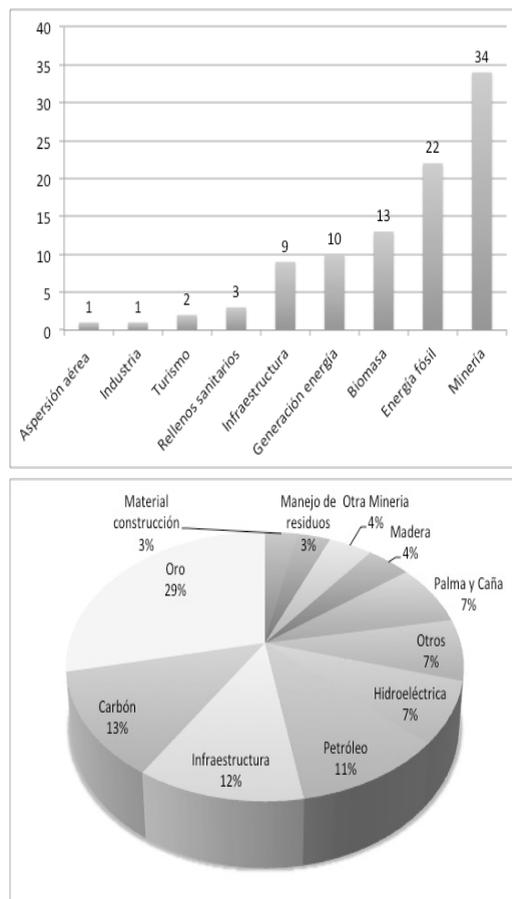


Figura 2. Clasificación de los conflictos ambientales acorde al sector metabólico (A) y al producto o actividad generadora del conflicto (B) en Colombia (95 casos)

(Fuente: Base de datos Univalle - EJOLT, Colombia)

La Figura 2 (A y B) muestra la clasificación de los conflictos acorde al sector económico y al producto específico generador del conflicto. Para Colombia, 34 de los 95 conflictos inventariados, están relacionados con la minería, lo que representa el 36% del total. Dentro de estos

se destaca el oro, con 27 casos que representan el 29% de todos los conflictos y el 79% de las disputas mineras inventariadas. Dentro de estos casos se resaltan dos conflictos de minería de oro por su magnitud y relevancia para el país; el del páramo de Santurbán en Santander, donde tiene presencia la multinacional Greystar de Canadá y el conflicto en la mina La Colosa, Cajamarca-Piedras, Tolima, relacionado con la multinacional Anglo Gold Ashanti (AGA) de Sudáfrica.

Por su parte, la extracción y exploración de *energía fósil* explica el 23% de los conflictos, destacándose el *carbón* con 12 (12,6%) y el *petróleo* con 9 casos que equivalen al 9,5% de las disputas ambientales. Por las características del sector, sus impactos y conflictos se desarrollan desde su extracción y transporte hasta su colocación en los puertos de exportación, principal destino de esta actividad. Se destacan los conflictos de las minas de La Loma en la Jagua de Ibirico (Cesar), todos relacionados con la empresa Drummond (EEUU); y la mina de El Cerrejón en La Guajira, donde tienen presencia BHP Billiton (Australia), Anglo American (Sudáfrica) y Xstrata (Suiza).

En el tema petrolero se destacan los casos emblemáticos de la exploración en territorio U'wa, donde ha habido presencia de la Oxy (EEUU), Repsol (España) y ahora Ecopetrol (Colombia). El permiso de exploración y explotación de petróleo y gas fue cancelado por presión de las comunidades y las autoridades ambientales en San Andrés Islas. Asimismo, cabe resaltar el caso de Pie de Monte Llanero en Meta, proyecto que se inició en 2011 y en el que actualmente se encuentran operando varias empresas, entre ellas, Ecopetrol, OXY (EE.UU.) y la British Petroleum Corporation (Gran Bretaña), por los continuos conflictos con las comunidades de la zona y la reciente consulta popular en Tauramena que rechazó el uso de su territorio con fines extractivos.

Le siguen en importancia, como sectores causantes de conflictos ambientales, la *extracción de biomasa*, que representa el 14% de los conflictos, destacándose 6 disputas asociadas al cultivo de palma: Hacienda Las Pavas, Bellacruz, Curu-

badó y Jiguamiandó, Chocó, La Macarena, el acaparamiento de tierras baldías y la pérdida de manglares en Tumaco. Este sector se ha caracterizado en general por sus altos niveles de violencia. La caña de azúcar, las plantaciones forestales y la explotación de bosques también son otras actividades generadoras de conflictos.

En términos de *infraestructura* (9%), ha habido una dinámica creciente de construcción de puertos y carreteras, y se espera que para los próximos años este último sector se vuelva aún más conflictivo por la denominada IV Fase del Plan de Concesiones Viales, que implica grandes proyectos de este tipo. Para estos años evaluados, los principales proyectos generadores de conflictos en esta área son los *puertos* y la construcción de vías.

Los proyectos o actividades relacionadas con la *generación de energía eléctrica* representan el 8%, explicados por la construcción y operación de 7 hidroeléctricas (7%). Se resalta que este tipo de proyectos son altamente impactantes por las implicaciones socio-ambientales de la zona inundada y el desplazamiento de personas, cultivos y bienes patrimoniales. Por ejemplo: estos 7 proyectos inundan un área total de 107000ha y afectan a 73000 personas. Igualmente la inversión que se hace para el desarrollo de estos proyectos de infraestructura es cuantiosa. Los mismos suman un total de US\$ 10376 millones. Por su nivel de impacto y el grado de intensidad del conflicto, hay que destacar 4 casos: El Quimbo, Hidrosogamoso, Urra II e Hidroituango.

Finalmente, el manejo de residuos sólidos, el turismo y la fumigación aérea recogen el 6% restante de los conflictos.

Las empresas generadoras de conflictos

Un aspecto importante de la caracterización de los conflictos ambientales es conocer las empresas responsables de los proyectos o actividades extractivas. La tabla 1 evidencia una alta relación entre los conflictos ambientales y el flujo de inversión extranjera (54% de los proyectos), siendo las empresas principalmente de Canadá,

Australia, Sudáfrica, y otros países europeos (54%). La Tabla 1 también identifica el tipo de empresas por sector económico generador de conflictos. Allí, se muestra que las empresas *extranjeras* se ubican esencialmente en *minería* y en exploración y extracción de *energía fósil*.

en muy pocas ocasiones, acciones de violencia.

Pero, igualmente, las empresas y fuerzas extractivas también despliegan estrategias y mecanismos para preservar, fomentar y mantener estas nuevas fuentes de acumulación de capital y extraer los recursos naturales requeridos para el desarrollo metabólico del proceso capitalista. Estas

Sector	Tipo de empresa u organización			Total
	Nacional	Extranjera	Mixta	
Aspersión aérea	1	1		2
Biomasa	26 Destacan: Grupo Daabon y Asocaña.	12	2	40
Energía fósil	22 Destaca: Ecopetrol,	48 Destacan <i>en carbón</i> : Drummond, Glencore, BHP Billiton, Xstrata. <i>En petróleo</i> : BP, Emerald Energy, Sinochen Corporation, Oxy, Repsol, YPF.	0	70
Generación de energía	11 Destaca: ISAGEN, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y Empresa de Energía de Bogotá (EEB)	4	1	16
Gestión del agua	3			3
Industria		1		1
Infraestructura	18	15		33
Minería	18 Destacan pequeños mineros y minería informal	47 Destacan: Anglo Gold Ashanti; B2 Gold, Grand Colombia Gold, Continental Gold, Cosigo Resources, Holcim, Medoro Resources, Rio Tinto, Solvista, Votorantim (Brasil)		65
Rellenos Sanitarios	4	2	1	7
Turismo	4	1		5
TOTAL	107	131	4	242
%	44,21%	54,13%	1,65%	100,00%

Tabla 1. Tipo de empresa generadora de conflicto por sector (Fuente: Cálculos nuestros trabajados a partir de la base de datos Univalle-EJOLT, Colombia)

Mecanismos de resistencia de las afectadas

Los impactos ambientales generados por los proyectos y actividades económicas extractivas, que afectan diferentes tipos de comunidades, generan a su vez distintos mecanismos y estrategias de resistencia y defensa de sus derechos y medios de vida. Dentro de estos mecanismos se encuentran las manifestaciones, los paros, los bloqueos, las gestiones institucionales, la defensa jurídica y,

estrategias combinan el marco legal, los estudios técnicos, las relaciones de poder y de política, las redes de influencia, la corrupción, y en bastantes ocasiones el uso de la violencia. El empresariado extractivista también utiliza el lenguaje del «desarrollo», del interés nacional, del beneficio general; y cuenta con el respaldo del Estado; ambos agentes están en contra de los intereses locales y de grupos específicos de población que defienden su cultura, sus valores y sus medios de subsistencia.

Como consecuencia de estas disputas el proyecto

puede continuar, puede paralizarse, pueden producirse acuerdos entre los afectados y las empresas generadoras del conflicto, puede haber compensaciones, pueden haber hechos de violencia que nieguen la otredad, la desaparezcan, la intimiden. También se puede recurrir al marco legal y jurídico existente para tratar de frenar, parar, o negociar el proyecto.

De tal manera, en este punto se analizan dos cuestiones centrales: i) Las acciones resultantes o consecuencias finales de los conflictos; y, ii) las herramientas jurídicas utilizadas por las afectadas para defender sus derechos.

Acciones resultantes o consecuencias finales de los conflictos

Se observa una gran bipolaridad en las soluciones o resultados finales de los conflictos: por un lado, un gran número de acciones son dirigidas a la negociación o al uso de instrumentos jurídicos; y por otro hay una tendencia a resolver los conflictos o demandas de las comunidades a través de las acciones violentas. Se ha observado que en 165 oportunidades se han usado herramientas pacíficas para resolver el conflicto incluyendo: demandas en los tribunales (27), criterios técnicos (27), aplicación de la norma (38), compensaciones (23) y negociación (50).

Pero al mismo tiempo se observan 151 casos donde las soluciones se han establecido por mecanismos violentos. En estos casos destacan amenazas a activistas (52), represión (33), desplazamiento (31), muertes en 22 de los casos y desapariciones en 13 de los casos analizados.

Además, es necesario destacar que 19 proyectos se han logrado detener por las luchas del movimiento social, alcanzando con ello una tasa de éxito del 20%, ya sea parcialmente o en forma definitiva. Esto es lo que se ha denominado «*triumfos de la justicia ambiental*».

Instrumentos legales usados por las afectadas

Dentro del marco jurídico utilizado por los afectados, destaca la normativa ambiental como el mayor recurso empleado con un total de 44 casos, representando casi la cuarta parte de los instrumentos usados en los diferentes

sectores.

Por su parte, las acciones dirigidas a defender el derecho a la consulta previa existente en la legislación colombiana son también un recurso legal importante; en este caso se hace referencia a la Ley 70 y al Convenio 169 de la OIT. Estos instrumentos obligan a que deban ser consultadas las comunidades afrodescendientes e indígenas antes del desarrollo de un proyecto. Las herramientas señaladas representan casi la tercera parte del total de instrumentos legales usados por las comunidades para defender sus intereses.

Por otro lado, destaca igualmente la Acción Popular que se presenta en 6 ocasiones donde se reconoce el caso del acueducto de Pance. También la Tutela ha sido usada en 7 ocasiones, una de ellas en el conflicto minero en Titiribí, Antioquia. Estos son dos instrumentos de la legislación colombiana que sirven para defender los derechos colectivos e individuales de las afectadas (Figura 4).

A nivel de Consultas Populares o Plebiscitos, se han presentado cinco, que buscaban detener los desarrollos extractivos en sus regiones: el del páramo de Santurbán, que resultó exitoso; la consulta en el municipio de Piedras que votó negativamente el uso de su territorio para actividades mineras en el proyecto; La Colosa; la consulta en Tauramena y en los municipios de Urrao y El Jardín (Antioquia). Estas iniciativas han generado un conflicto jurídico entre la autonomía de los municipios y el interés de la Nación frente al uso del territorio.

Por su parte, en términos de Acuerdos Municipales anti-extractivistas originados ya sea por las administraciones locales o los Consejos Municipales, son diecisiete los establecidos para detener proyectos: cinco en minería, seis en actividades de extracción de biomasa, cinco en energía fósil y uno de un relleno sanitario.

Ahora, si se detalla esta información por sectores económicos se encuentra lo siguiente. El sector que más ha usado instrumentos legales es el de la minería (29%), seguido de la energía fósil con 28%, la biomasa 16%, la infraestructura con un 8% y la generación de energía y rellenos sanitarios con 7% cada uno. El resto tienen participaciones minoritarias.

Conclusiones

América Latina, y Colombia en particular, han fomentado la senda neo-extractivista a través del diseño e implementación de una serie de políticas construidas por las tomadoras de decisiones y por un contexto internacional que las promueve. En ese sentido la especialización productiva no es un proceso natural, sino una construcción política mediante estrategias económicas, tributarias, subsidios, inversiones en infraestructura, cambios institucionales y mecanismos normativos y legales. De forma particular en Colombia la política minera, energética y agrícola impulsada por los últimos gobiernos han potenciado el modelo extractivo. Esto ha implicado un cambio drástico en el uso del suelo, que choca con los planes de vida de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, poniendo en riesgo la supervivencia de diversas especies, la disponibilidad de agua para consumo humano, las formas de vida y la supervivencia de comunidades urbanas y rurales. Muchas de las nuevas actividades se ubican en estos territorios generando o intensificando los conflictos ambientales.

En ese sentido se evidencia una clara relación entre la cantidad e intensidad de los conflictos ambientales y el modelo de desarrollo extractivo de los últimos gobiernos en Colombia. La apertura económica y la desregulación de la mayor parte de las actividades productivas y extractivas por parte del estado en la década del noventa sentó las bases del modelo extractivista, acrecentado en el presente siglo. Esta situación es alimentada por la dinámica de la Inversión Extranjera Directa y la flexibilización de las normativas para la asignación de territorios para el desarrollo de actividades extractivas y el debilitamiento institucional ambiental y minero-energético.

Desde esta perspectiva se han identificado 95 casos de conflictos ambientales. Los resultados e intentos de solución de estos conflictos muestran, por un lado, un gran número de acciones asociadas a medios pacíficos como la negociación, el estudio técnico o el uso de instrumentos jurídicos; y por otro, un gran uso de los medios violentos para resolver los conflictos. Esto muestra la bipolaridad de la sociedad colombiana que se enmarca en los extremos entre negociación, juridicidad y violencia.

Sin embargo, a pesar de la cantidad de eventos de movilización y resistencia y de los «triumfos» de la justicia ambiental, las voces de las comunidades son invisibilizadas sistemáticamente. Diversas personas han sido víctimas de represión, persecución, judicialización, amenazas, desaparición y asesinato. Por otra parte, en los lugares donde se han desarrollado los proyectos, miles de personas han visto desmejoradas las condiciones de vida en sus territorios por el aumento del costo de vida, las alteraciones de las cadenas productivas, la pérdida del trabajo, el rompimiento de tejidos sociales, las afectaciones irreversibles al ambiente y el aumento de conflictos sociales y ambientales. ■

Referencias

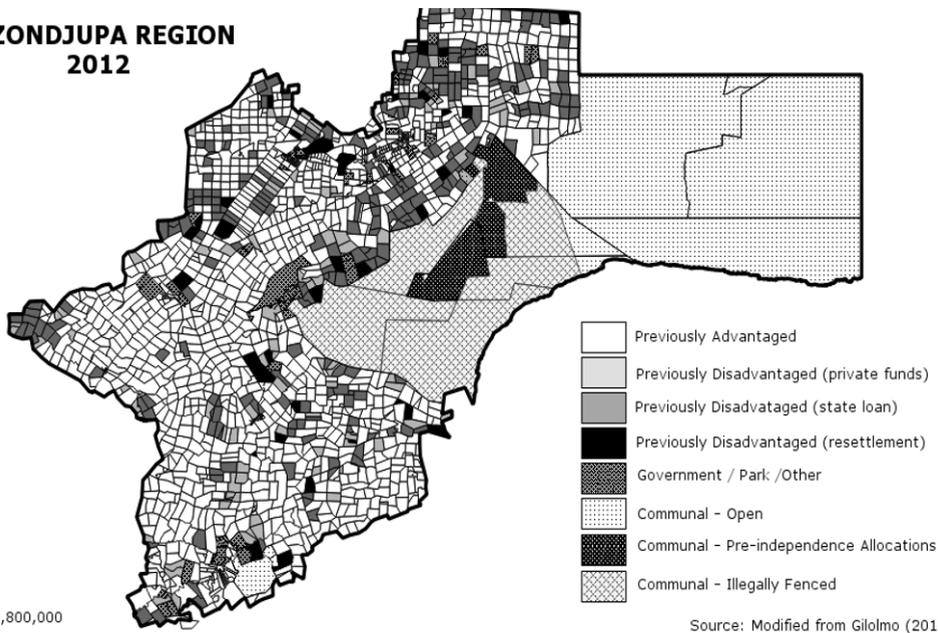
- AGÜERO, J. (2001). *Entre las demandas reivindicativas y ambientales: conflictos por el agua en la zona metropolitana Córdoba-Orizaba, Veracruz, 1990-2006*. Universidad Veracruzana.
- BOELEN, R., CREMERS, L. y ZWARTEVEEN, M. (2011). «Justicia Hídrica: acumulación de agua, conflictos y acción de la sociedad civil», pp. 13-25. En: Boelens, Cremers y Zwartveen (eds.). *JUSTICIA HÍDRICA: acumulación, conflicto y acción social*. Instituto de Estudios Peruanos y Fondo Editorial Universidad Católica del Perú, Lima.
- EJOLT (2014). Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade. Página Web: www.ejolt.org. Consultada: X/02/2014).
- GARCÍA-CANCLINI (1990). *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Grijalbo Editorial, México.
- GRASA, R. (1994). «Los conflictos «verdes»: su dimensión interna e internacional». *Ecología Política* 8, Barcelona.
- KOUSIS, M., (1998), Protest-Case Analysis: A Methodological Approach for the Study of Grassroots Environmental Mobilizations. *The Working Paper Series*, No. 570. Center for Research on Social Organization, Department of Sociology, University of Michigan, <http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/51334/1/570.pdf>.
- MOHAI, P., PELLOW, D. and TIMMONS, R. (2009). Environmental Justice. *Annu. Rev. Environ. Resour.* 34, 405-430.

Los colores de la tierra. Permanencia y discontinuidades del Apartheid en Namibia

Pablo Gilolmo Lobo*

Palabras clave: Namibia, apartheid, reparto de la tierra, colonialismo, mercado

OTJOZONDJUPA REGION 2012



Mapa 1. Parcelación de la región Otjozondjupa. (Fuente: modificado de Gilolmo, 2014)

Namibia logró su independencia de Sudáfrica en 1990. En 1962 el gobierno sudafricano había encargado a la 'Odendaal Comission' un informe para el desarrollo económico, que concluyó con la propuesta de reorganizar la división del país entre tierras exclusivas para granjeros blancos y reservas de nativos (Werner, 2011: 28-30). Este sistema de apartheid (ya presente en lo que hoy es Namibia desde 1951) estaba destinado

a dar continuidad a un modelo de planificación que respondía a lo que podríamos llamar teóricamente racismo filosófico eurocentrado, articulado teórica e históricamente con criterios económicos y demográficos provenientes de la teoría del espacio vital de Friedrich Ratzel (Olusoga, 2004). En efecto, en el periodo de dominio de Alemania (1885-1919) la empresa colonizadora sobre la entonces conocida como South West Africa se planteó no sólo como mo-

* Investigador independiente (gilol99@hotmail.com)

vimiento geoestratégico frente a otras potencias, sino también como una forma de ampliar el territorio nacional ante el crecimiento demográfico. En el proceso se promovió la anexión militar de vastos territorios con el fin de establecer en ellos grandes granjas comerciales, y se procedió al desplazamiento de nativos y a su utilización como fuerza de trabajo (Olusogo, 2014).

Esta política continuó durante el mandato sudafricano obtenido después del Tratado de Versalles, promoviendo el desplazamiento de granjeros blancos desde la superpoblada provincia del Cabo y arrinconando cada vez más a las poblaciones nativas en las reservas (Botha, ver la pagina web ¹). La reorganización del apartheid del 'Odendaal Plan' indica cómo aquellos criterios económicos y raciales continuaron reciclándose después de la II Guerra Mundial. Además, estas políticas alcanzaron altos grados de oficialidad institucional. Si bien en los inicios de la colonización alemana existía una coexistencia en el espacio de los blancos asentados y los africanos, con el 'Odendaal Plan' se alcanzó la más escrupulosa separación, sancionada legalmente. En las zonas destinadas a granjas se establecía la absoluta exclusividad para las familias blancas, mientras que los africanos debían contar con un permiso expedido sólo en caso de ser trabajadores por cuenta de los terratenientes, que en la práctica tenían derechos de disposición incluso sobre sus vidas. Esta sistematización y burocratización del horror puede considerarse un exponente más del integrismo racionalista eurocéntrico.

El mapa 1 proviene de la investigación del autor para su tesis de máster en la University Of Namibia, que consistió en una caracterización espacial y análisis del reparto de la tierra en la región de Otjozondjupa en el año 2012, y una comparativa de la degradación ambiental entre distintos tipos de tenencia (Gilolmo, 2014). Esta región fue elegida para el estudio por ser representativa, al estar presentes dos tipos de tenencia de la tierra (comunal y privada) y algunas de las prácticas no reguladas (como el cercado ilegal por parte principalmente de agentes privados). Además, y sirviendo de precedente a los procesos

actuales, en la época del apartheid ya hubo planes de desarrollo que implicaban la privatización de tierras comunales. En esta región la actividad agraria principal es la cría de ganado bovino, y conviven grupos de procedencia europea, Herero y San.

La reforma de la tierra fue una de las principales motivaciones de la lucha de liberación (Botha, sin fecha) pero sus avances son muy limitados. La división entre tierras comunales y privadas continúa exactamente igual que antes de la independencia. En las tierras comunales los planes de desarrollo prevén, como ya se ha hecho en las regiones de Kavango, Ohangwena, Oshikoto y Omusati (Meijs, Hager Y Mulofwa, 2014), supeditar los derechos sobre la tierra a criterios económicos que conllevan su privatización, con el objetivo de homologar su actividad a la de las granjas privadas establecidas durante la colonización. Esta privatización tiene precedentes históricos con la administración sudafricana la cual, siguiendo las recomendaciones del 'Odendaal Plan', dividió y asignó a los africanos más pudientes parcelas de tierra para su desarrollo como granjas comerciales (ver «pre-independence allocations» en el mapa) (Werner, 2011). Al mismo tiempo, la privatización ha continuado después de la independencia a través del cercado y apropiación ilegal de tierras comunales (ver «illegally fenced on the commonage» en el mapa) (Odendaal, 2011; Werner, 2011). Los planes de desarrollo del gobierno, amparados por la cooperación alemana principalmente, pretenden ahora regularizar el cercado ilegal (MLR et altera, 2012:6, 28-29), avalando así la desposesión sufrida por los sectores de población rural menos adinerados. En consonancia con los postulados liberales más conocidos (p. ej.: Hardin, 1968), estos planes de desarrollo se justifican en parte en la necesidad impuesta por la degradación ambiental supuestamente agravada por la tenencia comunal de la tierra. Existen evidencias, basadas en el estudio de largas series temporales de índices de vegetación (NDVI), que cuestionan seriamente esta suposición. (cf. Gilolmo, 2014: 64-100).

En la zona privada («Tenure in private Land»)

¹ <http://www.namibweb.com/oden.htm>

resulta clara la importancia de la clase, el capital y el mercado de compraventa de tierras que, además de la raza, determinan la estructura de propiedad (los siguientes datos provienen de Gilolmo, 2014: 42-53). El 73,7% de las tierras privadas siguen perteneciendo a propietarios blancos (en azul en el mapa). Esto indica la permanencia del sesgo racial. El 26,3% restante se divide entre propietarios africanos de la siguiente manera: un 24% ha sido adquirido con fondos propios (private funds), un 63,9% ha sido adquirido gracias a créditos subsidiados por el estado (state loan), y un 12,1% (resettlement) corresponde a los programas de reasentamiento gubernamentales. Este reparto implica que un 87,9% (24+63,9) de las tierras accedidas por africanos desde la independencia pertenecen a personas con un grado de capacidad económica entre medio-alto (créditos subsidiados) y muy alto (fondos propios). Sólo el 12,1% de la tierra repartida ha sido puesta en manos de la población en situaciones económicas más precarias (ibid.). Esto indica que cuando las desigualdades raciales son superadas lo hacen en favor de aquellos con capacidad para participar en el mercado de tierras, lo que alude a la clase y a la acumulación de capital, probablemente conectados con el favoritismo político. Es curioso que durante la investigación que dio lugar al mapa 1 no fuese posible hallar publicada representación alguna que diera cuenta del reparto de la tierra en función de categorías que permitiesen observar las particularidades descritas más arriba, a pesar de existir los datos y la capacidad para ello.

Discusión

Si bien en el pasado los criterios de la desigualdad se resumían fácilmente en el argumento de la diferencia racial, hoy en día esos mismos criterios siguen reciclándose bajo la apariencia de razones económicas de carácter técnico. Se atiende principalmente a la capacidad para pagar por la tierra (es decir, para obtener tierras de acuerdo a las leyes del mercado), y a la capacidad para producir. En la práctica estos dos criterios se unifican, y como indican los porcentajes de ac-

ceso a la tierra en función del estatus socio-económico, se favorece el acceso a aquellos con la capacidad de pagar por la tierra, asumiendo que éstos son quienes mayor capacidad tienen para obtener producción. La experiencia demuestra las fallas de esta lógica. Uno de los principales resultados indeseados del proceso redistributivo es que los nuevos propietarios no usan la tierra para producir, sino que la valoran como símbolo de estatus social (Shigwedha, 2005). Esto ocurre principalmente entre los propietarios que han adquirido sus tierras con fondos propios, es decir, precisamente los de mayor capacidad económica. Entre los que han adquirido tierras a través de créditos subsidiados, los niveles de morosidad son elevados. (Duddy, 2012). Además, la suposición de que el modelo de producción implantado por los europeos sea el mejor posible es cuestionable. Por lo tanto, también es cuestionable la necesidad de equiparar a aquel toda actividad agrícola, más aún al existir estudios que cuestionan que la privatización estimule la inversión y la productividad (Moyo y Chambati, 2012). El modelo colonial de granjas comerciales se puso en marcha y se mantuvo gracias a una enorme cantidad de subsidios, aparte de contar con otras ventajas importantes, como la gratuidad de la tierra y de la fuerza de trabajo de las que se benefició. En la actualidad, en ausencia de éstos subsidios y ventajas, este modelo atraviesa dificultades para poder mantenerse.

Pero aunque los nuevos propietarios sí llevaran a cabo un buen aprovechamiento económico de las tierras adquiridas, o la privatización resultara en un aumento de las inversiones y de la productividad, lo que encontramos en el fondo de estos asuntos es una cuestión de valores. La lógica de que la tierra no debe pertenecer a quien no tenga por objetivo sacar el máximo beneficio de ella destila del mismo modelo de jerarquización racial y epistémica (Santos, 2014; Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007: 13-14), que existía bajo el apartheid. Puesto que este es un criterio colonial y capitalista que entiende la tierra como un bien exclusivamente económico, se infravaloran los otros aspectos que la tierra significa bajo una perspectiva africana. Muchos namibios asocian

el derecho a la tierra con el derecho a vivir dignamente en comunidad, lo que incluye, pero no se limita, a la producción de alimentos. Esto explicaría en parte que se compren tierras pero no se utilicen para producir, pero al mismo tiempo muestra un desvío respecto al valor de tierra en la cultura tradicional, desvirtuando su significación social y adaptándola al marco capitalista que asocia estatus social y propiedad privada. Los valores coloniales se justifican actualmente gracias a la asepsia objetiva de los balances de negocio (que sólo tiene en cuenta la producción) en lugar de basarse en el racismo científico explícito como ocurría en el pasado. En otras palabras, la novedad es que hoy el negro puede redimirse de su condición de negro (y todo lo que ello implica bajo los postulados del racismo sistémico) a condición de que sea rico. Se puede aventurar que el criterio económico como única legitimación posible del derecho a vivir dignamente presenta una continuidad con el integrismo racionalista mencionado anteriormente, tanto en sus orígenes como en sus consecuencias materiales. ■

Referencias

- BOTHA, C., *The Odendaal Plan: «Development» for colonial Namibia*, <http://www.namibweb.com/oden.htm> consultado el 11 de octubre de 2014.
- CASTO-GÓMEZ, S. y GROSFOGUEL, R. (2007), *El Giro Decolonial. Reflexiones para una Diversidad Epistémica Más Allá del Capitalismo Global*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
- DUDDY, JM. (2012), Millions of Loans in Arrears. Agribank Exceeds Targets. *The Namibian*, 5 de diciembre. http://www.namibian.com.na/index.php?archive_id=103171&page_type=archive_story_detail&page=5 consultado el 7 de diciembre de 2012.
- GILOLMO, P. (2014), *Land Reform In Namibia Spatial Analysis And Land Degradation In The Otjozondjupa Region*. Tesis de Máster en Geografía presentada para la University of Namibia.
- HARDIN, G. (1968), *The Tragedy of the Commons*. Science New Series, vol 162, p. 1243-1248.
- MEIJS, M., HAGER, C.P. Y MULOFWA, J. (2014), Local Level Participatory Planning, an Approach Towards Tenure Security and Development Planning. *Paper prepared for presentation at the «2014 World Bank Conference On Land And Poverty»*. The World Bank - Washington DC, March 24-27. <http://www.oicrf.org/document.asp?ID=13952> consultado el 6 de agosto de 2014.
- MLR, KFW, GOPA Y AMBERO (2012), *Road Map - «Support to Land Reform and Infrastructure Development in Communal Areas» Programme*. Windhoek: MLR.
- MOYO, S. Y CHAMBATI, W. (2012), Unlocking the Economic Potential of Communal Land: Regional/African Experiences. EN RESEARCH DEPARTMENT-BANK OF NAMIBIA (Ed.), *Bank of Namibia 14th Annual Symposium 2012. Unlocking the Economic Potential of Communal Land* (pp. 38-74). Windhoek: Bank of Namibia.
- ODENDAAL, W. (2011), *Land Grabbing in Namibia: A Case Study from the Omusati Region, Northern Namibia*, http://www.iss.nl/fileadmin/ASSETS/iss/Documents/Conference_papers/LDPI/82_Willem_Odendaal.pdf consultado el 11 de octubre de 2014.
- OLUSOGA, D. (2004), *Genocide & the II Reich*, <http://www.youtube.com/watch?v=O4OZ7Xc5pWQ> <http://www.youtube.com/watch?v=O4OZ7Xc5pWQ> consultado el 7 de mayo de 2012.
- SANTOS, B.S. (2014), Más Allá del Pensamiento Abismal: de las Líneas Globales a una Ecología de Saberes. EN SANTOS, B.S Y MENESES, M.P (Eds.), *Epistemologías del Sur (Perspectivas)* (pp. 21-66). Madrid: Ediciones Akal.
- SHIGWEDHA, A. (2005), Farms should not be seen as 'status symbol':Shangheta. *The Namibian*, 6 de julio. http://www.namibian.com.na/index.php?archive_id=13555&page_type=archive_story_detail&page=6170 consultado el 9 de agosto de 2013.
- WERNER, W. (2011), «What has happened has happened». *The complexity of fencing in Namibia's communal areas*. Windhoek: Legal Assistance Centre.

Postales del atlas de justicia ambiental

Cartografía de los conflictos socioecológicos en el Estado español

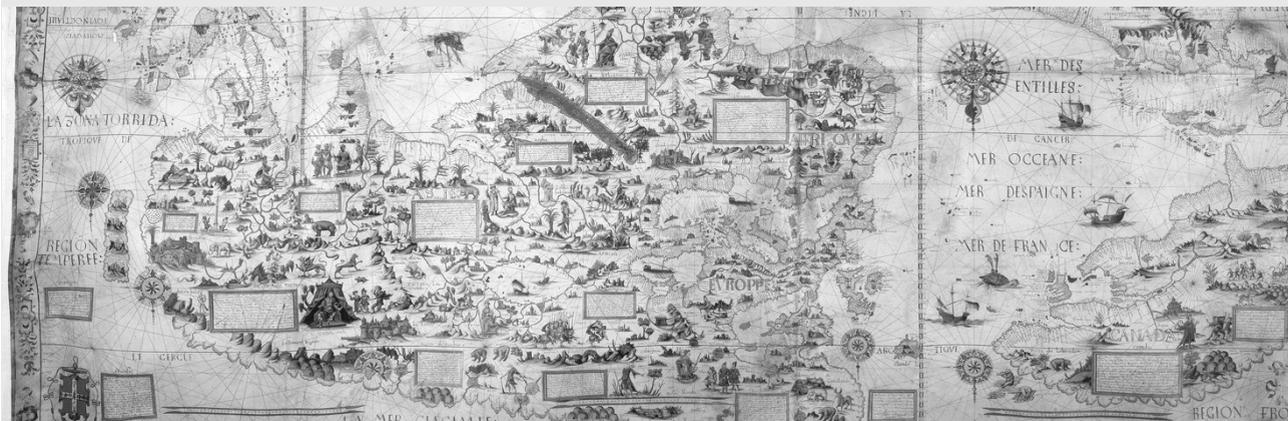
Amaranta Herrero Cabrejas

Conflictividad socio-ambiental en el Ecuador: un inventario de conflictos en el periodo 1982-2013

Sara Latorre, Katharine N. Farrell, y Joan Martínez-Alier

Comercio de biomasa y acaparamiento de tierra: nuevas dimensiones de las relaciones Sur-Sur

Lucía Argüelles, Leah Temper y Beatriz Rodríguez-Labajos



Cartografía de los conflictos socioecológicos en el Estado español

Amaranta Herrero Cabrejas*

El mapa presenta:

45 conflictos socioecológicos rastreados en el Estado español, del pasado y del presente, relativos a una gran diversidad de temáticas y con un variopinto repertorio de actores sociales involucrados, motivaciones, estrategias y tácticas desarrolladas, y resultados conseguidos. El mapa fue desarrollado en el marco del proyecto EJOLT.

Datos clave España

Población: 46.507.760 habitantes (el quinto país más poblado de la UE)

Extensión: 604.846 Km²

Tasa del Paro: 24,5%

Desigualdad: En 2012 fue el segundo país con más desigualdad social de la UE tras Letonia.

Metodología

La mayor parte de los conflictos documentados se rastrearon entre septiembre de 2013 y febrero de 2014. Se buscaba identificar aquellos conflictos socioambientales de relevancia histórica con gran repercusión mediática y los que habían desencadenado movilizaciones cuantitativa o cualitativamente significativas. Se consultó a figuras destacadas del movimiento ecologista del Estado español. En por lo menos quince de los casos mapeados se contactó con las portavoces de estas luchas y se realizaron entrevistas semi-estructuradas, presenciales o por teléfono. Estas entrevistas también sirvieron para ampliar la lista de conflictos. Se documentó el contenido y la evolución de estos conflictos mediante fuentes secundarias (principalmente prensa escrita). Se

identificaron más luchas de las que aparecen reflejadas en el mapa, pero para mantener el equilibrio interno del mapa, no se han incluido todas. Sin embargo, se ha intentado que, por lo menos, haya un ejemplo de lucha ilustrativa de cada tipología de conflicto.

Tendencias clave

En los casos analizados, y reforzando lo que ya se ha apuntado en el campo de la sociología ecológica (Semper, Martínez y García, 2007), se desprende que, en relación a la internalización de los imperativos ecológicos de esta era, el sistema político español se caracteriza por su notable retraso en relación a otros países europeos. Como ilustran muchos de los casos del mapa, frecuentemente existen grupos de la sociedad civil que asumen un rol motor en los conflictos ambientales para impulsar cambios en la legislación ambiental y contrarrestar así el efecto de tener un estado mayoritariamente anclado en anacrónicas concepciones sobre bienestar, desarrollo y ética, que parece no entender la magnitud, la gravedad y la urgencia de la crisis ecológica. Aun así, afortunadamente, en algunas ocasiones el sistema político español se muestra lo suficientemente receptivo para integrar cambios en la legislación ante las presiones de los grupos ecologistas. Por ejemplo, el amplio *movimiento anti-fracking* en Cantabria presionó al gobierno regional para prohibir la extracción de gas por fractura hidráulica en esa región (aunque pocos meses después de la prohibición el Tribunal Constitucional la cancelaría por considerar que se estaban invadiendo las competencias del estado central).

El factor europeo ha sido extremadamente importante para la resolución de varios conflictos en el Estado español. La *Directiva de Hábitats* y la *Directiva de Aves* han permitido que diversos grupos ecologistas acudan a estas instancias supraestatales para poner presión

* Dra. Amaranta Herrero, Genøk, Centre of Biosafety (amaranta.herrero@gmail.com)



externa sobre el gobierno español. Los resultados de esta estrategia no siempre han sido los mismos, pero en diversas ocasiones se ha conseguido que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas condene la negligencia y la permisividad del Estado español ante lo que algunos autores denominarían «crímenes ambientales» (White et al., 2010). Por ejemplo, en el conflicto de las explotaciones de carbón a cielo abierto en el Valle de Laciana (León), la dimensión europea resultó decisivo para visibilizar las ilegalidades que rodeaban la extracción de carbón a cielo abierto y para poner fin a la minería a cielo abierto en la región.

Otros casos rastreados en el mapa se han transformado en victorias para los grupos movilizados. Los motivos de estas victorias varían en función de los elementos contextuales de cada caso. Hay algunos en los que la presión popular ha obligado a la cancelación de algún proyecto y otros en los que otros factores contextuales (p. ej.: cambios en la legislación o la publicación de cierta información) han sido decisivos para frenar las amenazas y daños socioambientales.

Por último, cabe destacar la creciente importancia de los movimientos en defensa de los derechos de los animales. Y es que, como argumenta Jamieson (1998), la lucha por la liberación animal es parte de la ética ecológica. Las cada vez más numerosas y frecuentes movilizaciones contra sádicas tradiciones medievales como la del Toro de la Vega, en Tordesillas (Valladolid), o las despiadadas Becerradas de Algemés, (Valencia), son algunos ejemplos del auge de este tipo de luchas. Por mantener cierto equilibrio con el número y la tipología de conflictos, en este mapa solamente hemos incluido dos casos de conflictos de tinte animalista, que además presentan muchas diferencias entre ellas; la lucha por conseguir la prohibición de las corridas de toros en Cataluña y la lucha por proteger el lobo ibérico. Apostando por nuevas concepciones éticas sobre la justicia y el comportamiento moral, y fuertemente articuladas mediante las redes sociales, un creciente número de personas – con una fuerte presencia de jóvenes y mujeres – se están organizando para forzar el reconocimiento de algunos derechos de los animales no humanos con los

Conflictividad socio-ambiental en el Ecuador: un inventario de conflictos en el periodo 1982-2013

Sara Latorre, Katharine N. Farrell y Joan Martínez Alier

El mapa muestra la localización geográfica de nuestro inventario de 64 conflictos socio-ambientales en el Ecuador para el periodo 1982-2013. Los conflictos aparecen identificados por el tipo de actividad económica y el tipo de *commodity* a la que están asociados. Se resaltan las tres principales regiones geográficas del país – Costa, Sierra y Amazonía – cada una de ellas con una ecología e historia socio-política específica.

El mapa de la izquierda registra los conflictos durante el periodo neoliberal ecuatoriano, mientras que el de la derecha muestra aquellos correspondientes al periodo postneoliberal. De esta forma podemos visualizar muy fácilmente qué tipo de actividad económica y *commodities* tiene asociadas cada una de las regiones ecuatorianas, así como su desarrollo

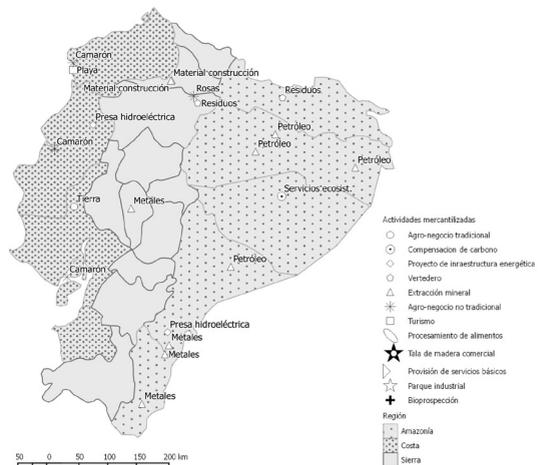
en el tiempo. Por ejemplo, vemos cómo la región amazónica se ha constituido principalmente como la frontera extractiva para las actividades minerales (petróleo y minería), mientras que la región Costa, se ha especializado en la producción de productos agroforestales. Estas tendencias anteceden al periodo estudiado (1980-2013) y se mantienen actualmente. Sin embargo, la región Sierra presenta una mayor diversificación de actividades económicas causantes de conflictividad socio-ambiental, tendencia que se mantiene en el tiempo.

Contexto

Ecuador es uno de los pocos países del Sur global y rico en recursos naturales que durante la actual



Nuevos conflictos en el período neoliberal (1982-2006)



Nuevos conflictos en el período post-neoliberal (2007-2013)

fase global del capitalismo ha hecho una transición desde un modelo de desarrollo neo-liberal a uno post-neoliberal. Desde el año 2007, Ecuador viene implementado un nuevo régimen de política pública encaminado a restablecer el rol del estado en la distribución de riqueza y en la redefinición de la relación entre estado y capital. Asimismo, este país andino es un referente en relación a las luchas de clase vinculadas a la extracción y explotación de los recursos naturales, por lo que resulta un caso de estudio muy interesante para analizar la dinámica de la conflictividad socio-ambiental.

Metodología

Se realizó un inventario de conflictos ocurridos durante el periodo 1980-2013, el cual corresponde con la actual fase global del capitalismo. Esta fase capitalista se caracteriza, siguiendo a David Harvey, por un incremento en los procesos de «Acumulación por Desposesión». Se consideran tanto los procesos de despojo por apropiación de recursos naturales para servir de insumos en el modo de producción capitalista así como por degradación, proceso que igualmente facilita el proceso de acumulación del capital. Los 64 casos, nos permiten incluir las principales *commodities* así como realizar un análisis sistemático identificando patrones comunes y diferencias entre ellos. La recolección de los casos se ha basado en una combinación de fuentes secundarias (académicas y literatura gris) y fuentes primarias procedentes de diversos trabajos de campo de la primera autora durante el periodo 2004-2013.

Tendencias clave

Durante los últimos 30 años, Ecuador se ha mantenido como exportador de *commodities* para la economía mundial, aunque diversificando el tipo de exportaciones. En este periodo, se ha convertido no sólo en exportador de materias primas tradicionales (banano, petróleo) y no tradicionales (camarón, flores), sino también de exportaciones «virtuales» como secuestro de carbono y otros servicios ambientales. Asimismo, muchos de estos procesos de acumulación nacional y transnacional del capital se han dado a través de la externalización de los costos sociales

y ambientales, principal mecanismo de integración económica «competitiva» para muchos países ricos en recursos naturales del Sur global.

A nivel local, esta forma de integración económica exhibe un patrón bien definido de impactos: privatización y contaminación de los comunes, conllevando en algunas regiones el deterioro del ambiente habitado, desplazamientos y una reducción en el acceso y uso de los recursos naturales por parte de la población local.

Los principales grupos afectados por estos procesos de «acumulación por desposesión», y resistiendo a ellos, son los sectores pobres en ingresos, principalmente rurales y discriminados por cuestiones étnico-raciales. Sectores sociales que dependen de forma directa de los recursos naturales para satisfacer sus necesidades básicas. Las ONGs, también juegan un rol clave en el acompañamiento de estas luchas.

Se identifican tres demandas principales que varían en función del tipo de actividad, pero no en el tiempo: a) en relación a proyectos de grandes infraestructuras, expansión de las fronteras mineras y de recursos forestales se ha mantenido una oposición firme acompañada de la exigencia de su derecho a la toma de decisiones sobre intervenciones que les afecten; b) cuando las fronteras de *commodities* se han agotado y degradado, la principal demanda ha sido la restauración ambiental de éstas; c) en el sector agro-alimentario la principal exigencia ha sido mejores estándares ecológicos y sociales y priorización de las funciones sociales del ambiente sobre los intereses privados del capital. Estas demandas se han enmarcado en un lenguaje de derechos humanos.

En relación a los resultados de los conflictos, a grandes rasgos, ha habido un leve progreso en las condiciones laborales en el periodo post-neoliberal sobre todo en el sector agro-alimentario, pero en los sectores extractivos no se ven grandes avances. La diferencia es que en el periodo post-neoliberal el Estado ecuatoriano ha empezado a jugar un rol más directo en el proceso de acumulación y en la desarticulación de la protesta. A través de una combinación de inversiones sociales (financiadas por las exportaciones de las materias primas) y políticas de carácter coercitivo, éste ha podido fortalecer el estado central, a la vez que aislado a los «defensores ambientales» del resto de la sociedad ecuatoriana, sacrificando de este modo la legitimidad democrática en los lugares de extracción. ▀

Comercio de biomasa y acaparamiento de tierra: nuevas dimensiones de las relaciones Sur-Sur¹

Lucía Argüelles, Leah Temper, Beatriz Rodríguez-Labajos

Campesinas y pastoras en África están afrontando una nueva corriente de desposesión debido al renovado interés por parte de corporaciones y actores financieros en inversiones en las «4 efes» – por *food* (comida), *feed* (forraje), *fuel* (combustibles) y *fbre* (fibras), en inglés –. El comercio de biomasa originado por la creciente desconexión espacial entre el lugar de consumo de la biomasa y el lugar donde se sienten los impactos provocados por su extracción y producción provoca conflictos socio-ambientales, principalmente en los lugares de extracción, debido a la mala distribución de costes y beneficios o a la exclusión de las poblaciones locales en las tomas de decisiones.

El primer mapa muestra conflictos por el acceso a la tierra en África con inversionariado proveniente del llamado Sur Global. Frente a la concepción clásica de las relaciones Norte-Sur, la emergencia de países del Sur Global, junto con cambios en el metabolismo global de consumo de biomasa, están aumentando la relevancia de las relaciones comerciales Sur-Sur². La localización de los conflictos en el continente africano se sobrepone al mapa del HANPP (Apropiación Humana de la Productividad Primaria Neta por sus siglas en inglés). HANPP es un indicador

que muestra el grado de colonización humana de ecosistemas (Imhoff, et al., 2004). Altos valores de HANPP (apropiación) están asociados con la pérdida de complejidad y diversidad de los ecosistemas. Por ejemplo: bosques que se transforman en cultivos de soja tienen altos índices de HANPP. El segundo mapa muestra el HANPP incorporado (e-HANPP) que evidencia la deslocalización entre extracción y consumo – el indicador considera qué parte de esa apropiación es exportada y qué parte es extraída en otro lugar y luego apropiada a través de importación –³. El mapa del e-HANPP muestra los países que son importantes exportadores e importadores de biomasa (autosuficiencia calculada como e-HANPP producido en el territorio del país menos e-HANPP consumido), pero muchos conflictos de acaparamiento de tierras son causados precisamente por la entrada de nuevos agentes que anteriormente no participaban en el comercio de biomasa – de un lado importadores como India y China (que antes se auto-abastecían de cereales) y por otro lado países Africanos, que no participaban en el comercio internacional de biomasa a gran escala.

Contexto

Desde la era colonial, el Sur ha exportado enormes cantidades de cultivos a precios bajos. El boom del consumo de materiales desde los 70 ha causado una expropiación aún mayor en

1 Este texto expande los contenidos del siguiente artículo: “Rodríguez Labajos, B., Temper, L., Argüelles, L., 2015. Neue Spieler im Kampf um Land [New players in contemporary land grabbing] in ‘Atlas der Globalisierung. Weniger wird mehr. Der Postwachstumsatlas’ (Le Monde diplomatique/Kolleg Postwachstumsgesellschaften, Ed.): Berlin.”

2 El mapa se ha realizado extrayendo los conflictos por acceso a la tierra con inversión proveniente del Sur Global de la base de datos del EJOLT

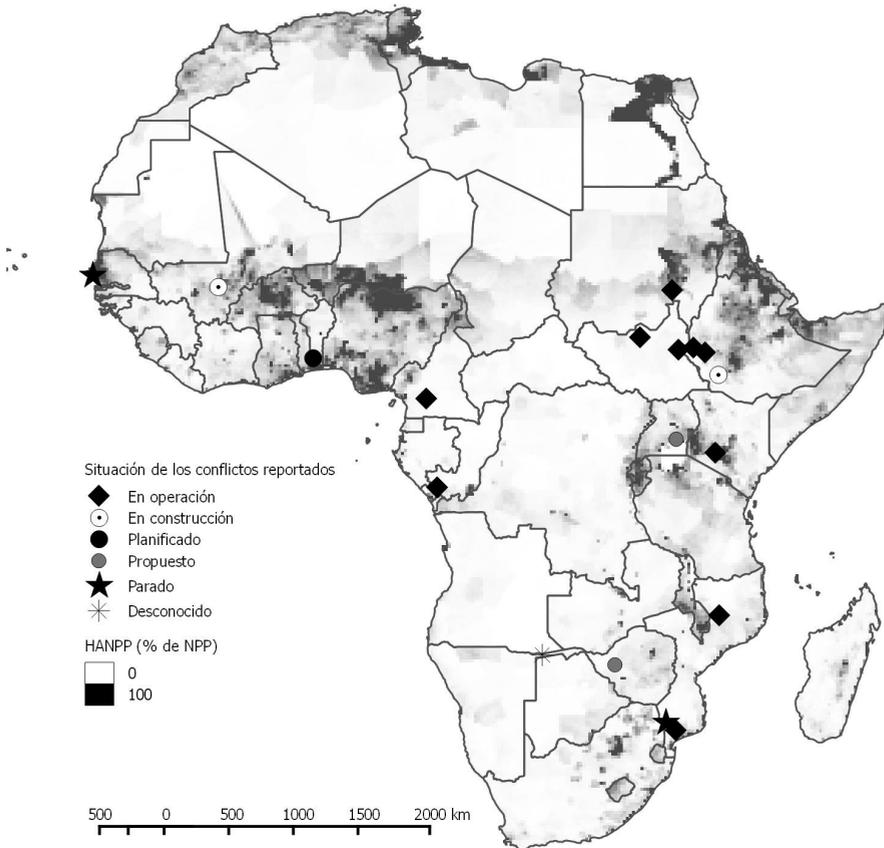
3 La metodología de cálculo del HANPP y del embodied-HANPP puede consultarse en Erb et al. 2009.

los países pobres por parte del inversionariado internacional y las élites nacionales, con el consentimiento por parte de los Gobiernos. Las relaciones comerciales, lideradas tradicionalmente por el Norte, han tenido consecuencias nefastas en la subsistencia de poblaciones y en el medio ambiente, y se ha convertido en un elemento estructural de la desigual economía globalizada.

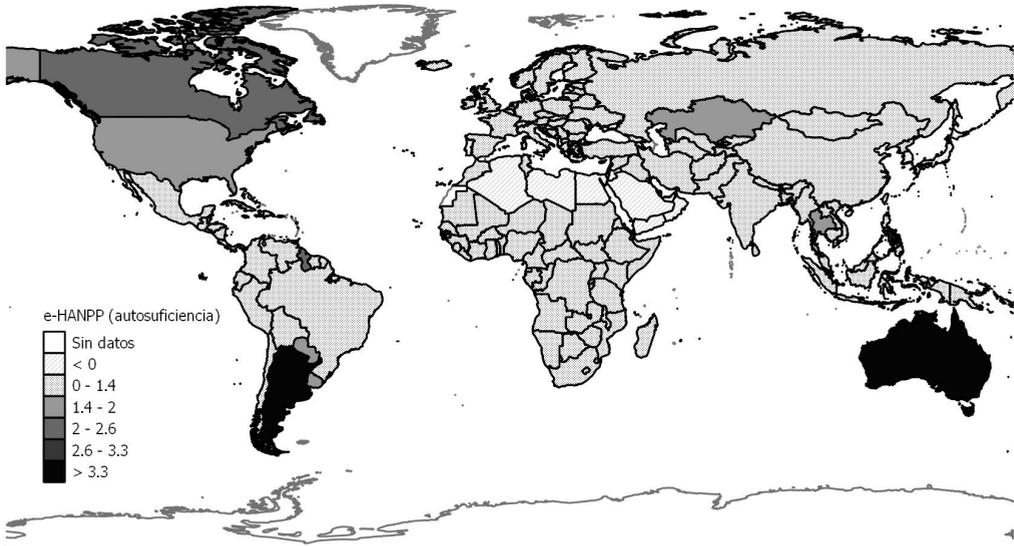
Tendencias clave

Los nuevos patrones de desconexión espacial entre los lugares de producción de biomasa y los puntos de consumo ponen en cuestión la narrativa clásica Norte-Sur como única explicación.

El crecimiento de la población, el aumento de la demanda de agrocombustibles y el creciente consumo de carne en Asia han modificado el metabolismo global de biomasa y sus respectivos flujos de producción y comercio. Aunque las dimensiones exactas del renovado fenómeno de acaparamiento a escala global se desconocen, no hay duda de su escala masiva. Las estimaciones se mueven entre los 33 y los 200 millones de hectáreas (las áreas de Finlandia y México respectivamente) adquiridas desde 2001. Lo que resulta novedoso es que muchos países históricamente no involucrados en el acaparamiento han entrado recientemente en el juego, como China, India, Corea del Sur, Brasil e incluso Egipto. Esto



Mapa 1. Conflictos reportados en la base de datos de EJOLT (ejolt.org). (Fuente: Datos de HANPP como %NPP (apropiación humana expresada como porcentaje de la productividad primaria neta) descargada del SEDAC (NASA) disponible en <http://sedac.ciesin.columbia.edu/data/set/hanpp-percentage-net-primary-productivity>. Ver Imhoff et al. 2004 para más información.)



Mapa2. Datos de autosuficiencia medida en términos de e-HANPP (e-HANPP producido - e-HANPP consumido) proporcionados por Karl Erb. (Fuente: Ir a Erb et al., 2009 para más información sobre el indicador.)

incluye nuevos agentes importadores (países densamente poblados como China e India), que están aumentando rápidamente las importaciones de biomasa, y también nuevos exportadores, que incluyen países del África Sub-Sahariana y asiáticos. África tiene 10 veces más superficie que India, pero ésta tiene 200 millones de personas más que el continente africano. El inversionariado del Sur presume de hacer negocios basados en los principios G77 de la cooperación Sur-Sur, que incluyen igualdad, solidaridad, mutuo desarrollo y complementariedad. Mientrastanto no dejan de publicarse casos de desposesión vividos por las poblaciones afectadas. ¿Es el modelo Sur-Sur de desarrollo una forma renovada de colonialismo, quizás más amable y suave, pero desequilibrada igualmente?

Un ejemplo es Brasil, que a la vez que protege su mercado interno de tierra de la «extranjerización», se ha mantenido activo en la expansión fuera de sus fronteras. En una de estas expansiones, las agencias de cooperación de Brasil y Japón han promovido el programa ProSavana

en Mozambique, que pretende industrializar las áreas agrícolas de 14 millones de hectáreas repartidas en 19 distritos. Otro caso conocido es el de Karaturi Global, una de las empresas de flores más grandes del mundo. En 2008, la compañía india firmó un acuerdo con el gobierno de Etiopía en el que éste le cedía 300.000 hectáreas de tierra fértil en la región de Gambela para cultivar cereales y aceite de palma. Los conflictos con la población local surgieron por el desacuerdo con las propuestas de compensación y relocalización de habitantes y de pastoras que habitaban esa zona. La población Anywaara ha sufrido represión y violencia por parte del estado, que está al servicio de los agentes inversores. Pese al apoyo institucional, Karaturi sólo logró sembrar el 5% de la tierra concedida en los primeros 3 años (Davison, 2013)

La entrada de nuevos países en el mercado global como abastecedores de biomasa ha venido de la mano de confrontaciones y problemas; las trayectorias de empresas de India a Etiopía, incluyendo el ambicioso proyecto de Karaturi o

el de Saudi Star, son sólo los fracasos más espectaculares dentro de más de 500 proyectos cancelados por el gobierno etíope. El mapa muestra también el estado de los proyectos; como puede observarse, muchos han sido parados o no siguen adelante por problemas económicos, etc. Algunos países ya están revisando sus políticas de desarrollo rural pero siguen apostando por una visión de agro-negocio, a pesar de que la productividad de las pequeñas explotaciones está comprobada (GRAIN 2014).

Conclusión

Contrariamente a los patrones históricos coloniales, el acaparamiento de tierras hoy en día es un fenómeno Norte-Sur y Sur-Sur. Esto es parte del giro hacia una configuración más policéntrica del poder, causada en parte por los cambiantes modelos de producción y consumo. La presión sobre los recursos naturales provocada por el aumento de la clase media en los países del Sur Global viene acompañada de un aumento de los conflictos ambientales y de las luchas por una distribución más equitativa de los recursos. La biomasa extraída en términos absolutos aumenta, así como las cantidades que son comercializadas. Pero las fronteras finitas del planeta hacen necesaria una convergencia de los movimientos decrecentistas en el Norte con el movimiento de Justicia Ambiental promovido por poblaciones marginalizadas o indígenas del Sur. ■

Referencias

- DAVISON, W. (2013), "Ethiopia's Farm Investment Plans Falter on Flood Plain", 24 de Noviembre, <http://www.bloomberg.com/news/2013-11-24/ethiopian-drive-to-lure-farm-investment-founders-on-flood-plain.html>
- ERB, K. H., KRAUSMANN, F., LUCHT, W. y HABERL, H. (2009), Embodied HANPP: Mapping the Spatial Disconnect between Global Biomass Production and Consumption, *Ecological Economics* 69 (2), p. 328-34.
- GRAIN (2014), "Hungry for Land: Small Farmers Feed the World with Less than a Quarter of All Farmland", <http://www.grain.org/article/entries/4929>.
- IMHOFF, M. L., BOUNOUA, L., RICKETTS, T., LOUCKS, C., HARRISS, R. y LAWRENCE, W.T. (2004), HANPP Collection: Human Appropriation of Net Primary Productivity as a Percentage of Net Primary Productivity. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). <http://dx.doi.org/10.7927/H4W66HPJ>

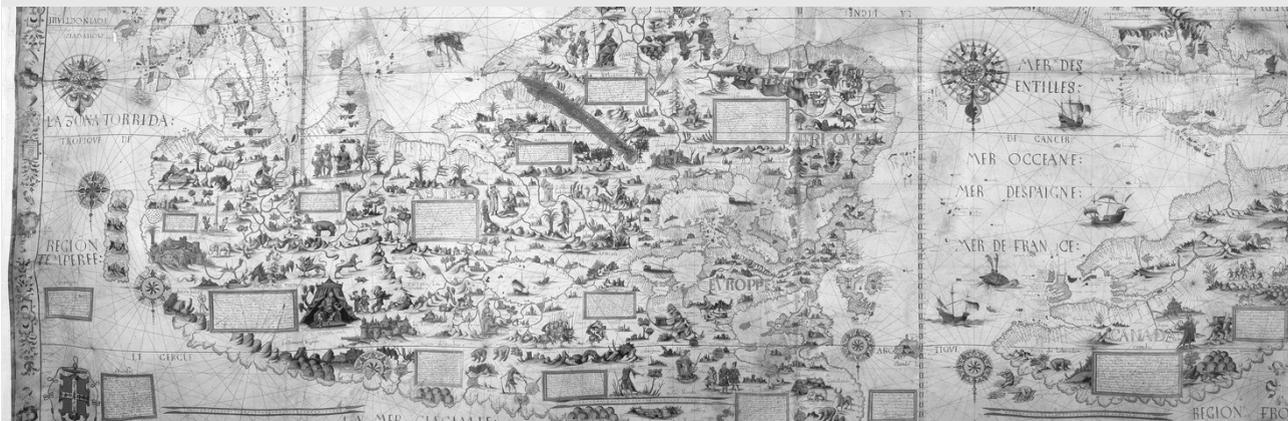
Redes de resistencia

New York: un paso más del movimiento contra el cambio climático

Josep Maria Antentas

El petróleo y el agua en el río bidireccional

Kevin Buckland



New York: un paso más del movimiento contra el cambio climático

Josep Maria Antentas*

«El mundo es una escuela de multinacionales;
inexorablemente determinado por las leyes inmu-
tables de los negocios

El mundo... es un negocio»

Rich Man's World (1%), The Martyr,
Immortal Technique (rapero peruano presente
en las movilizaciones en New York)

La movilización de pasado 21 de septiembre en New York en ocasión de la Cumbre de la ONU sobre el cambio climático marcó un momento culminante del movimiento internacional contra el mismo. Más de 300.000 personas participaron en la *People's Climate March* (Marcha Popular sobre el Clima) en la que ha sido considerada la mayor protesta hasta la fecha sobre esta cuestión. La manifestación se insertaba en el marco de un día de acción global en el que se desarrollaron más de 2000 acciones, muchas de ellas simbólicas y otras más relevantes en más de un centenar de países. El día antes unas 2000 personas participaron en el foro *Climate Convergence* (Convergencia Climática) organizado por la coalición *System Change Not Climate Change* (Cambio Sistémico y No Cambio Climático) y la *Global Climate Convergence* (Convergencia Climática Global), que dio cabida a talleres y debates variados. El día posterior a la manifestación unas 2500 personas ocuparon Wall Street, en el marco de la acción *Flood*

Wall Street (Inunda Wall Street), que paralizó el tráfico y la circulación del corazón financiero de la ciudad durante varias horas. Más allá del éxito innegable de la movilización neoyorquina, ésta permitió poner encima de la mesa nuevos retos y dilemas del movimiento por la justicia climática.

Camino a New York

La movilización llegó cinco años después de la de Copenhague en 2009, también en ocasión de la Cumbre de la ONU sobre Cambio Climático, que lanzó a la palestra el movimiento internacional por la justicia climática, que volvería a expresarse, pero con menor fuerza, en Cancún (2010), Durban (2011) y Varsovia (2013). Nueva York llegaba como preparación, asimismo, de las movilizaciones previstas para la cumbre de Lima (a celebrar en diciembre de 2014) y París (2015).

El éxito de la protesta reflejó la relevancia del movimiento ecologista en los Estados Unidos y la vitalidad de diversas movilizaciones recientes, si bien ello no es óbice para que los Estados Unidos sean el segundo país del mundo (siendo China el primero) con la opinión pública más desinformada sobre el cambio climático. Así, sólo un 40% – según una encuesta de Pew Research – afirma considerar que la humanidad enfrenta una grave crisis climática (Bond, 2014). Pocos días antes de la Cumbre, la administración Obama, cuyo compromiso con el cambio climático no pasa de eslóganes genéricos y sigue comprometida con el extractivismo, había anunciado un freno a la aplicación de importantes partes de

* Profesor del Departamento de Sociología de la UAB y miembro del *Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball* (QUIT)-Institut d'Estudis del Treball (IET) (josepmaria.antentas@uab.cat)

su Plan sobre el Clima referidas al control de la emisión de carbón. Sin embargo, las activistas por la justicia climática han ganado en el país importantes batallas en los últimos años, como el cierre de plantas eléctricas de carbón, y han protagonizado relevantes luchas, en particular contra el *fracking* y también contra la construcción del gigantesco oleoducto Keystone XL, el cual pretende transportar petróleo crudo extra pesado desde Alberta (Canadá) hasta la Costa del Golfo para ser refinado y exportado, y se ha convertido en uno de los pulsos más importantes entre el movimiento por la justicia climática y ambiental y los partidarios del actual modelo. Luchas como las opuestas al *fracking* o al oleoducto Keystone, que muestran la existencia de un relevante movimiento ecologista, constituyen el telón de fondo en el que tuvieron lugar las protestas de Nueva York que permitieron la confluencia de campañas e iniciativas diversas, a modo de paraguas de iniciativas locales y sectoriales.

Desde 2011 la movilización contra el oleoducto ha ido en aumento, llegando a su punto culminante en febrero de 2013 cuando 50.000 personas se manifestaron en Washington D.C. La administración Obama no ha dado aún la aprobación definitiva al proyecto, si bien un informe del Departamento de Estado a comienzos de 2014 daba luz verde al mismo. La imparcialidad del informe, sin embargo, fue puesta de manifiesto al comprobarse que la firma que realizó el estudio de impacto ambiental sobre el que se basa el informe oficial, *Environmental Resources Management (ERM; Gestión de Recursos Ambientales)*, estaba en nómina de la firma canadiense TransCanada, impulsora del oleoducto. Entre los opositores al proyecto han destacado los pueblos nativos de Norteamérica, pues parte del oleoducto atraviesa tierras que las Lakota (Sioux) reivindican como suyas. Aunque el recorrido del oleoducto no cruza ninguna de las seis reservas oficiales de Dakota del Norte y del Sur, sí lo hace por tierras en disputa que las Sioux consideran suyas y que fueron reconocidas como tales en el tratado de Fort Laramie en 1868 que debía establecer la Gran Reserva Sioux, y que finalmente fue dividida en seis partes (Ward, 2014).

La propaganda oficial favorable al oleoducto ha buscado presentarlo como una inversión generadora de puestos de trabajo, útil para relanzar la economía de un país en crisis. Aunque esta argumentación es apoyada por la principal central sindical norteamericana, la AFL-CIO, los estudios disponibles muestran lo contrario. Así, según un informe de 2014 del *Global Labour Institute* (Instituto Global del Trabajo) de la Universidad de Cornell, se crearán entre 2500 y 4659 puestos de trabajo directos, muy lejos de los 20.000 empleos directos prometidos.

También las luchas contra el *fracking* han sido relevantes en los Estados Unidos y en Canadá en consonancia con el ascenso mundial de las protestas contra el mismo. Estados Unidos ha sido el epicentro de las coordinaciones globales contra el *fracking*, con el lanzamiento en septiembre de 2012 del primer Global Frackdown a iniciativa de Food and Water Watch, en el marco del cual tuvieron lugar 200 acciones de protesta en 20 países, y de una segunda jornada en octubre de 2013, en la que se desarrollaron más de 250 acciones en 30 países. La cita de Nueva York llegaba así en vísperas del tercer Global Frackdown que tuvo lugar el 11 de octubre de este año.

¿Capitalismo verde o justicia ambiental?

La manifestación del día 21 fue organizada por una amplia abanico de grupos entre los cuales cogieron preeminencia las grandes ONGs más institucionales y más ligadas al *establishment*, destacando el peso del movimiento *350.org*. Al mismo tiempo la organización *Avaaz*, de amplísimos recursos económicos obtenidos mediante donaciones y que se define como una «organización cívica global», financió por su cuenta anuncios propagandísticos de la manifestación en el metro de Nueva York, con lemas que trivializaban el contenido de la protestas (*¿Qué atrae a hipsters y banqueros en la misma manifestación?*) y estaban destinados a buscar las simpatías de las clases medias altas (Rugh, 2014). Varios líderes polí-

ticos como Ban Ki Moon, secretario general de la ONU, la apoyaron, e incluso Obama envió un *tweet* expresando sus simpatías. No es extraño, pues, que todo el proceso preparatorio reflejara importantes tensiones entre grupos activistas de base y por la justicia ambiental, de un lado, y algunas grandes ONGs y organizaciones comunitarias y barriales por el otro. Todo ello levantó varias críticas de diversos autores y activistas ecologistas, como Hedges (2014), que consideraron que la marcha estaba dominada por partidarios de un «ecologismo liberal» favorable a las políticas del capitalismo y la economía verde y que, más que una acción de protesta, en realidad corría el riesgo de ser instrumentalizada por la administración norteamericana.

Este tipo de críticas señalaron problemas reales de la *People's Climate March*, pero sería un error considerar que ésta estuvo dominada por los discursos favorables a la economía verde. Su composición fue muy variada y plural, con una visibilidad relevante de pueblos indígenas y comunidades empobrecidas (Manahan, 2014). Decenas de pequeños cortejos de luchas y campañas locales y sectoriales poblaron la protesta que, bajo el *leitmotiv* general de combatir el cambio climático, ofreció una plataforma global a luchas concretas (fracking, infraestructuras,...) pero conectadas por el mismo objetivo. La tonalidad general de la manifestación expresaba un peso importante de aquellos grupos que defienden la justicia ambiental y promueven transformaciones sustanciales de la sociedad para combatir el cambio climático. A pesar de la visibilidad externa conseguida por Avaaz, sus eslóganes no fueron los dominantes en la marcha (Bond, 2014; D'amato, 2014). La diversidad de la manifestación fue mucho más allá de los eslóganes pro-capitalismo verde de las organizaciones ligadas al Partido Demócrata y a la política «oficial».

Las controversias suscitadas en torno a la marcha plantearon la cuestión clave de la política de alianzas, la composición y las demandas del movimiento. Aquí aparece un doble

error simétrico en términos estratégicos. Por un lado, una visión estrecha en la construcción del movimiento, que rechaza una política de alianzas amplia con las grandes ONGs y los grupos ecologistas más institucionales y empuja hacia la construcción de un movimiento minoritario, con propuestas sólidas de cambio eco-social y de transformación del actual modelo económico, pero con poca capacidad para llegar a amplias capas de la población. Por el otro, las posiciones de grandes organizaciones como Avaaz que sugieren una alianza entre ecologistas y banqueros en favor de una salida de interés mutuo hacia un capitalismo verde, que toma por aliados a quienes son en realidad responsables de la crisis climática (Bond, 2014).

Finalmente, como ya pasó durante los años de auge del movimiento «antiglobalización» tras la cumbre de la OMC en Seattle en 1999, aparecieron debates sobre la articulación entre la manifestación «tradicional» (es decir una manifestación convocada legalmente, que transcurre por cauces previstos y con un contenido reivindicativo y festivo a la vez) y las acciones directas no violentas de desobediencia civil impulsadas por *Flood Wall Street* como el bloqueo del centro de Wall Street. Algunos detractores de la *People's Climate March* como Hedges (2014), contrapusieron la manifestación principal del día 21 con la acción directa del día siguiente impulsada por *Flood Wall Street*, considerando la primera como un carnaval bastante inocuo y la segunda como expresión de un genuino movimiento de cambio social y ecológico.

Este tipo de visión es estratégicamente reduccionista, pues más que ver ambas protestas como contrapuestas sería mejor considerarlas complementarias como, de hecho, hicieron los organizadores de *Flood Wall Street*. La acción directa minoritaria desconectada de las grandes movilizaciones de masas tiene poco impacto, es fácilmente criminalizable y aislable (Nayeri, 2014). En cambio, la combinación de amplias movilizaciones de masas con acciones de desobediencia civil permite desarrollar movimientos de

protesta sólidos, arraigados y a la vez desafiantes y con impacto mediático. Los mejores momentos del movimiento antiglobalización y sus grandes citas en Seattle o Génova (por citar algunas) partieron precisamente de esta complementariedad de tácticas (Antentas y Vivas, 2009). A veces, además, detrás de las formas de protesta convencionales y de desobediencia civil aparece una confusión entre las estrategias de luchas y el contenido programático concreto de las mismas, asociando erróneamente la acción directa con propuestas de transformación social profunda y las manifestaciones de masas tradicionales como sinónimas de demandas superficiales, cuando en realidad esto no es así: la radicalidad entre las formas de lucha no siempre implica radicalidad en los contenidos y viceversa.

Dilemas para el futuro

Como en la movilización de Copenhague en 2009, el éxito de la protesta de Nueva York plantea varios retos. Primero, mantener un movimiento amplio y plural en el que las posiciones más consecuentes en favor de un cambio de sistema vayan ganando peso por encima de los partidarios del «capitalismo verde» (La Botz, 2014). Segundo, articular de forma sostenida en el día a día un movimiento internacional por la justicia climática y ambiental que, más allá de los «tiempos-fuertes» de la movilización (durante las cumbres internacionales de la ONU), pueda facilitar las confluencias de las múltiples luchas ecologistas existentes. Tercero, enlazar la lucha contra el cambio climático con la búsqueda de una salida global a la presente crisis de civilización, que permita una confluencia de perspectivas entre los partidarios de la justicia ambiental y los movimientos de oposición a los recortes y los planes de austeridad, en favor de una verdadera «revolución epocal» (Bellamy Foster, 2013), es decir, de un cambio real de modelo económico y social. ■

Referencias

- ANTENTAS, JOSEF M y VIVAS, ESTHER. (2009). *Resistencias Globales*. Madrid: Editorial Popular.
- BELLAMY FOSTER, JOHN (2013), «The Epochal Crisis», *Monthly Review* 65 (5)
- BOND, PATRICK (2014), «Climate justice gets a new lease on life», *Climate and Capitalism*. 25 de Septiembre, <http://climateandcapitalism.com/2014/09/25/climate-justice-gets-new-lease-life/> *ate and Capitalism*.
- D'AMATO, PAUL (2014), «Against the climate march cynics», *Socialist Worker*. 25 de Septiembre, <http://socialistworker.org/2014/09/25/against-the-climate-march-cynics>
- GLOBAL LABOUR INSTITUTE (2014), *Pipe dreams? Jobs Gained, Jobs Lost by the Construction of Keystone XL*. Cornell: Cornell University.
- HEDGES, CHRIS (2014), «The Last Gasp of Climate Change Liberals», *TruthDig*, 31 de Agosto, http://www.truthdig.com/report/item/the_last_gasp_of_climate_change_liberals_20140831
- LA BOTZ, DAN (2014), «Climate Convergence Moves Us Forward, but Challenges Us to Create a Strategy», *New Politics*, 24 de Septiembre, <http://newpol.org/content/climate-convergence-moves-us-forward-challenges-us-create-strategy>
- NAYERI, KAMRAN (2014), «Moving Forward After the People's Climate March», *The Bullet-Socialist Project*.
- ROUGH, PETER (2014), «After the People's Climate March, it is time to demand more», *Climate and Capitalism*, 29 de Septiembre, <http://climateandcapitalism.com/2014/09/29/peoples-climate-march-time-demand/>
- WARD, BRIAN (2014), «Getting justice into the pipeline», *Socialist Worker*, 28 de Agosto, <http://socialistworker.org/2014/08/28/getting-justice-into-the-pipeline>.

desarrollar nuevas instalaciones industriales con calderas que permitirían procesar arenas bituminosas (que es la forma más tóxica de petróleo que existe en el planeta), para facilitar su carga y transporte en los barcos y poder enviarlo río abajo. Los grupos locales afirman que con el tremendo y creciente volumen de petróleo transportado a través del Valle de Hudson, es inevitable que haya derrames. De hecho, en el estado de Nueva York ya han habido al menos 4 descarrilamientos de trenes en solo 3 meses. Un derrame en cualquier lugar de este ‘oleoducto virtual’ sería un desastre para el río y las comunidades que habitan a su alrededor. Lo que no se derrama y, en cambio, se quema es también un desastre para nuestro clima y para todas nosotras. Se mire por donde se mire, es una situación en la que perdemos todas.

En el primer día de nuestra travesía, activistas locales de Albany nos enseñaron dónde se aparkan los largos trenes negros: a escasos metros de viviendas y parques. Los trabajadores del ferrocarril les llaman ‘trenes-bomba’ porque los vagones están sujetos a una gran presión durante su viaje y su carga es altamente volátil y explosiva. Una explosión en Albany (como la que sucedió en Lac Megantic (Quebec) en 2013) podría causar hasta 5000 muertos. Un trabajador del ferrocarril jubilado nos dijo que un desastre como ése es solo cuestión de tiempo, que aquello son bombas de relojería que se mueven sobre una infraestructura deficiente y en avanzado estado de descomposición. Durante todo nuestro viaje acampamos en la ladera del río y siempre estuvimos al alcance de esta amenaza. Una ruptura en un vagón podría generar una reacción en cadena de vagón a vagón, podría causar un derrame en el río y podría prender el río en llamas durante días.

Tiemblo al pensar en un derrame: petróleo hundiéndose donde los esturiones gigantes se alimentan en el fondo del río, o fracciones de petróleo más ligero flotando en la superficie en donde las garzas y los nenúfares se bañan bajo la luz de la luna, y dónde nadábamos nosotras. En pocos minutos, un derrame podría destruir décadas de esfuerzo colectivo dedicadas a regenerar la salud del río Hudson – ya que podría extender una capa pegajosa de llamas que iría hacia delante y hacia atrás en este río que fluye en dos direcciones. El río herviría bajo una manta mortal. Esto podría pasar en cualquier momento. ¿Por qué nos arriesgamos así, si lo que está en juego es tan

valioso? El agua de 250.000 personas proviene del río Hudson. El agua es un derecho, no un privilegio; es la base ecológica de todas las formas de vida, no una autopista desregulada al servicio de los beneficios corporativos. A medida que pasaban los días, me enamoraba más y más de la belleza de este río que fluye en dos direcciones; arriesgarse a perderlo me parecía insoportable.

Durante tres días nos aproximamos silenciosamente a Manhattan, cuyo resplandor veíamos en la distancia; los edificios crecían lentamente a medida que nos acercábamos. El lema que adoptamos para este viaje fue: «Todos vivimos río abajo», reconociendo con ello que todas las aguas del planeta están conectadas: circulan, se infiltran, precipitan, se congelan y fluyen a través de los tiempos. Lo que le hacemos al agua, nos lo hacemos a nosotras mismas. Nuestra llegada a Manhattan materializó nuestro dicho: no solo contemplamos una ciudad ubicada al final de un río, sino una ciudad localizada al final de una gigante y oculta infraestructura energética. Lo que se había mantenido invisible de repente nos rodeaba. La grandiosa inmortalidad de ‘esta ciudad que nunca duerme’ exige una revisión crítica cuando has sido testigo de los riesgos movilizados para mantenerla encendida y a todo trapo. En vez de una megalópolis hipermoderna y autónoma, ahora se parece más bien a una vieja caldera que necesita constantemente combustible para seguir adelante; una ciudad que nos ha esclavizado a merced de sus propias adicciones de diseño. Dentro de los edificios de cristal hay gente de negocios que está jugando peligrosamente con vidas que no le pertenecen, acumulando las ganancias de forma privada y colectivizando temibles riesgos. Mueven el dinero para atizar el fuego que evita que esta ciudad duerma, pero yo me acuerdo de lo que el huracán Sandy le hizo a esta ciudad-que-nunca-duerme cuando abrió los cielos de Nueva York a las estrellas.

Nuestra generación afronta una tarea que no debería ser subestimada, tal y como afirman las organizadoras de la Manifestación por el Clima en Nueva York; para cambiarlo todo se necesita a todo el mundo. Sabemos que este planeta está cambiando – química, política, económica, social y biofísicamente –: cómo actuamos ante estos cambios es prácticamente la única dimensión que todavía controlamos. ▀



ecología política

en América Latina

Números actuales y atrasados disponibles en
las Entidades Colaboradoras
(véase listado en www.ecologiapolitica.info)
y en los siguientes puntos comerciales:

ARGENTINA

PROEME - Rodríguez Peña 744 (C1020ADP) - Tel. 48 15-11 90 - Fax 48 15-11 92
Buenos Aires - aguazul@007ciudad.com.ar

CHILE

LIBERALIA Ediciones - Av. Italia 2015-Nuñoa - Tel. 562 432 80 03 - 562 326 86 13
Fax 562 326 88 05 - Santa Fé de Bogotá - info@siglodelhombre.com

COLOMBIA

Siglo del Hombre - Carrera 31A, N° 25B-50 - Tel. 337 94 60 - 344 00 42 - Fax 337 76 65
Santa Fé de Bogotá - info@siglodelhombre.com

ECUADOR

Libri Mundi - Juan León Mera, 23-83 y Wilson - P.O. Box 17-01 -Tel. 252 16 06 -3029
Quito - librimundi@librimundi.com

GUATEMALA

Sophos - Avenida La Reforma 13-89, Zona 10 - Local 1 Centro Comercial El Portal
Tel. 23 34 67 97 - Fax 23 63 24 69 - Guatemala - sophos@sophoslinea.com

MÉXICO

Editorial Juventud SA de CV - Herodoto, N° 42 - Tel. 5203 97 49 Colonia Anzures
11590 México, D. F. - juventud.mex@prodigy.net.mx

VENEZUELA

Euroamericana de ediciones - Avda. Francisco Solano -Edif. Lourdes, piso 4, ofic. 11
Sabana Grande - Tel. 761 22 80 - Fax 763 02 63 - Aptdo. de Correos 76296
1070 Caracas - Venezuela - angelsuc@cantr.net

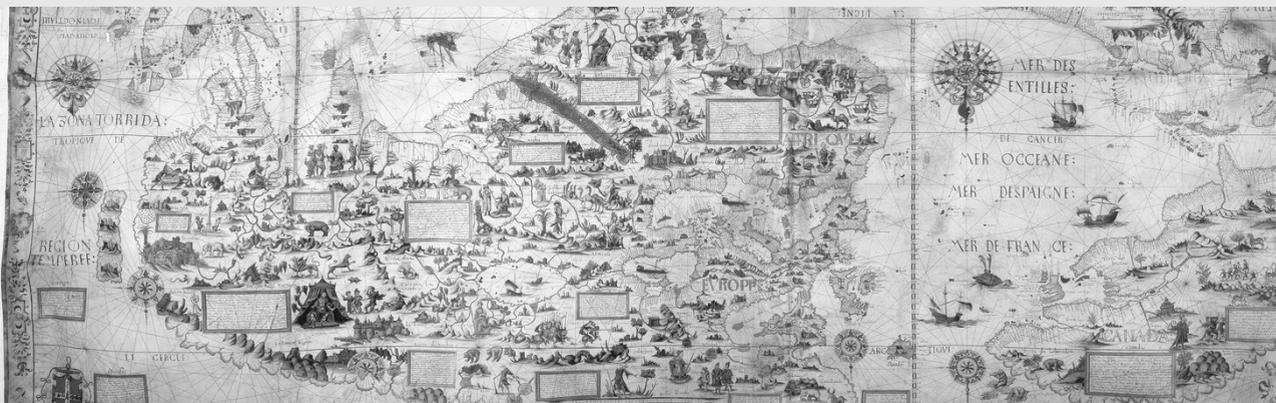
Referentes ambientales

Las fisuras del espacio abstracto hacia el diferencial: los conflictos ambientales entendidos a través de Henri Lefebvre

Carolina Herrmann Coelho-de-Souza

Giro descolonial y nuevas geo-cartografías

Milson Betancourt Santiago



Las fisuras del espacio abstracto hacia el diferencial: los conflictos ambientales entendidos a través de Henri Lefebvre

Carolina Herrmann Coelho-de-Souza*

Traducido por: Bianca Custodio

Henri Lefebvre, filósofo y sociólogo francés (1901-1991) no trata directamente la temática del conflicto ambiental, pero sus teorías relativas al «espacio» proporcionan un entendimiento de estas disputas. Para él, el espacio tiene un contenido social, con diversos sentidos; el espacio es político. El espacio presenta una triplicidad en relación dialéctica: es «percibido» en su base práctica, «concebido» por el orden impuesto y a la vez «vivido» por sus habitantes (Lefebvre, 1991 [1974]).

A continuación presento un fragmento de la teoría del espacio de Henri Lefebvre. Sus conceptos de espacio «abstracto» y espacio «diferencial» son valiosos en el contexto del estudio de los conflictos ambientales desde el enfoque de la ecología política. En efecto, estos conceptos pueden ser recuperados en el estudio de las luchas por la justicia ambiental, en tanto estas luchas buscan romper la «abstracción» en favor de la «diferencia». Además, las consideraciones de Lefebvre permiten dar indicaciones sobre cómo llevar a cabo esta ruptura: la «producción» de un «nuevo» (otro) «espacio».

La comprensión de tales conceptos contribuyen al «análisis espacial» de los conflictos ambientales (Coelho-de-Souza, 2014). Es necesario tener conciencia de la «espacialidad» de la vida humana, expandir su comprensión teórica y

práctica más allá de los confines actuales, paralelamente a los enfoques tradicionales de las dimensiones «históricas» y «sociales» (Soja, 1999).

El espacio abstracto: el espacio de la acumulación

Según Lefebvre (1991 [1974]), la historia del espacio muestra el creciente dominio de la «abstracción» y de lo «visual». Este fenómeno responde a una lógica particular. La «abstracción» es el espacio del capitalismo por excelencia, es el espacio dominante, de los centros de riqueza y de poder, según el autor. Es el espacio de las técnicas, de las ciencias aplicadas, y está definido por la «alienación cosificante».

El espacio abstracto es un instrumento político manipulado intencionalmente por el poder, el cual reproduce los «medios» de producción y sus «relaciones sociales» que se dan en lo cotidiano a través de la totalidad del espacio (Lefebvre, 1991 [1974]).

Según Lefebvre (1991 [1974]), el espacio abstracto oculta bajo su «aparente homogeneidad», bajo su «supuesto consenso», las relaciones reales y los «conflictos», con el propósito de hacer desaparecer las diferencias. El espacio abstracto provoca su propia disolución por los conflictos. Sus fisuras y contradicciones, que en éste y de éste surgen, son lo que le llevan a su final, hacia el espacio diferencial.

* Universidade Federal de Minas Gerais/Brasil
(carolinaherrmanncoelho@gmail.com)

La naturaleza en el espacio abstracto

Según Lefebvre (1991[1974]), el valor de cambio, el «mundo de las mercancías» es impuesto en todo el planeta. El capitalismo se mantiene extendiéndose y ocupando todo el espacio, apoderándose de los espacios preexistentes de la Tierra, adueñándose del suelo, subsuelo y del «sobre suelo».

La naturaleza es distanciada por la técnica, por la ciencia inventada por las sociedades humanas, por la «abstracción»; de esta forma, la naturaleza es modelada, transformada y dominada. Al ser controlada es devastada, arruinada, desnaturalizada; llevando al límite la amenaza sobre la propia especie humana. La violencia de la abstracción es ejercida en las personas, en toda la naturaleza, en los recursos y en los territorios (Lefebvre, 1991[1974]).

Lefebvre (ibid.); 2008 [1973]) argumenta que la naturaleza es la «nueva rareza», que su valor de uso se ha convertido en valor de cambio. Se destruye y transforma la naturaleza según las necesidades de la «sociedad neo-capitalista», siendo generalizada su venalidad (Lefebvre, 2008 [1973]). El «espacio-naturaleza» es sustituido por el «espacio-producto» (Lefebvre, 1975; 1991 [1974]).

Esta estrategia destruye el porvenir para atender los intereses inmediatos, es la trágica supremacía del «espacio» (abstracto) sobre el «tiempo» que se puede observar en la naturaleza (Lefebvre, 1991 [1974]). En contraposición a la finitud de la naturaleza y de la tierra se opone la ciega creencia en la potencia infinita de la abstracción (Lefebvre, 1991[1974]).

El espacio diferencial

Lefebvre (ibid.) afirma que la «diferencia» es una teoría difícil e inacabada, que va de lo «concebido a lo vivido», partiendo del contexto actual para transgredirlo, y que para ello se hace necesario actuar en las fisuras del espacio abstracto. El concepto de diferencia es una reflexión intelectual que tiene lugar sobre la práctica, la diferencia no

puede darse exclusivamente en el pensamiento.

La diferencia rechaza y se opone a «lo que ya está dado, lo conocido, para revelar y afirmar diferencias» (Nasser y Fumagalli, 1996: 29, traducción propia). Las diferencias están al margen de la homogeneización del espacio abstracto, ellas son resistencias, exterioridades; el distinto es el excluido, el periférico (Lefebvre, 1991 [1974]).

El camino para que la diferencia alcance a lo concreto pasa por un «contra-espacio», un «contraproyecto». En otros términos, las fuerzas que se oponen a las intenciones estratégicas del espacio abstracto, son obstáculos que se instalan en su interior. Es la «negación activa», «teórica y práctica» que se opone a lo abstracto.

El paso para la realización de las diferencias

De acuerdo con las reflexiones de Lefebvre (1975), es necesario que se entienda que no hay solamente una lógica en la sociedad sino más bien varias lógicas. La amplia transición podrá definirse de muchas formas, distintas y convergentes (Lefebvre, 1991[1974]).

La revolución requiere la capacidad creadora de obras en la vida cotidiana, en el lenguaje, en la práctica, en el espacio (Lefebvre, 1991[1974]). Según el autor, una transformación en la sociedad presupone la posesión y gestión común del espacio, que se logra mediante la intervención activa y continua de las interesadas en un espacio que es apropiado y no dominado. Lefebvre plantea rehabilitar el uso contra el intercambio. Es necesario una «vida nueva» (otras prácticas sociales) para un «espacio nuevo» y viceversa (Lefebvre, 1991[1974]).

El movimiento del «posible-imposible»

Las relaciones de producción del espacio abstracto rompen los espacios de la «utopía»; de este modo las posibilidades prácticas se reducen (Lefebvre, ibid.). En el horizonte se abren múltiples posibilidades para crear, estimuladas además por

«sueños» e «imaginación». La utopía para Lefebvre es, en los términos de Ernst Bloch (1977), una «utopía-concreta» dirigida a la realidad, que existe solamente como posibilidad objetiva, vinculada a lo «real-posible».

La producción de un nuevo (otro) espacio exige un proyecto teórico y práctico de largo plazo (Lefebvre, *ibid.*). Este proyecto debe vencer la distancia entre «ciencia» y «utopía», «realidad» e «idealidad», y debe tender a explorar la relación dialéctica «posible-imposible» (Lefebvre, *ibid.*). La «imposibilidad» está dentro del espacio abstracto, dentro de sus «condiciones», diría Bloch (1977). Pero en ciertas condiciones el imposible se hace posible, cuando las «condiciones» pasan a ser «existentes» (Bloch, 1977).

Ahora más que nunca, no existe pensamiento sin utopía, si nos damos por satisfechos en constatar, en ratificar, lo que tenemos ante nuestra vista, no iremos muy lejos, permaneceremos con los ojos fijos en lo real (...) nos hallamos ante límites que hacen muy difícil discernir entre lo posible y el imposible (Lefebvre, 2008 [1973]: 73, traducción propia).

Del movimiento «posible-imposible» surge la diferencia. En otros términos, «el movimiento mediante el cual el *posible* es la diferencia que logra romper, transgredir y vencer lo homogéneo y que al alcanzar este propósito genera, como capacidad diferencial, la posibilidad de transformación de la práctica social» (Nasser y Fumagalli, 1996: 35, traducción propia).

Lefebvre (1975: 129, traducción propia) concluye:

El diferencialismo no es un sistema. ¿Se trata de discutir acerca de la diferencia? No. Se trata de vivir, no de pensar, sino de «ser» diferente. ■

Referencias

- COELHO-DE-SOUZA, C. H. (2014), «A necessária utopia: uma das representações do espaço da resistência na Serra do Gandarela». En *Anales del International colloquium Epistemologies of the South: South-South, South-North and North-South global learning* - Coimbra, 10, 11, 12 de julio de 2014 publicado en *Revista Crítica de Ciências Sociais*. Coimbra/Portugal: Proyecto ALICE / CES – Universidad de Coimbra.
- BLOCH, E. (1977), *El Principio Esperanza. Tomo I*. Madrid: Aguilar.
- LEFEBVRE, H. (1975), *El Manifiesto Diferencialista*. 2ª Ed. México: siglo veintiuno.
- LEFEBVRE, H. (2008 [1973]), *Espaço e política*. Belo Horizonte: Editora UFMG.
- LEFEBVRE, H. (1991 [1974]), *The Production of Space*. Oxford: Blackwell.
- NASSER, A.C.A. y FUMIGALLI, M. (1996), «A opressão da equivalência, as diferenças». En Martins, J. S. (coord.) *Henri Lefebvre e o retorno à dialética*. São Paulo: Editora Hucitec.
- SOJA, E.W. (1999), *Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places*. Oxford: Blackwell (reimpresión).

Giro descolonial y nuevas geocartografías

Milson Betancourt Santiago*

«Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador»

Proverbio africano
(Citado por Galeano, 1997).

La historiografía clásica nos ha acostumbrado a ciertos nombres y cartografías, que hacen parte de nuestras geografías mentales y reales, sin cuestionarlas, asumiendo el punto de vista de las vencedoras y sus hacedoras de historia y geografía. Nombres como América Latina, Colombia, Brasil, Chile, Bolivia y Ecuador no se discuten en el grueso del pensamiento geográfico e histórico; por el contrario, se dan como hechos dados. Sin embargo, si escudriñamos un poco en sus orígenes – sobre todo en las múltiples violencias que necesitaron, y aún necesitan, para establecerse como hechos dados – saltarán a nuestros ojos montañas y selvas pobladas de realidades que continúan hoy ignoradas, oprimidas, dominadas, sub-alternizadas pero, sin embargo, r-existentes (Porto-Gonçalves, 2001) frente a las configuraciones geográficas hegemónicas de la geopolítica de América Latina y sus Estados-nación. Desde estas montañas se r-existe, esto es, se resiste a partir de una existencia propia, y diferenciada, frente al proceso de construcción, expansión/invasión de las geopolíticas moderno-desarrollistas de los proyectos hegemónicos nacionales y latinoamericanos.

En las últimas décadas se ha venido fortaleciendo una corriente de pensamiento, que se ha autodenominado como «Grupo Modernidad-Colonialidad», pero que también es conocida como «Giro Descolonial», y que busca entender la compleja y múltiple escalaridad de un mismo proceso global, la de la formación del capitalismo y del sistema moderno-colonial.

Esta corriente tiene entre sus principales tesis afirmar: a) que el fin del colonialismo no significó el fin de la colonialidad, b) que la colonialidad y la modernidad son dos caras de la misma moneda, c) que la colonialidad y la modernidad fueron procesos mutuamente constitutivos, desde siempre, en la formación del capitalismo, y d) que el Estado-nación es el aparato ideal y necesario para la continuidad de la expansión de la colonialidad a todos los rincones del mundo, allí donde no llegó en la época de la colonia¹.

En este marco de comprensión estamos de acuerdo con el grupo modernidad-colonialidad cuando se afirma que la colonialidad, como proyecto epistémico, económico, social, político y cultural, no terminó con el fin del régimen colonial formal (Quijano, 2007); más bien se prolongó, expandió y profundizó, a lo largo de la conformación de los Estados-nación latinoamericanos y sus políticas de desarrollo y modernización (Betancourt et al., 2013). Esto ha sido denominado como

* Doctorante en geografía de la Universidad Federal Fluminense, Brasil. (betancourt.milson@gmail.com)

¹ Un resumen de estos postulados básicos puede ser visto en un documento de reciente publicación por Clacso en: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdll/collect/clacso/index/assoc/D9261.dir/TrabajoFinal.pdf>. Entre los autores más destacados de esta corriente de pensamiento podemos mencionar a los contemporáneos: Pablo González Casanova, Silvia Rivera Cusicanqui, Anibal Quijano, Ramón Grossfoguel, Arturo Escobar, Carlos Walter Porto-Gonçalves, Walter Mignolo, pero hunden sus raíces en pensadores como Aimé Césaire y Frantz Fanon, entre otros.

la colonialidad del poder, del saber, del ser, que se continúa proyectando, expandiendo/ invadiendo, sobre la otredad de las formas de vida que existen en este continente.

Así, entendemos que no es casual que la mayoría de conflictos ambientales, por obras de infraestructura o por proyectos de extracción de recursos naturales, ocurran en estos espacios, donde aún subsisten comunidades y pueblos, que han constituido desde hace miles de años sus raíces sociales, su hábitat – y por tanto sus territorialidades – como base material de su existencia, en los márgenes espaciales de los ordenamientos territoriales de la colonia, de los Estados-nación y de los recientes planes de modernización y desarrollo. Desde allí aún reclaman el derecho a una existencia diferente y un espacio territorial en donde puedan practicarla. Si bien sus luchas son múltiples y centenarias, más recientemente, desde la ecología política, se les ha venido denominando como luchas eco-socialistas, o como ecologismo popular, o ecologismo de las desposeídas. Pues no sólo buscan cuidar su territorio – su hábitat – para conservar la naturaleza separada de la cultura (como en el episteme más moderno) sino cuidarlo para, con el poder seguir viviendo, seguir existiendo con dignidad.

Desde estas múltiples perspectivas de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas subalternizadas no deja de ser una violencia epistémica, con su componente de violencia física, llamar sus territorios ancestrales *de América*: Europa homenajéandose a sí misma. Peor aún es llamarles territorios ancestrales de América Latina, y es que ¿por qué, a pesar de que el 99% de lenguas habladas en esta porción de territorio no son latinas, se califica el territorio total como latino? ¿Por qué no se reconocen las raíces amerindias y africanas en el carácter de definición geo-cultural del continente? Como señala la socióloga aymara Silvia Rivera Cusicanqui, «América Latina» no deja de ser un invento francés: un

recorte espacial denominado desde Europa para diferenciar la América Anglosajona (colonizada por los pueblos anglosajones) de la América Latina (colonizada por los pueblos latinos) con el fin de fortalecer sus lazos coloniales y la continuidad de sus hegemonías latinas sobre América, en el contexto de las disputas geopolíticas entre los estados franceses e ingleses. Como sugiere el geógrafo brasileño Pedro Quental (2012), la historia de nombres y conceptos determina formas de ver la realidad, por lo que la desnaturalización del concepto de América Latina tiene consecuencias políticas y epistémicas. En el mismo sentido, afirma Mignolo (2003) que la constitución de América Latina dentro de la constitución del sistema-mundo moderno-colonial se forjó a partir de la subalternización de saberes, epistemologías y representaciones propias del mundo, con sus nombres determinados.

Ante esta situación existen diversas luchas por el derecho a autonombrarse; no son luchas menores, sino reivindicaciones epistémicas y políticas con todos sus contenidos sociales y económicos. Tal vez la más conocida sea la fórmula *Abya-Yala/América Latina*, como expresión de otra geopolítica, en la medida que busca reconocer la forma propia como los pueblos originarios autodenominan su territorio, este continente, desde su tiempo-espacio propio. *Abya Yala* significa «tierra madura», «tierra viva», o «tierra en florecimiento» en la lengua del pueblo Kuna que habita la esquina noroccidental suramericana, en las actuales costas caribeñas de Colombia y Panamá. Diversos movimientos indígenas reivindican su uso en preferencia y frente a América, y la reivindican como signo de unidad de los pueblos de Abya Yala que justo sufrieron la construcción de esa América. La frase que exige contundentemente «No más América Latina sino Abya Yala» resalta el contenido profundo de esta otra geopolítica. Esta expresión fue usada en una carta de reconocidos intelectuales del mundo a Hugo

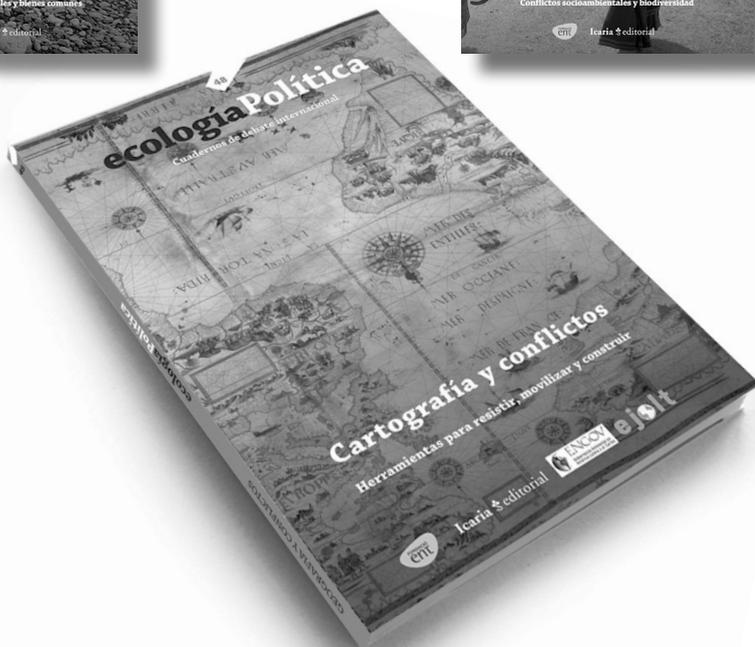
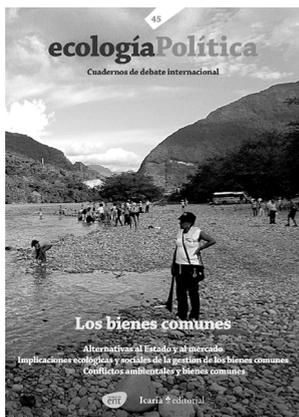
Chávez en el contexto de la muerte de una importante líder indígena del pueblo Yukpa en la Sierra de Perijá en la frontera entre Colombia y Venezuela, dónde la expansión de la explotación de minerales y ganadería, tienen arrinconados, como en muchos otros lugares de Abya Yala, a los pueblos originarios².

Esta frase y toda su lucha epistémica y política cobra importancia central justo hoy, cuando diversas obras de infraestructura de desarrollo e integración de América Latina, con sus componentes de megaproyectos de extracción de recursos naturales, avanzan sobre Abya Yala, sus pueblos y comunidades, provocando cientos o miles de conflictos en los territorios por ellos ancestralmente habitados. Parafraseando al sociólogo portugués Boaventura de Souza Santos («no hay justicia social sin justicia cognitiva global»), de igual manera afirmamos aquí: no habrá justicia social y ambiental, sin justicia epistémica y territorial global. ▀

Referencias

- BETANCOURT, M.; HURTADO, L., PORTO-GONCALVES, C. (2013) *Tensiones territoriales y Políticas públicas de desarrollo en la Amazonia. Los casos del Territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure en Bolivia y el Área de Manejo Especial de la Macarena en Colombia*. Concurso CLACSO-Asdi 2013 «Estudios sobre políticas públicas en América Latina y el Caribe: Ciudadanía, democracia y justicia social». Publicado en: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdll/collect/clacso/index/assoc/D9261.dir/TrabajoFinal.pdf>
- MIGNOLO, W. D. (2003) *Histórias Locais / Projetos Globais: Colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar*. Belo Horizonte: UFMG.
- QUENTAL, P. (2012) «A Latinidade do conceito de América Latina.» *GEOgraphia (UFF)*, v. 14, p. 21-45, 2012.
- QUIJANO, A. (2007) «Colonialidad del poder y clasificación social» en: Castro-Gómez, Santiago y Grosfoguel, Ramón (comp.) *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Siglo del Hombre Editores, Bogotá.
- PORTO-GONÇALVES, C.W. (2001) *Geo-grafias. Movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidades*. México. D.F.

2 Ver: <http://web.laclase.info/content/la-lucha-de-sabino-nomas-america-latina-sin-abya-yala/>



ecologíaPolítica

¡Suscríbete!

Si todavía no estás suscrita o suscrito puedes hacerlo por las siguientes vías:

Entra en www.ecologiapolitica.info

Llama al **93 893 51 04**

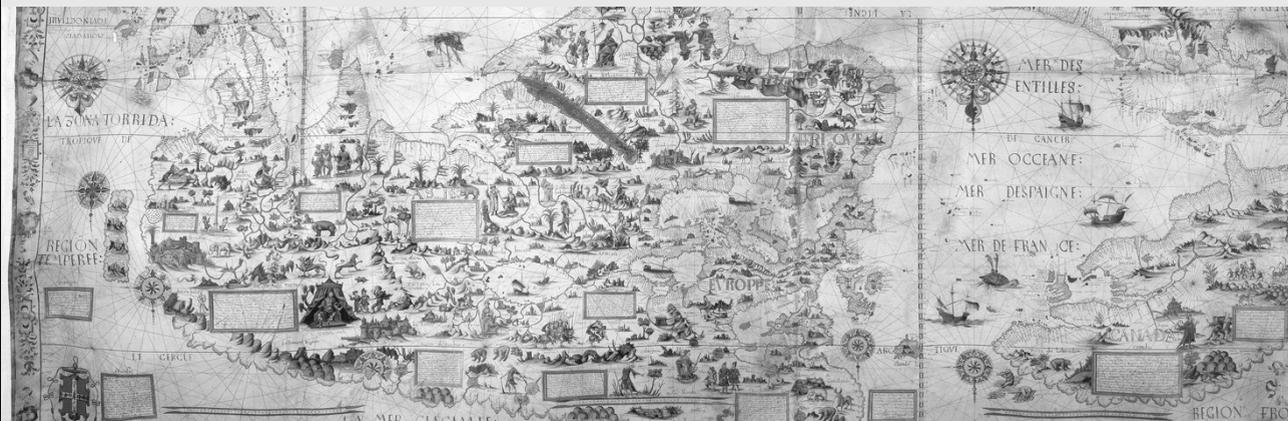
Envía un correo a suscriptores@ecologiapolitica.info

La suscripción anual es de 2 números y cuesta 25 euros

Crítica de libros, informes y webs

Hollando espacios (urbanos) ignotos. Explore Everything: Place-Hacking the City de Bradley L. Garrett

Santiago Gorostiza



Hollando espacios (urbanos) ignotos. *Explore Everything: Place- Hacking the City.*

Autor: GARRETT, Bradley L. (2013)
Explore Everything: Place-Hacking the City.

Editorial: Verso

Año: 2013

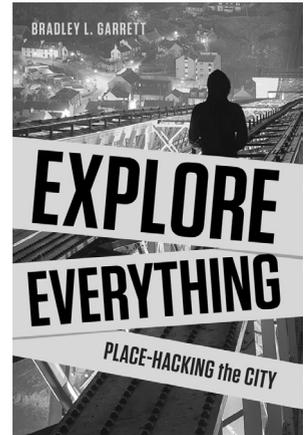
ISBN-13:978-1-78168-129-9

Idioma: Inglés.

273 pp.

<http://www.bradleygarrett.com>

Crítica del libro: Santiago Gorostiza*



A principios del siglo XXI parece que las romantizadas «grandes eras de la exploración» tocan a su fin. Las nuevas fronteras para el «descubrimiento» son cada vez más remotas, investigadas por satélites de alta tecnología: las profundidades marinas, los espacios «vírgenes» en las selvas o el espacio exterior. Y sin embargo, existen otros espacios, irónicamente mucho más cercanos a nuestra cotidianeidad, que permanecen fuera de los mapas y del conocimiento de la mayor parte de la población. En estos lugares – nuestras ciudades, sus profundidades, sus rascacielos, sus infraestructuras, sus zonas abandonadas – también encontramos fronteras a nuestra curiosidad y a nuestros deseos de conocer y explorar. A menudo, estas fronteras coinciden con las de lo público y lo privado, y están marcadas por una creciente vigilancia. Hay múltiples ejemplos a lo largo de todas las ciudades del mundo: estaciones de metro y ferrocarril abandonadas, refugios antiaéreos de la Segunda Guerra Mundial, proyectos de suministro de agua o electricidad dejados a medias... pero también rascacielos en construcción, terrazas de iglesias inaccesibles al turismo o torres de telecomunicaciones obsoletas. Explorar las entrañas y las alturas de los espacios urbanos – y documentar la actividad de aquellos grupos

* Centro de Estudos Sociais (Universidade de Coimbra), European Network of Political Ecology (ENTITLE), (sgorostiza@ces.uc.pt).

de personas dispuestas a hacerlo – fue uno de los elementos centrales de la investigación doctoral de Bradley L. Garrett. Tras estudiar Antropología e Historia, y con varios años de experiencia como arqueólogo a sus espaldas, Garrett se embarcó en un doctorado en geografía para estudiar a los exploradores urbanos. *Explore Everything: Place-Hacking the City* es la monografía resultante de su tesis doctoral, una investigación etnográfica de cuatro años entre exploradoras urbanas de la zona de Londres. Una tesis con un epílogo poco común: la detención de su autor y otras exploradoras por parte de la Policía Británica de Transporte (*British Transport Police*), que confiscó también buena parte de su documentación¹.

No muchas investigaciones académicas reciben este tipo de atención por parte de las autoridades. Y es que hay un detalle importante sobre la exploración urbana: se hace sin pedir permiso. De la misma manera que cuando caminamos por el campo a veces no

1 Como ejemplos de la atención periodística recibida por el trabajo de Garrett en los que se dan más detalles sobre esta historia, ver «Excuse Us While We Kiss the Sky», <http://www.gq.com/news-politics/newsmakers/201303/urban-explorers-gq-march-2013>, por Matthew Power, consultado el 28 de octubre de 2014; ver también «The strange world of urban exploration», <http://www.theguardian.com/books/2013/sep/20/urban-exploration-robert-macfarlane-bradley-garrett>, por Robert Macfarlane, consultado el 28 de octubre de 2014.

dudamos en abrir una verja para seguir con nuestro camino, las exploradoras urbanas buscan los modos de alcanzar los espacios ansiados sin preocuparse por las fronteras que les son impuestas. Llegar a la cima de un rascacielos en construcción o caminar por el andén de una polvorienta estación de metro abandonada puede requerir saltar algunas verjas y transgredir algunas barreras – muchas veces más mentales y sociales que no materiales. Ahora bien, la ética de estas exploradoras, cuyo perfil personal es muy variado, incluye un gran respeto por la preservación de los espacios que visitan. Se trata de conocerlos, experimentarlos y documentarlos; no de alterarlos ni destruir nada para acceder a ellos. Simplemente, buscan un camino que permita alcanzarlos.

Garrett reivindica una dimensión política en las acciones de exploración urbana. Para el autor, la exploración es en parte una respuesta al creciente control y vigilancia ejercido sobre las ciudades; una manera de poner a prueba los límites de este control y de buscar relaciones personales y sin intermediarios con los espacios urbanos (Garrett, 2014). El autor considera que la exploración urbana es subversiva en tanto que permite ocupar y reimaginar temporalmente espacios de la ciudad, de un modo parecido al arte urbano, el *parkour* o el *skateboarding*. Mostrando los límites del espacio público mediante la respuesta de las autoridades a la infiltración de las exploradoras, se pone en evidencia la privatización de ciertos espacios y el control y vigilancia ejercido sobre ellos. De este modo, considera que se logra hackear el discurso del poder sobre qué se puede y qué no se puede hacer; dónde se puede acceder y dónde no.

Distintos aspectos de la exploración urbana pueden relacionarse con la ecología política de las ciudades. La exploración urbana nos recuerda la relevancia de la verticalidad – las *otras* ciudades que se encuentran bajo tierra y también a distintas alturas sobre la misma, y nos invita a reflexionar sobre quién se beneficia y quién queda marginado de estos espacios. Además, reivindica la importancia de las infraestructuras en el metabolismo urbano que permite el funcionamiento cotidiano de las ciudades. Las exploradoras deambulan por el entramado de tubos y canales que forman el metabolismo urbano y que permanece lejos de nuestra mirada; caminan por los intersticios de la ciudad, las venas que la han alimentado y depurado desde hace siglos. Observando antiguas cisternas de agua,

curioseando por antiguas catacumbas, accediendo a búnkers sellados hace décadas o admirando las obras de higienización urbana del siglo XIX obtienen un contacto directo con la historia, sin intermediarios ni intérpretes (Garrett, 2011). Entender los espacios y las infraestructuras de la ciudad en tanto que conectados a determinados proyectos históricos de modernización y regímenes políticos es fundamental para un análisis desde la ecología política urbana.

Tal vez algunas lectoras tengan dudas sobre la interpretación teórica que Garrett otorga a la exploración urbana, y puede que otras echen de menos un tratamiento más pormenorizado de algunas críticas, como por ejemplo la que denuncia la presencia de una cultura masculinizada subyacente en la exploración urbana (Mott y Roberts, 2014). Pero muy probablemente van a disfrutar de un libro bien narrado, que se lee como una *road movie* en la que las aventuras de un pequeño colectivo y sus encuentros con agentes de seguridad se entrelazan con la discusión teórica sobre geografía, antropología e historia, aderezadas con unas soberbias fotografías, adrenalina y cierta dosis de alcohol. En cualquier caso, es probable que cuando cierre el libro, el lector observe la ciudad con otros ojos: preguntándose en qué lugares no ha estado; cómo deben ser las vistas desde la terraza de ese rascacielos recién erigido por una multinacional, o qué túneles hay debajo de ese antiguo hospital abandonado. Si así fuera, la lectura habría cumplido buena parte de su función. ■

Referencias

- GARRETT, B. L. (2011), «Assaying history: creating temporal junctions through urban exploration». *Environment and Planning D: Society and Space* 29(6) p. 1048 – 1067.
- GARRETT, B. L. (2014), «Undertaking recreational trespass: urban exploration and infiltration». *Transactions of the Institute of British Geographers*, 39: p. 1–13.
- MOTT, C. y ROBERTS, S. M. (2014), «Not Everyone Has (the) Balls: Urban Exploration and the Persistence of Masculinist Geography». *Antipode*, 46: p. 229–245.

Entidades colaboradoras

La revista Ecología Política quiere ampliar su difusión entre organizaciones y movimientos sociales, para así conseguir llegar a un público más amplio. Al mismo tiempo la revista espera ser un canal de difusión que permita apoyar a los colectivos y movimientos sociales interesados en «ecología política». Por ello hemos creado la figura de ENTIDAD COLABORADORA DE LA REVISTA ECOLOGÍA POLÍTICA. Mediante esta figura las entidades colaboradoras se comprometen a distribuir la revista a todas las personas que estén interesadas y a cambio consiguen revistas a un precio reducido para su posterior distribución. Si estáis interesados buscad información más detallada en www.ecologiapolitica.info o escribid un correo electrónico a secretariado@ecologiapolitica.info

Entidades colaboradoras:



CENSAT Agua Viva
<http://www.censat.org>
Diagonal 24, nº 27 A-42
Bogotá, Colombia



VSF Justicia Alimentaria Global
<http://vsf.org.es>
C/ Floridablanca, 66-72,
08015 Barcelona, España



GOB, Grup Balear d'Ornitologia
i Defensa de la Naturaleza
<http://www.gobmallorca.com/>
Manuel Sanchis Guarner, 10 bajos, 07004
Palma de Mallorca, Mallorca, España



Ekologistak Martxan
<http://www.ekologistakmartxan.org/>
Ekoetxea C/ pelota 5, bajo.
48005, Bilbao



Observatori del Deute en la Globalització
<http://www.odg.cat>
C/Girona 25, principal, 08010, Barcelona,
España



ENTREPUEBLOS
<http://www.pangea.org/epueblos/>
Plaça Ramon Berenguer El Gran, 1, 3r-10
08002 Barcelona, España



FUHEM
<http://www.fuhem.es>
Duque de Sesto, 40 - 28009, Madrid



Amigos de la Tierra
<http://www.tierra.org/>
Calle Jacometrezo 15, 5º J
28013 Madrid, España



Coordinadora El Rincón-Ecologistas
en Acción
<http://www.ecologistasenaccion.org/elrincon>
Islas Canarias, España



GREENING BOOKS
www.bookdaper.es
bDAP197

Ecología Política 48
Fundació ENT, 2014
El Tinter, SAL

GESTIÓN AMBIENTAL - Certificados ambientales de las empresas

<p>Diseño e Impresión El Tinter SAL</p>		<p>EMAS ISO 14001 ISO 14006 FSC CoC</p>		
--	---	---	---	--

MATERIALES - Papeles - Certificados ambientales de los papeles empleados

<p>cartulina Geminis FSC estucada mate 1/C 240 gr</p>	<p>TCF FSC 100%</p>		<p>Papel totalmente libre de cloro en su proceso de fabricación (TCF - Totally Chlorine Free)</p> <p>Papel elaborado a partir de fibra que procede en su totalidad de bosques gestionados y certificados de acuerdo a los principios y criterios de FSC</p>
<p>Cocoon 90g 70x102</p>	<p>EU ecolabel PCF FSC 100% reciclado</p>		<p>Ecoetiqueta de la Unión Europea para papel para copias y papel gráfico</p> <p>Papel sin cloro en el último ciclo de producción (PCF - Processed Chlorine Free)</p> <p>Papel fabricado a partir de material 100% reciclado</p>

BUENAS PRÁCTICAS - Buenas prácticas ambientales verificadas de las empresas

	El Tinter SAL
	- Diseño, impresión -
Tamaño de página ajustado al formato del papel	■
Tintas con aceites vegetales	■
Uso de planchas de trama estocástica	■
Minimización de residuos	■

MOCHILA ECOLÓGICA - Cálculo de la mochila ecológica de un ejemplar de la publicación

<p>Masa publicación (g)</p>	 <p>Huella de carbono (g CO₂ eq.)</p>	 <p>Residuos generados (g)</p>	 <p>Consumo agua (L)</p>	 <p>Consumo energía (MJ)</p>	 <p>Consumo materias primas (g)</p>
253	568	33	11	16	233
Ahorros*:	110	5	2	3	30

* Impacto ambiental ahorrado respecto a una publicación común similar

En este número la revista Ecología Política se centra en la relación entre la Ecología Política, la geografía y el uso de mapas.

Se trata de un número especial en el que se presentan resultados de los proyectos europeos de investigación EJOLT, ENGOV y un proyecto Español sobre metabolismo social. No obstante en la revista encontraréis también artículos y entrevistas especialmente realizadas para la ocasión. En total, casi 20 artículos sobre la temática.

También ponemos a vuestra disposición la web de ecología política: www.ecologiapolitica.info para poder suscribirse a la revista y acceder a la versión electrónica de los primeros 46 números de la revista. Igualmente tenéis a vuestra disposición nuestro twitter [@Revista_Eco_Pol](https://twitter.com/Revista_Eco_Pol) y facebook facebook.com/revistaecopol para manteneros permanentemente informados sobre las principales novedades en el ámbito de la ecología política.

ISSN 1130-6378



9 771130 637008

48



PVP: 15€